

JÓVENES EN RIESGO

**DE ASESINATO POR LA
VIOLENCIA POLICIAL RACISTA**
en Barrios Unidos de Cartagena







JÓVENES EN RIESGO

**DE ASESINATO POR LA
VIOLENCIA POLICIAL RACISTA**
en Barrios Unidos de Cartagena





Jóvenes en riesgo de asesinato por la violencia policial racista en Barrios Unidos de Cartagena

**Centro de Investigación y Educación Popular
/ Programa por la Paz**

Directora general
Martha Lucía Márquez

Subdirector de programa
Juan Pablo Guerrero Home

**Coordinadora programa Movilización,
DD. HH. e Interculturalidad**
Jenny Paola Ortiz Fonseca

Autoras/es
Leidy Laura Perneth Pareja
Víctor de Jesús Padilla Amador
Leidy Karina Sabogal Ospina
Yoanis Vanessa arroyo castillo
Edgar Luis Guerrero Zabaleta

**Coordinadora de Comunicaciones
e Incidencia**
Diana Patricia Santana Jiménez

Coordinación editorial
Oficina de publicaciones Cinep/PPP

Corrección de estilo
Lorena Vides Galiano

Diseño y diagramación
Fabio Alexander Jiménez Martínez

Impresión
Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S

Cinep/Programa por la Paz
Carrera 5 #33B-02
PBX: (+57 601) 2456181
Bogotá, D.C., Colombia
www.cinep.org.co

Primera edición, agosto de 2025
Bogotá, D.C., Colombia

ISBN: 978-958-644-402-6

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de los/as autores/as y no comprometen al Cinep/PPP o a las agencias o entidades que cooperan en su publicación. Asimismo, su contenido puede ser utilizado total o parcialmente siempre y cuando se notifique y se cite como fuente al Cinep/PPP.

La publicación de este documento es posible gracias al apoyo financiero del Gobierno Vasco y Alboan.

El contenido de este libro cuenta con una licencia Creative Commons “Reconocimiento No comercial-Sin obra derivada 4.0”.



-  CinepProgramaporlaPaz
-  Cinep_ppp
-  Cinep_ppp
-  Cinepppp
-  CINEP/PPP
-  @cinep_ppp



CONTENIDO

06	Introducción
12	Nuestros posicionamientos conceptuales, políticos y metodológicos
13	Raza y racismo
16	Necropolítica, <i>homo sacer</i> y “nuda vida”
19	Violencia policial racista
22	Nuestra metodología
25	Algunos datos sobre violencia policial racista en Cartagena
28	Del cerro de La Popa a Barrios Unidos. Segregación racial, criminalizaciones racializadas y violencia policial racista
30	<i>Homo sacer</i> y “nudas vidas” negras en los procesos de segregación racial en Cartagena: entre el cerro de La Popa y Barrios Unidos



40	Violencia policial en Barrios Unidos
41	Territorios de excepción. Antes y después de la pandemia
58	Criminalización racializada del consumo y el consumidor
72	Relatos de vida. Ser un joven negro de/en Barrios Unidos
73	Criminalización de las estéticas, violencia e hipervigilancia de jóvenes negros
76	<i>Andrés</i>
79	Criminalización del consumidor
80	<i>Javier</i>
83	<i>Jorge</i>
85	<i>Víctor</i>
90	¿Puede ser reparada la violencia policial? Algunas recomendaciones
96	Referencias



INTRODUCCIÓN



La violencia policial racista ha sido histórica y sistemática en la ciudad de Cartagena, afectando de manera particular a jóvenes negros que habitan en barrios populares empobrecidos. Las denuncias de comunidades, organizaciones y movimientos sociales sobre este tipo de violencia, y la impunidad con la que actúa la policía, se agudizaron en el 2020 en el contexto del aislamiento social preventivo decretado por la pandemia de la COVID-19, donde la policía ejerció poder desproporcionado para regular y controlar el espacio público, llegando al límite de la violencia policial homicida en algunos barrios de la ciudad.

El 24 de agosto de 2020 la policía asesinó a Harol Morales Payares, un joven negro futbolista de 17 años, habitante del barrio San Francisco. Este asesinato impulsó la construcción de un tejido social organizativo para acompañar a su familia y a la comunidad en la lucha por la justicia y contra la impunidad en casos de violencia policial. Otros eventos ocurridos en el país —durante el 2020 y en años previos— venían agitando el malestar social frente a la violencia letal ejercida por agentes de esta institución: el paro del 2019 (21N), donde fue asesinado joven Dylan Cruz; el asesinato de cinco adolescentes negros, en un cañadulzal ubicado en la comuna 15 de Cali (11 de agosto de 2020); el asesinato de Javier Ordoñez en Bogotá (septiembre de 2020), y la masacre de 14 jóvenes en Bogotá (9 y 10 de septiembre de 2020).

En Cartagena, el asesinato de Harold enfatizó la discusión sobre la violencia policial atravesada por una matriz racista¹, atendiendo a las siguientes premisas:

1. La sistematicidad de la violencia policial en Cartagena contra jóvenes negros no se ejerce únicamente en contextos de protesta social.
2. La asociación entre violencia policial y protesta social ha llevado a imaginar como víctimas —casi exclusivamente— a jóvenes estudiantes (casi siempre universitarios) o jóvenes en la categoría de líderes sociales o defensores de derechos humanos. De esta forma, se excluye de la noción de víctima a otros jóvenes negros barriales perfiles por la policía, toda vez que son definidos desde la criminalización (el consumidor, el bandido, el desertor de la escuela, el vago, entre otros).

1. Matriz de dominación es una categoría propuesta por la feminista afroamericana Patricia Hill Collins (2000) para referirse a la manera en que se imbrican los sistemas de opresión de raza, clase social género y sexualidad. En sus palabras, el término describe la organización social general dentro de la cual se origina, se desarrolla y se contiene la intersección de las opresiones.

3. Sobre muchos de los jóvenes negros violentados y/o asesinados por la policía en barrios empobrecidos, operan imaginarios criminalizantes que parecen despojarlos de su estatus de ciudadanía. Mientras el líder o estudiante se hace un sujeto moral y políticamente defendible, otros jóvenes parecen no serlo y sus muertes no son vistas o definidas como delito. Así, las discusiones políticas alrededor del asesinato de Harold contribuyeron a profundizar el análisis sobre lo que estaba ocurriendo en el barrio San Francisco, donde muchos jóvenes son definidos como criminales y sus vidas, descartables/desechables. Justo en este escenario la violencia policial actúa con legitimidad, invisibilidad y total impunidad.

Las organizaciones y movimientos sociales, que se han movilizado alrededor del asesinato de jóvenes negros en Cartagena, siempre han manifestado su preocupación por que las vidas negras en nuestra ciudad parecen no importar, o importar menos; su muerte no genera duelo y movilización social a nivel local y nacional. De esta manera, es necesario documentar la violencia policial en la ciudad para seguir desnormalizando y deslegitimando esta violencia, así como identificar patrones de actuación, exigir justicia, luchar contra la impunidad, honrar a las víctimas y exigir reparación y no repetición.

Fue así como nuestras organizaciones, Resistimos Desde el Sur y la Comisión Especial de Derechos Humanos de Cartagena, con el acompañamiento del Cinep/PPP, decidimos realizar esta documentación sobre violencia policial en Barrios Unidos, una zona de expansión urbana ubicada hacia las afueras de la ciudad en la zona suroriental, colindante con el municipio de Turbaco. Barrios Unidos se configuró a partir de procesos de reubicación de familias que habitaban en la zona norte de la ciudad —en las faldas del cerro de La Popa—, cuyas viviendas se encontraban en riesgo de deslizamiento, siendo particularmente afectadas por olas invernales ocurridas entre el 2004 y el 2007. De igual forma, en esta zona han sido ubicadas personas víctimas del desplazamiento forzado, a quienes se les entregó viviendas como medida de reparación; también, desmovilizados de grupos armados y, en algunos casos, personas con discapacidad. Actualmente, integran lo que se conoce como Barrios Unidos: *Flor del Campo*, *Colombiatón*, Bicentenario y Villas de Aranjuez.

Quienes hacemos parte el colectivo Resistimos Desde el Sur habitamos en dos de estos barrios: *Flor del Campo* y *Colombiatón*; por ello, centramos la documentación en estos territorios. Desde el 2019, la territorialidad que habitamos nos ha interrogado profundamente. Como jóvenes, una de nuestras preguntas iniciales fue: ¿por qué vivimos aquí? Esto nos llevó a reflexionar sobre la segregación racial en Cartagena. A partir de esta pregunta, surgieron investigaciones acompañadas por Fe y Alegría y el Cinep/PPP entre el 2019 y el 2021.

En la investigación titulada *De la popa a Flor del Campo. Reconstrucción del proceso de reubicación de familias de Loma Fresca y La María*, concluimos que realmente la reubicación es un discurso institucional que se gestiona en nombre de una promesa de dignidad y

protección de la vida en espacialidades con riesgo ambiental, pero que encubre un patrón sistemático de segregación racial. La reubicación fracturó nuestra relación social, económica y recreativa con el norte de la ciudad, que ahora percibimos como distante e inaccesible, mientras esa promesa dignificación no se cumplió. Además, nosotrxs encontramos que los mismos imaginarios que se tenían de nuestras comunidades cuando habitábamos las periferias de la zona norte, asociados a la criminalización y la violencia, se reafirmaron en la zona de reubicación, donde sufrimos varias prácticas de exclusión. Justamente, esta criminalización persistente nos lleva a preguntarnos por la violencia policial, la cual está ligada a la segregación racial que vivimos y el imaginario de nuestros barrios anteriores —y el actual— como pandilleros, lo que es usado para legitimar estas violencias.

Actualmente, esta documentación está movilizada por la pregunta: ¿cómo opera la violencia policial en nuestros barrios (contra quiénes, por qué lo hacen, de qué manera)? No era una pregunta que tuviéramos antes porque habíamos naturalizado esta práctica como parte de nuestra cotidianidad. Sin embargo, varios de nosotrxs hemos experimentado la violencia racista en diferentes espacios; hemos vivido en nuestros propios cuerpos la persecución, la estigmatización y la hipervigilancia de la policía. También, hemos participado en los debates que se han generado en la ciudad a partir del asesinato de Harold y hoy afirmamos que lo que ocurre en el barrio San Francisco pasa en otras territorialidades segregadas racialmente, como la nuestra. Es así como en el marco del proyecto “Salvaguardas de la vida”, desarrollado por el Cinep/PPP, decidimos articularnos para hacer este trabajo y aportar a un debate de ciudad que sigue declarando: ¡las vidas de lxs jóvenes negrxs importan!

En este trabajo, sostenemos que la segregación racial en Cartagena ha producido espacios de muerte, o mundos de muerte como lo llama Achille Mbembe, es decir, “lugares donde la gente se encuentra tan marginada que en realidad vive como muerto viviente” (citado en Estévez, 2018, p. 19). Sobre estas espacialidades racializadas se ha construido una representación criminalizante —especialmente de lxs jóvenes negrxs— que legitima el uso de violencias institucionales. La criminalización racializada sobre lxs jóvenes negrxs que habitan estas comunidades sugiere que estxs sujetxs representan una amenaza para la seguridad de la ciudad; por lo tanto, son vidas que no merecen ser vividas. Para nosotrxs, la violencia policial racista en Cartagena solo puede entenderse en la relación segregación racial, criminalización de jóvenes negrxs y políticas de seguridad, donde el joven negro encarna al enemigo interno.

En este sentido, entendemos que las comunidades segregadas racialmente se van constituyendo en comunidades de excepción —utilizando los análisis de Agamben sobre el estado de



excepción—, es decir, espacios vacíos de derecho —o donde el derecho se suspende— a partir de la construcción de “nudas vidas”: vidas que pueden ser arrebatadas sin tener que dar cuenta a nadie por ella, es la vida de todos los que son expuestos a morir (López, 2018). En este contexto, se autoriza y legitima a la policía para producir sufrimiento, dolor y muerte con impunidad.

Por esta razón, desde nuestro título problematizamos la noción de **joven en riesgo**, una categoría de sujeto utilizada en el discurso institucional que, en teoría, da cuenta de jóvenes que ameritan especial atención y protección por las adversidades que enfrentan, pero realmente no opera así. Desde diferentes secretarías del distrito, en especial la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana², se desarrollan programas institucionales dirigido a “jóvenes en riesgo” en referencia a jóvenes de barrios populares empobrecidos que, por lo general, están vinculadx a pandillas, en desempleo, consumidorxs de sustancias psicoactivas u otros que configuran lo que llaman “riesgo social”. Para nosotrxs, el joven en riesgo es otra categoría necropolítica con claras marcas de raza, clase social y territorialidad. Lxs jóvenes en riesgo son aquellxs que habitan barrios empobrecidos y que la institucionalidad define desde el delito, el consumo, la violencia, el embarazo adolescente —como le llaman muchas veces sin hacer referencia a la violencia sexual— y la conflictividad social, entre otros.

Consideramos que cuando se dice “joven en riesgo” empieza a operar la criminalización, la “nuda vida”, el espacio de excepción para legitimar la violencia contra este joven. Insistimos: la categoría refiere más a un problema de seguridad que de garantías para la vida, aunque nos digan lo contrario. A través de ella, lo que se desarrollan son prácticas de administración de la muerte de estxs jóvenes que, justo por el racismo necropolítico, viven como muertxs vivientes; de ellxs no se espera, sino que mueran pronto, por tanto, su asesinato no sorprende. Lxs jóvenes blanco-mestizxs de clase media alta y alta de Bocagrande³, aunque sean consumidorxs, no serán nunca jóvenes en riesgo. Somos nosotrxs, lxs que habitamos estas periferias; somos nosotrxs lxs intervenidos, no con política de vida, sino de muerte. Nuestro riesgo es estar permanentemente expuestxs a la muerte con agencia y tolerancia institucional, y uno de los dispositivos que produce esa muerte es la policía. La autoría de este texto es un ejercicio colectivo entre Resistimos Desde el Sur, la Comisión Especial de Derechos Humanos de Cartagena y el Cinep/PPP. Los insumos fundamentales para realizar los análisis provinieron de entrevistas semiestructuradas realizadas a jóvenes víctimas de violencia policial racista entre 2019 y 2024 en los barrios *Flor del Campo* y *Colombiatón* que accedieron a conversar con nuestro equipo. De igual forma, realizamos un análisis a partir de ejercicios de cartografía social, los cuales fueron sistematizados para su posterior reflexión.

2. Justamente donde se trabajan asuntos vinculados a seguridad y orden público.

3. Barrio estrato 6 del norte de Cartagena.

Este texto se compone de cinco partes: en la primera, exponemos las posturas conceptuales, políticas y metodológicas que orientaron nuestra documentación. En la segunda, mostramos cómo la segregación racial está profundamente vinculada a la violencia policial; aquí sostenemos lo dicho antes: la segregación racial construye espacios vacíos de derecho, a partir de discursos de criminalización, donde está permitido y legitimado el uso de la violencia policial. En la tercera, damos cuenta de las ideas fuerza que arrojó nuestra documentación y analizamos cómo están operando las prácticas de violencia policial racista en *Flor del Campo* y *Colombiatón*. En la cuarta sesión, materializamos las reflexiones anteriores en cuatro relatos de vida de lxs jóvenes entrevistados. Por último, cerramos este trabajo intentando responder a la pregunta: ¿cómo puede ser reparada esta violencia sistemática?





NUESTROS
POSICIONAMIENTOS
CONCEPTUALES,
POLÍTICOS
Y METODOLÓGICOS



Para desarrollar esta documentación, es conveniente precisar algunas posturas conceptuales que mediarán nuestras interpretaciones sobre la violencia policial racista en Cartagena. Proponemos, por lo menos, cuatro categorías: raza, racismo, necropolítica y estado de excepción vinculado a la noción de *homo sacer* y “nuda vida”.

Raza y racismo

Queremos reafirmar que no entendemos la raza como un asunto biológico, sino como una construcción ideológica que justifica y legitima relaciones sociales de dominación. En este sentido, compartimos con Aníbal Quijano (2014) que la raza es una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que, desde entonces, permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica: el eurocentrismo.

Sobre ello, Quijano (2014) señala que

La idea de raza, en su sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América. Quizás se originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados, pero lo que importa es que muy pronto fue construida como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos. La formación de relaciones sociales fundadas en dicha idea produjo en América identidades sociales históricamente nuevas: indios, negros y mestizos, y redefinió otras. Así, términos como español y portugués, y más tarde europeo, que hasta entonces indicaban solamente procedencia geográfica o país de origen, desde entonces cobraron también, en referencia a las nuevas identidades, una connotación racial. Y en la medida en que las relaciones sociales que estaban configurándose eran relaciones de dominación, tales identidades fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes, como constitutivas de ellas y, en consecuencia, al patrón de dominación colonial que se imponía. En otros términos, raza e identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la población. (p. 777)

Aquí es importante la anotación de Mignolo (2010) cuando advierte que la categorización racial no consiste simplemente en decir “eres negro o indio, por tanto, eres inferior”, sino en decir “no eres como yo, por tanto, eres inferior” (p. 43). Así, como señala Quijano (2010), la raza existe como coartada del poder, es decir, nada tiene que ver con la estructura

biológica de la especie humana y, todo, en cambio, con la historia de las relaciones de poder en el capitalismo mundial, colonial/moderno, eurocentrado (Restrepo y Rojas, 2010).

Para nosotrxs, la categoría raza, como la entiende Quijano (2014), nos permite comprender las desigualdades que enfrentan las personas negras en Cartagena. La mayoría se ubican en economías informales o ilegales, al estar marginalizadas del acceso a educación, trabajo y salario digno. Al respecto, Quijano (2014) anota que:

La clasificación racial de la población, y la temprana asociación de las nuevas identidades raciales de los colonizados con las formas de control no pagado, no asalariado, del trabajo, desarrolló entre los europeos o blancos la específica percepción de que el trabajo pagado era privilegio de los blancos. La inferioridad racial de los colonizados implicaba que no eran dignos del pago de salario. Estaban naturalmente obligados a trabajar en beneficio de sus amos. No es muy difícil encontrar, hoy mismo, esa actitud extendida entre los terratenientes blancos de cualquier lugar del mundo. Y el menor salario de las razas inferiores por igual trabajo que el de los blancos, en los actuales centros capitalistas, no podría ser, tampoco, explicado al margen de la clasificación social racista de la población del mundo. (p. 785)

Abordamos la categoría analítica y política de **raza** —y no solo etnia—, entendiendo que la violencia policial racista opera bajo la idea de raza. La policía hace la lectura de un cuerpo racializado con todas las cargas de la colonialidad; los agentes de esta institución leen un cuerpo, lo marca racialmente como negro y movilizan todos los imaginarios contruidos colonialmente⁴. Al respecto, conviene retomar en esta discusión a Verena Stolcke (1992), quien señala que el término “étnico” se difundió de forma más amplia en la posguerra. A partir de ese momento, afirma, muchos estudiosos rechazaron la categoría raza bajo un repudio ético humanista de las doctrinas racistas del nazismo. Entonces, la categoría étnica enfatizaba en que las comunidades humanas son fenómenos históricos y culturales, en lugar de agrupaciones dotadas de rasgos morales e intelectuales de origen “racial” y, por lo tanto, hereditarios.

Para Stolcke (1992), una de las consecuencias de sustituir raza por etnicidad es la tendencia a minimizar o esquivar el fenómeno del racismo existente, es decir, el que se dieran discriminaciones y exclusiones que se justifican ideológicamente, atribuyéndolas a supuestas deficiencias morales e intelectuales de orden racial y hereditario. En consecuencia,

4. Recordemos que, si bien el colonialismo es un proceso que se relaciona con la ocupación militar y el control territorial, económico, jurídico y político de los pueblos colonizados por parte de una fuerza imperial extranjera, la colonialidad hace referencia a la lógica cultural de dominación colonial y a los dispositivos de herencia colonial que continúan operando en nuestros días. Mientras que el colonialismo cesó, casi en su totalidad, entre los siglos XIX y XX en América Latina y el Caribe, así como en África y Asia, la colonialidad aún no ha concluido.

califica este desplazamiento como una forma de encubrimiento. Así mismo, cuestiona cómo la misma noción de etnicidad ha tendido hacia la esencialización y naturalización.

Mignolo (2010) distingue entre “raza” y “etnia”, siguiendo las cadenas de asociación de rasgos fenotípicos en la primera y culturales en la segunda. La raza se refiere a la genealogía sanguínea, genotípica o de color de la piel y la etnia incluye la lengua, la memoria y un conjunto de experiencias compartidas pasadas y presentes, por lo que comprende un sentido cultural de comunidad, lo que las personas tienen en común, pero esto no significa que se mantienen absolutamente separadas. Para Mignolo, el racismo se apropia de ambas categorías para articular sus prácticas discriminatorias hacia grupos subalternizados, que son racializados. El racismo “ha sido una matriz clasificadora que no sólo abarca las características físicas del ser humano, sino que se extiende al plano interpersonal de las actividades humanas, que comprende la religión, las lenguas [...] y las clasificaciones geopolíticas del mundo” (citado en Restrepo y Rojas, 2010, p. 124).

Conforme con lo anterior, ¿cómo entendemos el racismo? La escritora afroamericana Audre Lorde (1981) lo define como la “creencia en la superioridad inherente de una raza con respecto a las demás y, por tanto, en su derecho a dominar, ya sea manifiesto o implícito” (párr. 1). Además, compartimos con Elizabeth Castillo (2011) que el racismo en Colombia constituye un fenómeno estructural que se expresa en diferentes escenarios de la vida cotidiana e institucional; opera a través de concepciones y prácticas de inferiorización respecto de las poblaciones afrodescendientes e indígenas, su historia y sus culturas. Por su parte, para María Isabel Mena (2016), el racismo es una terrible maquinaria, histórica y organizada, que está en la escuela, en el mercado de juguetes, en la salud, en la política: no hay un ámbito en el que el racismo no hunda sus tentáculos.

Lorena Cabnal (citada por Korol, 2016), desde su posición de mujer indígena maya-xinka, define el racismo como una raíz histórica y estructural de origen patriarcal que arremetió con la penetración colonialista en la vida de pueblos originarios de Abya Yala, y de las mujeres en particular. Nació, se engrosó y se alimentó en la colonia, y se ha fortalecido en la conformación de la estructura de países y repúblicas, donde ha creado, y sigue creando, condiciones para que su existencia hegemónica continúe siendo una sostenedora de dominación y subyugación de los pueblos, a través de instituciones y leyes occidentales masculinas.

En este sentido, entendemos que el racismo se funda en la idea de raza, constituyéndose en un sistema de opresión. Así, las personas racializadas enfrentan barreras sistemáticas y estructurales que dificultan el acceso a derechos y la realización de sus proyectos de vida buena y digna. En el marco de esta documentación, el racismo es una matriz de opresión estructurante de una serie de criminalizaciones racializadas que se imbrican entre sí: criminalización racializada de la pobreza, del consumidor de drogas, de las estéticas negras y de

las expresiones culturales. En últimas, todas se funda en la criminalización de la raza y la racialización de la criminalidad. Así, habitar cuerpos negros es portar el rostro del crimen.

Angela Davis (2016) plantea que, debido al persistente poder del racismo, los “criminales” y “malvados” son, en la imaginación colectiva, representados como gente de color. La cárcel, de este modo, funciona, de forma ideológica, como un emplazamiento abstracto en el que se deposita a lxs indeseables, descargándonos de la responsabilidad de pensar sobre los problemas reales que afligen a aquellas comunidades de las que lxs reclusxs son separadx en un número tan desproporcionado. Este es el papel ideológico que juega la prisión; nos exime de la responsabilidad de enfrentarnos seriamente con los problemas de nuestra sociedad, en especial con aquellos producidos por el racismo y, de manera creciente, por el capitalismo global (Davis, 2016).

Necropolítica, *homo sacer* y “nuda vida”

Para esta documentación sobre violencia policial racista, encontramos necesario acudir la categoría de necropolítica, propuesta por el africano Achille Mbembe, quien la ha entendido como

El poder de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos tales como la masacre, el feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada, así como los dispositivos legal-administrativos que ordenan y sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte. (citado en Estévez, 2018, p. 10)

La necropolítica emerge ante la insuficiencia de la biopolítica, propuesta por Michel Foucault. Al respecto, Mbembe sostiene que la biopolítica no es suficiente para entender cómo la vida se subordina al poder de la muerte en África. En referencia al estado de excepción permanente planteado por Agamben, Mbembe examina cómo el derecho soberano de matar se reformula y construye la idea ficticia del enemigo (Estévez, 2018).

Analizando cómo opera el poder soberano en el tercer mundo, Mbembe sostiene que se expresa en dictar quién merece morir y a quiénes se les permite matar. Así, afirma que la proliferación de armas y la existencia de mundos de muerte —lugares donde la gente se encuentra tan marginada que en realidad vive como muerto viviente— son un indicador de que existe una política de la muerte (necropolítica) en lugar de una política de la vida (biopolítica) como la entiende Foucault (Mbembe, citado en Acevedo, Correa y Mejía, 2022). Dicho esto, la necropolítica reinterpreta el biopoder, planteando que el poder soberano se ejerce para arrebatarles la vida a otrxs y usar de forma desmedida esta fuerza contra sectores poblacionales vulnerables (Acevedo y Correa, 2021).

Distintxs autorxs han defendido esta posición, entre ellas la eslovena Marina Gržinić, quien afirma que la biopolítica permite conceptualizar la gubernamentalidad neoliberal del primer mundo; sin embargo, en los países exsocialistas y del tercer mundo (que incluye Asia, África y América Latina) opera la regulación de la muerte —no de la vida— dentro de las condiciones extremas producidas por el capital. Dicho en otras palabras, la vida es regulada a través de la perspectiva de la muerte, en una mera existencia debajo del nivel de vida más básico (Gržinić y Tatlić, citadas en Acevedo, Correa y Mejía, 2022).

En la discusión que nos convoca sobre violencia policial racista, además de encontrar útil la categoría conceptual de necropolítica, encontramos necesario las de estado de excepción —a la que también hace referencia Mbembe—, el *homo sacer* y la “nuda vida”, utilizadas por Agamben, para releer la biopolítica de Foucault. El estado de excepción es la suspensión del ordenamiento jurídico, un espacio fuera de la norma (anómico), donde la soberanía actúa desaplicando una regla, la cual está justificada por una necesidad. Se trata de la suspensión del derecho preexistente, un espacio sin derecho. Ahora bien, Agamben sostiene que en las democracias actuales el estado de excepción —entendido como medidas extraordinarias dentro de una democracia durante un periodo de crisis— ya no es una excepción, sino la regla. Vivimos en un estado de guerra civil legal en la que la vida está subordinada al poder del Estado y solo está presente en la ley a través de su exclusión (Estévez, 2018).

Según Agamben, el estado de excepción es

[...] una “tierra de nadie, entre el derecho público y el hecho político”. Para este autor, la creación deliberada del estado de excepción es una práctica esencial de los Estados contemporáneos. Tiene un significado biopolítico desde el momento en que la vida humana es afectada. De acuerdo a Agamben (2010), el sistema jurídico vigente desde la Primera Guerra Mundial es el estado de excepción: [...] ha llegado a alcanzar ahora su máximo despliegue planetario. El aspecto normativo del derecho puede ser así impunemente cancelado y contrariado por una violencia gubernamental que —ignorando en el exterior el derecho internacional y produciendo en el interior un estado de excepción permanente— pretende, no obstante, seguir aplicando todavía un derecho (p. 126). Para Agamben (2010), una clara aplicación del estado de excepción es la figura de “detención indefinida de los no-ciudadanos sospechosos de actividades terroristas. Ni prisioneros ni acusados, tan solo ‘detenidos’ (detainees)” (p. 12-13). Entonces, el estado de excepción hará referencia a un espacio vacío de derecho. (Agamben, 2010, citado por Gómez, 2018, p. 178)

En el estado de excepción, la “nuda vida” y el *homo sacer* son de suma importancia desde el planteamiento de Agamben. El *homo sacer* es una figura político-jurídica de la Antigüedad que refiere a la persona que ha sido juzgada y acusada de un crimen, que no se

permite sacrificar, pero quien la mate no será acusado de homicidio. Esta persona, que queda en la total desprotección de la ley, se encuentra incluida en ella únicamente por su exclusión (Estévez, 2018). *Homo sacer* es el individuo cuya vida podía ser arrebatada sin tener que dar cuentas a nadie por ella (López, 2018). Se trata de alguien que puede ser asesinado sin que el asesino sea considerado como tal.

Entonces, esta vida es “nuda vida”, aquella cuya fragilidad está expuesta a la muerte y al vejamen porque nadie puede interceder por ella. Es producto de un proceso de naturalización de su sentido sacrificial (López, 2018). Así,

la vida desnuda, o nuda vida, es la existencia sin más, es el puro flujo vital del que nadie tiene que preocuparse, excepto quien está a cargo de su control y a su vez tiene que eliminarla cuando sea preciso. Esto para que la vida del que está vestido pueda ser sostenida. Un tipo de vidas sostiene y alimenta a las otras, según este modo de lógica. (López, 2018, p. 252)

Las “nudas vidas” son asesinadas con total impunidad. Quienes ocupan este lugar están siempre expuestxs a la muerte, sacrificadas para sostener o reestablecer el orden que se ha fundado. Para nosotrxs la violencia policial se entiende desde estos marcos conceptuales, donde unas comunidades racializadas negras han sido segregadas y producidas como espacios de muerte, donde se suspende todo derecho, donde los cuerpos negros son construidos como *homo sacer*, y sus vidas, “nudas vidas”. Por consiguiente, la policía adquiere el poder de producir dolor, sufrimiento y muerte con legitimidad institucional y, muchas veces, social. La forma como actúa la policía en estas comunidades, con estxs jóvenes, no ocurriría en otras zonas de privilegio y, por tanto, con derechos.

Como profundizaremos más adelante, los procesos de segregación racial en la ciudad también han llevado a configurar espacialidades diferenciadas en el que se jerarquizan las vidas. Las comunidades que son excluidas bajo la segregación sociorracial se configuran como territorios de excepción, donde lxs jóvenes negrxs criminalizadxs son representadxs como un problema de seguridad. Aunque las categorías de estado de excepción, *homo sacer* y “nuda vida” han sido mayoritariamente aplicada para lxs migrantes, leídxs como terroristas, consideramos preciso aplicarlas a microespacios comunitarios en contextos de segregación racial, donde lxs jóvenes negrxs se construyen como la encarnación de la inseguridad, un riesgo para la propiedad privada y al orden social, es decir, como el enemigo interno. En este sentido, cuando un, o una, joven negrx es violentadx o asesinadx se activan argumentos que lo ubican como una “nuda vida”, entonces su muerte deja de ser interpretada como un delito, como un crimen, toda vez que estxs jóvenes han sido despojadxs de su reconocimiento de sujetxs de derecho; pueden, por tanto, ser asesinadxs con impunidad. En estas comunidades, parece que la policía tiene permitido —la excepción vuelta norma— matar.

Violencia policial racista

Antes de definir la violencia policial racista, resulta conveniente definir qué se entiende como abuso de autoridad y desviación de poder, para lo cual nos apoyaremos en las elaboraciones que ha realizado la organización ILEX Acción Jurídica, integrada por abogadas negras que trabajan a favor la justicia racial. Al respecto, lo primero que debemos comprender es que lxs integrantes de la policía son funcionarixs públicos, desde esta posición, podemos hablar de desviación de poder o abuso de autoridad como faltas a sus deberes. Esto fue definido por la Corte Constitucional, la cual entiende:

La desviación de poder cuando una autoridad actuando en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades y sin violar la ley, utiliza sus poderes o atribuciones para una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador pretendía. (Sentencia C-456 de 1998)

Para dejar claridades entre ambas es menester precisar que la desviación de poder se presenta cuando una autoridad, sin extralimitarse en sus funciones, utiliza sus facultades para lograr una finalidad distinta a la que la ley permite. Por su parte, el abuso de autoridad es una conducta castigada por la ley penal, por lo tanto, puede dar lugar a sanciones. En este sentido, el artículo 416 del Código Penal señala: “El servidor público que con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público” (Ley 599 de 2000).

En el año 2024, se expidió el Decreto 1231, por medio del cual se reglamenta el uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional. En este, se establecen las definiciones que lo orientan, siendo una de ellas la “no estigmatización y no discriminación”, entendida como

[...] el reconocimiento, protección y garantía de los derechos de todas las personas sin discriminación alguna, actuando con imparcialidad sin importar su filiación política, identidad sexual y de género, raza, nacionalidad o vinculación étnica; así como el deber de no realizar pronunciamientos o conductas que propicien prejuicios, discriminen, o descalifiquen a las personas. (Decreto 1231 de 2024. Art. 2.5.14.1.3)

Este decreto, en su artículo 2.5.14.2.1., establece cuatro principios para el uso de la fuerza, estos son:

Necesidad. El personal uniformado de la Policía Nacional utilizará, en la medida de lo posible, medios preventivos y disuasivos antes de recurrir al uso de la fuerza o a las armas de fuego. El uso de la fuerza y de armas de fuego solo se permitirá cuando los demás medios

resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera la consecución del objetivo previsto. Este principio orienta la toma de decisiones sobre si es necesario emplear la fuerza y, en caso afirmativo, cuánta fuerza debe utilizarse y durante cuánto tiempo.

Constitucionalidad y legalidad. El uso diferenciado y proporcional de la fuerza debe estar siempre enmarcado en un objetivo legal, cumpliendo en todo momento con lo establecido en la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes. En este mismo sentido, los uniformados deben usar elementos de dotación oficial previamente reglamentados. Los procedimientos que adopten los uniformados deben ceñirse a todas las disposiciones legales y a las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Proporcionalidad. El nivel de fuerza utilizado, los medios y los métodos empleados deben ser acordes con las variables de conducta, lo cual implica una valoración entre la situación a la que se enfrenta el uniformado y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los uniformados deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, determinado según el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte de la persona a la cual se pretende intervenir y, con ello, emplear tácticas de control o uso de fuerza, según corresponda. El personal uniformado de la Policía Nacional al hacer uso de armas, municiones, elementos, dispositivos de uso menos letal y de armas potencialmente letales, debe hacerlo de manera moderada, adecuada, necesaria, racional y actuar en proporción a la gravedad de la amenaza y al objetivo legal que se pretende lograr, escogiendo entre los medios eficaces aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y sus bienes. En ningún caso está permitido usar medidas extremas para salvaguardar un bien jurídico o bienes materiales que resultan inferiores a la vida o integridad física de las personas.

Diferenciado. El personal uniformado de la Policía deberá identificar los niveles de resistencia que puede ejercer un ciudadano de tal forma que se focalice la intervención policial y el uso proporcional de la fuerza en aquellas personas que generen comportamientos contrarios a la convivencia, quienes incurran en infracciones a la ley penal o quienes pongan en inminente peligro la vida y la integridad de las personas, funcionarios de policía o de terceros, siempre absteniéndose de hacer un uso indiscriminado de la fuerza. Asimismo, la aplicación de la fuerza debe ser gradual y dinámica, pudiendo escalar o desescalar, siendo los medios y métodos policivos acordes a las circunstancias. (Decreto 1231 de 2024. Art. 2.5.14.2.1.)

Ahora, ¿cuándo podemos definir el accionar abusivo de la policía como una práctica racista? Al respecto, ILEX (2020) plantea

El abuso policial es discriminatorio cuando la desviación de poder, el abuso de autoridad o el desconocimiento de los deberes de policía tienen un trasfondo de racismo. Es decir, cuando ocurre motivado por la identidad étnico-racial de las personas, su color de piel o su

cultura. También, una situación de abuso policial es racista cuando, pese a no tener una intención discriminatoria, tiene un impacto desproporcionado sobre grupos racializados como subordinados, como los indígenas o los afrocolombianos. (p. 15)

La violencia policial contra personas negras ha sido reconocida como una manifestación del racismo sistémico. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a propósito del asesinato de George Floyd, expidió la resolución 47/21 para la

Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas africanas y afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del orden, mediante una agenda para lograr un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales. (Resolución 47 de 2021)

En esta:

1. *Deplora* todas las formas de discriminación racial, entre ellas el racismo sistémico y estructural, y sus efectos en las personas africanas y afrodescendientes y sus familias y comunidades en todo el mundo;
2. *Condena* la persistencia de prácticas violentas y discriminatorias de carácter racista perpetradas por muchos agentes del orden contra personas africanas y afrodescendientes, y el racismo sistémico en las fuerzas del orden y en los sistemas de justicia penal, y recalca la importancia que reviste asegurar que esos actos no se traten con impunidad;
3. *Recuerda* que los agentes del orden, al desempeñar sus funciones, deben utilizar medios no violentos antes de recurrir, cuando sea absolutamente necesario, al uso de la fuerza, que, en cualquier caso, todo uso de la fuerza debe respetar los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación, y que quienes hacen uso de la fuerza deben rendir cuentas por cada situación en que la usen... (Resolución 47 de 2021)

Pese a esto, Colombia es un país con altos índices de violencia policial, siendo quizá los hitos más recientes en la memoria nacional el paro de noviembre de 2019 (21N) y el estallido social iniciado en abril de 2021 (28A). Sin embargo, en esta documentación —y como hemos dicho desde el inicio—, sostenemos que para las personas negras la violencia policial no se manifiesta únicamente en escenarios de protesta social, sino que es sistemática y cotidiana.

Nuestra metodología

En este trabajo, nos ubicados en la perspectiva del conocimiento situado, planteado por Donna Haraway (1995), y que ha orientado todos nuestros ejercicios de investigación territorial. Esta postura nos lleva a reivindicar la epistemología del punto de vida, entendiendo que todo conocimiento se produce desde un lugar. Entonces, nuestro ejercicio plantea una documentación encarnada, puesto que nosotrxs —colectivo Resistimos Desde el Sur— vivimos en *Flor del Campo* y *Colombiatón* donde se espacializa nuestro trabajo. Además, somos jóvenes negrxs que hemos vivido la violencia policial racista. Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos, como jóvenes que hicimos parte del movimiento estudiantil y que acompañamos espacios de protesta social, hemos vivido de cerca estas violencias. De igual forma, la investigadora del Cinep/PPP que participa de este ejercicio es una mujer negra habitante de la ciudad y ha acompañado —desde su trabajo en la organización— las investigaciones locales participativas que cuestionan el racismo estructural. Entonces, este ejercicio compromete nuestras experiencias e intersubjetividades.

Aplicamos dos técnicas fundamentales para la recolección de información. Por un lado, entrevistas semiestructuradas a jóvenes víctimas de violencia policial racista entre los 17 y 29 años, para conocer sus experiencias y significados frente a estos hechos victimizantes. En total, se realizaron cinco entrevistas, en las que exploramos la vida de lxs sujetxs antes de la reubicación en Barrios Unidos, cómo interpretaban la conflictividad social en sus comunidades de origen y en la reubicación, los incidentes de violencia policial que habían experimentado y otras formas de violencia institucional racista. De igual manera, indagamos sobre sus proyectos de vida y sus perspectivas sobre cómo puede ser reparada la violencia que han sufrido. Los nombres de las víctimas fueron modificados para proteger su identidad y no generar situaciones de riesgo para su seguridad.

También realizamos dos cartografías sociales, una en *Flor del Campo* y una en *Colombiatón*, donde abordamos cómo opera la violencia policial en sus cuerpos y en la espacialidad que habitan: los lugares, por qué y cuándo lo hacen, con qué repertorios y quiénes habitan estos lugares. En cada cartografía participaron, aproximadamente, ocho jóvenes. Estos fueron ejercicios complejos, puesto que tenían mucho miedo de hablar sobre la violencia que ejerce la policía, sintiéndose expuestxs y vulnerables frente a una institución armada con la que cohabitan en el barrio. Pese a que eran vecinxs, conocidxs, la sospecha siempre habitó el espacio. En ninguna de las cartografías, lxs jóvenes permitieron el uso de grabadora, además mostraron resistencia al momento de conversar sobre ciertos aspectos, en particular los que asocian la violencia policial a microtráfico y explotación sexual de adolescentes.

Sobre las víctimas: en este trabajo, hemos tomado la decisión política de no esforzarnos en moralizar a las víctimas para que la violencia sea entendida como un crimen; estamos plenamente segurxs que estas violencias han constituido abusos de autoridad y desviaciones de poder. Entendemos que algunos de lxs jóvenes que entrevistamos, por ejemplo, son usuarixs de drogas y que esto ha generado violencia policial; aun cuando sabemos la criminalización racializada en las personas consumidoras en una ciudad como la nuestra, queremos justamente visibilizar las violencias que ocurren contra estxs sujetxs y que no deben ser justificadas. No queremos poner categorías morales que se presumen superiores —estudiante, deportista, artista u otras que usamos— para ocultar el hecho mismo del consumo, puesto que está amparado por la Corte Constitucional.

Además, tenemos casos en los que algunas víctimas han respondido con violencia ante una agresión policial. Consideramos, por un lado, que esta respuesta ha estado motivada por el abuso de autoridad constante; y, por otro, no puede ocultar el desequilibrio de poder entre una víctima y el actor armado que es la policía. De manera que no deslegitima la denuncia, como suele argumentarse en algunos casos, donde el libreto que se espera de la víctima, para considerarla como tal, es la no respuesta violenta. Lo más importante, conservando este criterio, es la premisa de que todas las vidas negras importan, todas. Reflexionamos que cuando se apela a la moralización de la víctima se reafirma que, en efecto, hay “nudas vidas”.

Sobre el género de las víctimas: en las entrevistas, así como en las cartografías, la mayor participación fue de hombres. Dicho esto, cuatro fueron hombres y una mujer. Por un lado, da cuenta de un patrón de violencia policial que perfila y agrede, en mayor proporción, a hombres negros representados desde la criminalidad. Aunque, por supuesto, las mujeres son violentadas física y verbalmente, así como víctimas de acoso sexual —revelado también en este trabajo—, no tuvimos disposición de las víctimas para compartirnos su relato. Además, identificamos que las violencias sexuales que ejerce la policía contra mujeres son terrenos vedados de los que no se quiere hablar.

Sobre el autorreconocimiento étnico-racial: nosotrxs conocemos los efectos que el racismo ha tenido en el autorreconocimiento étnico-racial de las personas negras en Cartagena; esto nos supuso algunas preguntas de cara a documentar violencia policial racista. Teníamos algunas víctimas identificadas (vecinos, amigos, familiares) que, desde nuestra lectura, son cuerpos negros (heterorreconocimiento), pero no habíamos conversado con ellxs sobre la percepción que tenían sobre su racialidad.

Para este trabajo, tuvimos conversaciones con otras organizaciones con el propósito de conocer cómo estaban documentando la violencia policial racista y una de las preguntas que siempre hicimos fue: ¿las víctimas se autorreconocen negras? Fue así como, a partir de conversaciones con la organización de abogadas negras ILEX Acción Jurídica, nos aproximamos al uso de técnicas de heterorreconocimiento, útiles para investigaciones donde la racialidad, basada en el color de la piel, está en la base de la desigualdad.

Al respecto, la Corte Constitucional señaló que

el heterorreconocimiento surge de reconocer que la construcción social de la raza hace parte de una dialéctica en la que la sociedad también implica su determinación, teniendo en cuenta que la autoidentificación no siempre puede explicar cómo las personas son percibidas o cómo experimentan la discriminación. De ahí que el color de piel ostente un papel significativo en las identidades cotidianas de reconocimiento étnico- racial, al menos como elemento de apoyo. (Sentencia T-276 de 2022)

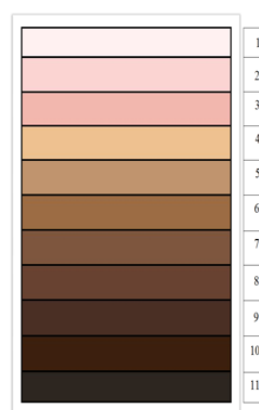
En un taller realizado con ILEX Acción Jurídica, conocimos del uso de la paleta de colores, utilizada como método secundario en investigaciones relacionadas con el perfilamiento racial, entendiendo que dicho perfilamiento está mediado por la percepción que se tiene del otro. La paleta de colores fue diseñada por el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA), asociado a la Universidad de Princeton, el cual establece un espectro de once tonalidades de piel, clasificadas desde 1, la más clara, hasta 11, la más oscura. (ver figura 1)⁵

La paleta de colores del proyecto PERLA ha sido incorporada en variadas encuestas de América Latina, como técnica complementaria del autorreconocimiento —que prevalece como derecho que debe ser garantizado—, donde los encuestados pueden ubicar a las personas encuestadas en la escala de colores. En nuestro caso, le dimos a esta paleta un uso similar al utilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, en el módulo de Movilidad Social Intergeneracional (2016), en el cual la persona entrevistada podía ubicarse en la paleta a partir de la pregunta: ¿cuál considera que es el color de piel de su cara? (citada en la Sentencia T-276/22)

En nuestro caso hicimos dos ejercicios. Primero, les preguntamos a las personas entrevistadas por su autorreconocimiento, leyéndoles las categorías que hoy se reconocen en el Estado como correspondientes a la pertenencia étnico-racial (afrodescendiente,

Figura 1.

Paleta de colores del proyecto PERLA



Fuente: proyecto la PERLA.

5. Las tintas en las que se imprimió este documento no permitieron conservar la versión original, pero sí se mantienen en su versión digital (consultar proyecto en: <https://perla.princeton.edu/perla-color-palette/>)

negro, palenquero, raizal, indígena, room o ninguno). Posteriormente, ofrecimos la paleta de colores para que se ubicaran, según como perciben su color de piel.

Lo articulamos con el heterorreconocimiento, puesto que la ubicación en la paleta de colores no permitió sostener que las víctimas entrevistadas son socialmente leídas como personas racializadas negras o, si se quiere, no-blancas. Sin embargo, el desarrollo cualitativo de la entrevista reafirmó que estxs jóvenes interpretan el perfilamiento del que son víctimas como un perfilamiento racial que, por supuesto, se articula a su clase social (jóvenes empobrecidos de Barrios Unidos) y sus estéticas (jóvenes que, para la policía, tienen apariencia de “bandidos”). Sobre esto reflexionan los hallazgos de nuestro trabajo.

Algunos datos sobre violencia policial racista en Cartagena

Según el informe de Temblores ONG (2021) sobre los hechos de violencia homicida presuntamente cometida por agentes de la policía entre 2017 y 2019, el departamento de Bolívar ocupó el tercer lugar con 37 casos, de estos 29 ocurrieron en Cartagena. Este informe también indicó que, en términos porcentuales, tomando como referencia el factor de vulnerabilidad de la víctima, el 11.4 % del total de casos reportados a nivel nacional corresponde a asesinatos cometidos contra personas afrodescendientes. Lo anterior sitúa a esta población vulnerable como la más asesinada por la Policía Nacional en el periodo de estudio. De los 33 homicidios cometidos hacia población afrodescendiente, 11 ocurrieron en el departamento de Bolívar. Para reafirmar, Temblores ONG concluye que los datos recogidos demuestran que esta población se encuentra en alto riesgo de ser asesinada por esta institución.

En el 2020, durante la pandemia, alrededor de cinco jóvenes negrxs fueron víctimas de la violencia policial homicida; momento en el que la policía tuvo poder desproporcionado para controlar el espacio público y la vida cotidiana barrial. La investigación realizada por ILEX sobre violencia policial racista indica que la implementación de las medidas restrictivas a causa de la pandemia favoreció la amplia discrecionalidad de la fuerza pública para restringir la libre circulación e imponer medidas correctivas en barrios donde se concentra la población afrodescendiente, como San Francisco, Nelson Mandela, el Pozón, Villa Estrella y Olaya. Esto generó un ambiente propicio para los abusos, el uso de la fuerza letal y la persecución de las comunidades que, por su situación socioeconómica de vulnerabilidad, no podían cumplir con las restricciones de movilidad y mantenerse en casa, como exigía el aislamiento social preventivo (ILEX-Acción Jurídica, 2021).

Los barrios mencionados, que están en su mayoría en la zona suroriental de la ciudad, se caracterizan por tener una fuerte presencia de la Policía Nacional. En la investigación realizada por ILEX, Temblores, CODHES y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (2022) —donde Cartagena fue un caso tipo—, activistas y defensorxs de derechos humanos señalaron las acciones de hipervigilancia en estos barrios como una forma de mantener el control y tener espacios definidos que puedan criminalizar a través de

prácticas como ingresar a las casas en busca de objetos hurtados y drogas. Este control se hizo evidente en el cierre de barrios en medio de la pandemia.

A partir de las entrevistas realizadas en la investigación citada, tanto líderes, lideresas y víctimas de violencia policial racista indicaron que la policía opera por medio del uso de armas que no se encuentran registradas y las amenazas de judicialización, derivadas de situaciones en las que, durante una requisita, el agente policial introduce elementos —armas o estupefacientes en cantidades no permitidas— en las pertenencias de la persona registrada con el objetivo de inculparla (ILEX, Temblores, CODHES, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, 2022).

En el 2022, un conjunto de organizaciones se articuló para participar en la construcción de una proposición presentada en el concejo distrital que permitiera realizar un debate de control político sobre la seguridad en la ciudad. Ahí se preguntó a la Policía Nacional: en cuántos casos de homicidio estuvieron involucrados, durante 2020-2022 en calidad de autores, agentes de la policía. Al respecto, respondieron que “en el Juzgado 175 de Instrucción Penal Militar y Policial⁶, en los años comprendidos del 2020 al 2022 se registran treinta (30) homicidios en la jurisdicción del departamento de Bolívar, relacionados con procedimientos de policía” (Oficio AMC-OFI-0160913-2022). Dicho en otras palabras, en promedio, diez casos de violencia policial homicida al año, aunque no se precisaron las circunstancias ni las características étnico-raciales de las víctimas. Y agregaron:

Se han adelantado intervenciones, con el fin de verificar posibles falencias en el desarrollo de servicio de policía que puedan promover la comisión de hechos de violencia, a su vez, evidenciar el comportamiento del personal durante su trayectoria institucional con el fin de individualizar conductas de extralimitación de funciones y circunstancias que deriven en abatimiento de ciudadanos. (Oficio AMC-OFI-0160913-2022)

6 Al respecto, es importante señalar los cuestionamientos que han venido realizando algunas organizaciones de la sociedad civil frente al acceso a la justicia para las víctimas cuando los casos son tratados desde la justicia penal militar, algunos de estos se anotan en el documento de análisis a la reforma policial (2022-2024). Las organizaciones han planteado que la competencia de la Justicia Penal Militar se está extendiendo a conductas enmarcadas en el DIH y el DIDH. La competencia de esta justicia debe ser excepcional, limitada y restringida, es decir, cuando las conductas investigadas cometidas por integrantes de la Fuerza Pública hayan sido en servicio activo y referido al mismo. En este sentido, anotan que las ficciones jurídicas que han modelado la jurisdicción penal militar han favorecido confusiones sobre la competencia para investigar conductas de extrema gravedad cometidas con ocasión o por causa del servicio. De hecho, en el 2021, la CIDH hizo esta observancia sobre casos relacionados con presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por la policía que estaban siendo investigados por la Justicia Penal Militar. Las organizaciones también han señalado que esta justicia no responde a estándares internacionales y poco colabora con la justicia ordinaria, cuando así se requiere. Muestra de ello, señalan, es que cuando la fiscalía ha solicitado a la Justicia Penal Militar la remisión de casos —en el marco del paro del 2021, por ejemplo— no se ha hecho de manera inmediata; cuando se han remitido, de manera tardía, lo hacen informando la imposibilidad de determinar la responsabilidad de la policía en las conductas objeto de investigación. Esto ha conducido a que la Fiscalía archive casos, argumentando la incapacidad de identificar los autores de las conductas punibles. Además, señalan que los informes técnicos que ofrece la Justicia Penal Militar muchas veces no son realizados por personas expertas y no cuentan con las pruebas necesarias (Mesa por la Reforma a la Policía, 2024).

De igual forma, se preguntó por la intervención del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en barrios populares. Esto porque diferentes comunidades —en especial, San Francisco, donde asesinaron a Harol Morales— habían advertido la presencia de este grupo especial que debían estar dedicado al dismantelamiento de estructuras criminales y no en intimidar y perseguir jóvenes negrxs, como lo estaba haciendo. La sola presencia del GOES en estos barrios, y no otros, sugería que habitaba en ellos la extrema peligrosidad y criminalidad, pero los resultados de los “operativos” no daban cuenta de ello, según manifestaban las comunidades.

Frente a esto la policía sostuvo que se habían realizado

30 operativos entre los años 2020 y 2022 en los barrios Nelson Mandela, Pozón, Fredonia y Perimetral [barrios de la zona suoriental y suoccidental empobrecidos, algunos conformados por víctimas del desplazamiento forzado], para contrarrestar Grupos Armados Organizados (GAO) y Estructuras Criminales, dando capturas de alias Cristian Vega, cabecilla de la banda criminal Los Santa, quien delinquía en el barrio Fredonia; alias Fabián, delinquía en El Líbano, El Pozón se contrarresto el homicidio. (Oficio AMC-OFI-0160913-2022)

Además, sostuvieron que sobre el GOES solo registraba una denuncia —del barrio San Francisco, justamente— y para ello se había instalado un consejo de seguridad. Sin embargo, en conversaciones que las organizaciones de DD. HH. sostuvieron con la comunidad, indicaron que en estos operativos —donde ingresaban violentamente a viviendas— no se hallaban cantidades de drogas correspondientes a carteles y tampoco se capturaban cabecillas de estructuras criminales, solo se perseguían a jóvenes negrxs sin poder alguno. Entre tanto, sí causaban, como efecto, daños a sus casas, violencia psicológica, violencia física contra jóvenes y mujeres, anotaciones en los expedientes de las víctimas y estigmatización.

La Defensoría del Pueblo había alertado sobre este comportamiento policial. En la alerta temprana No. 002 de 2020, se anotó que en términos de vulneraciones de derechos humanos se observa el involucramiento cada vez más extendido de núcleos familiares y comunidad vecinal. Los continuos allanamientos, y otro tipo de operativos policiales, contribuyen a reforzar la estigmatización del territorio y de sus pobladores. Las comunidades de estos barrios han manifestado, en repetidas ocasiones, abusos de autoridad por parte de la Fuerza Pública que se fundamentan en dicha estigmatización, en particular de la población juvenil. Durante el monitoreo se ha tenido información de constantes abusos policiales que se traducen en maltratos a jóvenes en espacios públicos, persecuciones y criminalización (Defensoría del Pueblo, AT 002 de 2020).

Insistimos, entonces, en la sistematicidad de estas violencias, así como en la persistencia de la impunidad. Por esta razón, la documentación constituye un ejercicio para dar cuenta de un problema histórico de racismo, exigir justicia, luchar contra la impunidad y hacer memoria de las víctimas.

DEL CERRO DE LA POPA A BARRIOS UNIDOS

SEGREGACIÓN RACIAL,
CRIMINALIZACIONES
RACIALIZADAS Y VIOLENCIA
POLICIAL RACISTA



En esta documentación, queremos proponer un lugar de análisis que imbrique racismo, economía turístico-urbanística, segregación racial y violencia policial en el marco de prácticas necropolíticas que sacrifican a la gente negra en Cartagena. Para nosotrxs, no es posible abordar la violencia policial racista en Barrios Unidos sin analizar los procesos de ordenamiento urbano en esta ciudad. Desde esta perspectiva, lo que hoy conocemos como Barrios Unidos es producto, justamente, del patrón de segregación racial que ha caracterizado el ordenamiento en Cartagena. En ese sentido, asumimos que es fundamental comprender los procesos que conectan el norte periférico y las periferias del sur, en las cuales nos hemos movilizado, de cara a la sistematicidad de la violencia institucional racista que tiene como fin la apropiación de territorios habitados por comunidades negras para la explotación urbanística y turística, siendo la violencia policial un dispositivo de control de las poblaciones segregadas.

Barrios Unidos está vinculado, en lo territorial, al **cerro de La Popa**, aunque se haya producido una percepción de estas zonas como geográficamente distantes, ubicadas en los extremos de la ciudad (norte-sur). El primero se ubica hacia las afueras de la ciudad en la zona suroriental; el segundo se ubica en el norte, a diez minutos del reconocido y turistificado centro histórico de Cartagena. Sin embargo, buena parte de las familias que hoy habitan en Barrios Unidos provienen de las faldas del Cerro de la Popa; a partir de un proceso de reubicación, estas familias fueron periferizadas hacia el sur.

En el presente trabajo, sostenemos la misma premisa que afirmamos en la investigación local participativa que realizamos durante el 2019 y el 2020 al reconstruir el proceso de reubicación de los barrios Loma Fresca y la María —ubicados en las faldas del cerro de La Popa— hacia *Flor del Campo*: la reubicación es un discurso institucional que encubre procesos de segregación racial, eso ha sido así desde Chambacú (1971) hasta las reubicaciones más recientes. Lo que encontramos es que comunidades empobrecidas negras, que habitan áreas de interés estratégico para las economías (turística y urbanística) son trasladadas al sur de la ciudad donde continúan empobrecidas, precarizadas, criminalizadas, asesinadas. Así se ha producido histórica y sistemáticamente, en palabras de Dairo Sánchez (2017), una clasificación-distribución racial del territorio:

Hablo de clasificación-distribución racial para resaltar dos elementos de la formación singular del capitalismo en la ciudad. En primer lugar, la articulación entre la clase social y el racismo (clasificación-racial) y, en segundo lugar, el ordenamiento territorial que expresa la materialidad singular de dicho ensamblaje (distribución-racial). (p. 25)

Aunque algunos de los argumentos que se han utilizado para legitimar estas reubicaciones se amparan en la noción de riesgo ambiental en el suelo habitado —sugiriendo que son zonas inhabitables—, realmente se trata de comunidades cuyas vidas se presumen inviables en cualquier espacialidad-territorialidad, porque, al final, son vidas indeseables en términos raciales, económicos, culturales, sociales. En otras palabras —y como ampliaremos más adelante—, reubicar en nombre del riesgo no ha actuado como una medida de protección de la vida de estas comunidades, sino como una estrategia de apropiación, gentrificación y capitalización de territorios en disputa. Prueba de ello es que el suelo en riesgo es utilizado para megaproyectos urbanos.

Podría plantearse que la segregación racial ha operado produciendo a las personas negras que habitan estas áreas de interés como un *homo sacer* y su vida como “nuda vida” a través de la criminalización racializada. Así, se le atribuye a la policía el poder de la muerte de las vidas negras. Entendemos la violencia policial como uno de los dispositivos que contribuyen a mantener la segregación racial, cuyo principal mensaje es la amenaza permanente de muerte, hasta su concreción: violencia policial para despojar, para proteger la zona apropiada e impedir la reapropiación territorial de quienes han sido despojados, para mantener a las periferias hipervigiladas y que no trasgredan fronteras geográficas, socioeconómicas y culturales impuestas por la distribución-clasificación racial del espacio. Esto ocurrirá con tolerancia y legitimidad social tras haber construido los cuerpos negros como “nudas vidas” y el estado de excepción como norma en los territorios segregados.

***Homo sacer* y “nudas vidas” negras en los procesos de segregación racial en Cartagena: entre el cerro de La Popa y Barrios Unidos**

Hacia la década de los 60 —momento de cambios demográficos y procesos migratorios hacia zonas urbanas—, familias víctimas del desplazamiento forzado en la región, y otras víctimas del despojo que afrontó el barrio Chambacú, se ubicaron en las faldas del cerro de La Popa, donde gestionaron viviendas y un espacio comunitario para habitar. Para nosotros es importante reafirmar que Chambacú —habitado por familias negras empobrecidas— es un hito urbano en Cartagena que da cuenta de la segregación socioespacial y donde es posible comprender otros procesos de poblamiento urbano en la ciudad. En 1971, se adelantaron obras de traslado de más de 1 300 familias del barrio Chambacú, ubicadas a menos de un centenar de metros del centro (Deávila, 2008). Estas familias fueron reubicadas en diferentes barrios del suroriente de la ciudad; sin embargo, algunas decidieron reasentarse en áreas cercanas al norte, trasladándose hacia el cerro de La Popa, para construir o conservar economías populares de sobrevivencia en esta espacialidad (centro histórico, playas, mercado de Bazurto).

Hemos identificado que las intervenciones distritales dirigidas a la reubicación de comunidades, asentadas en zonas de interés estratégico, para desarrollar macroproyectos urbanos, se han acompañado de la construcción de imaginarios del miedo, como lo llamaría Orlando Deávila (2008), para legitimar institucional y socialmente estas intervenciones. Conforme a lo expuesto, podríamos decir que se trata de imaginarios que van construyendo la “nuda vida” de estas comunidades negras como *homo sacer*. Así, se construye la imagen de un otro peligroso, inmoral, descartable, sacrificable, vidas de menor valor que se pueden condenar a la muerte física y simbólica. Frente a la reubicación de Chambacú, Orlando Deávila Pertuz (2008) señala que

Desde los medios de comunicación se había acompañado esta iniciativa hace años, defendiéndola como la única alternativa para encaminar la ciudad hacia el desarrollo económico y su constitución como principal ciudad turística de Colombia. Este acompañamiento se tradujo en construir una imagen extremadamente negativa de los habitantes del barrio, en aras de presentarlos como un peligro latente para la sociedad cartagenera. El miedo hacia los chambaculeros, años más tarde, los condenaría a la exclusión social, y engendraría claros patrones de segregación urbana. (p. 1)

En palabras de Deávila, la referencia a Chambacú era en clave de problema —el problema de Chambacú— convertida en un obstáculo para el posicionamiento turístico de la ciudad.

En 1956, el Instituto de Crédito Territorial publicó una pequeña cartilla donde resumía los pormenores del proyecto de regeneración de tugurios, que tenía como fin inmediato la reubicación definitiva de los pobladores del barrio Chambacú. Estos pobladores fueron definidos por el Instituto como: “gentes desnutridas y descalzas y ociosos niños y adolescentes desnudos, con adultos desempleados y adictos a la marihuana, con hombres y mujeres minados por la sífilis y la tuberculosis viviendo hacinados y en la más inmoral de las promiscuidades...” (Inscredial: 1956). Según el Inscredial, los chambaculeros habían caído en la más baja degradación humana, condición que había sido facilitada por la pérdida de la moral, por el continuo contacto con personas de similar “status”, pero sobre todo, por lo que ellos identificaron como “la desidia tropical de la raza” (Inscredial: 1955). No existen mejores palabras que las retomadas por el Instituto de Crédito Territorial para describir cual era la imagen que para la época se había construido y popularizado de Chambacú y los chambaculeros. (Deávila, 2008, p. 3)

Donde quiera que fueron lxs chambaculeros, este imaginario les persiguió: era común utilizar tal expresión (“chambaculero”) para hacer referencia a criminalidad, peligrosidad, inmoralidad, pobreza, suciedad. Muchas de estas familias, como dijimos, se ubicaron en las faldas de la Popa, donde se expondrían a nuevos procesos de reubicación, como el que ocurrió hacia Barrios Unidos. Esto es lo que Dairo Sánchez (2017) ha llamado el eterno retorno de la segregación.

Similar a lo ocurrido en Chambacú, sucedió en los asentamientos construidos alrededor del cerro de La Popa. El discurso institucional sobre la inconveniencia de la permanencia de familias en esta zona siempre se movilizó entre la protección y la explotación de este cerro, una zona de bosque seco tropical, es decir: entre protegerlo como zona de reserva ambiental y explotar turísticamente sus potencialidades paisajísticas. Pese a que siempre se planteó el “riesgo” de habitar residencialmente en estas lomas, el distrito no intervenía de manera estructural para la protección de la vida, garantizar vivienda digna y realizar las obras de estabilización que fueran necesarias. Operó la política del dejar morir.

Las comunidades que se fueron conformando alrededor del cerro de La Popa permanecieron por mucho tiempo sin acceso a servicios públicos, educativos, sociales, culturales; las comunidades autogestionaron sus mínimos vitales, hicieron posible la vida. Así, siempre fueron definidas desde la ilegalidad de su habitación en la zona, por lo tanto, ocupaban los márgenes de la ciudadanía con acceso a derechos.

La situación de “ilegalidad” —y riesgo— fue el argumento para posponer demandas comunitarias de vida digna en el territorio. Este término formaba parte del discurso en el que se justificaba que los servicios públicos no eran suministrados a esta zona porque quienes estaban en La Popa eran invasorxs, construcciones de asentamientos irregulares, tugurios e ilegales y, por tal razón, no debían habitar este lugar. Posteriormente, adquiere más fuerza la necesidad de reubicar a las familias para brindarles una “legalidad” (Padilla, Mercado y Núñez, 2021). Se trataba de una serie de omisiones institucionales para hacer invivible estas vidas.

Desde los 70 —año en el que se ejecutan importantes intervenciones urbanas para posicionar turísticamente la ciudad—, se empiezan a conocer pronunciamientos públicos que enfatizan en que estos asentamientos constituían un daño ambiental y obstaculizan la promoción turística de Cartagena. Así se planteaba en la prensa local:

Es La Popa sitio referido por visitantes nacionales y extranjeros. A tiempo se advirtió que el propio Convento y sectores adyacentes eran castigados por la erosión, así como se registraron los notorios perjuicios originados en la indebida ocupación de sectores cercanos, con la abusiva construcción de tugurios creándose una situación social molesta, que no puede dejar sino negativo balance [...] Los atrevidos moradores que por allí construyeron casuchas corren el riesgo de ser arrasados juntos con los pedazos de latas y desperdicios que tomaron para construir “techos y paredes”. (Diario de La Costa, 1977)

En consecuencia, se expide el Decreto 116 del 28 de abril de 1978, el cual declara al cerro de La Popa, Zaragocilla y las Lomas del Marión como zonas de reserva ecológica desde la cota 20m según IGAC. Esta delimitación del cerro como reserva acrecienta las disputas sobre el uso del suelo, ya que presenta condiciones favorables para los futuros proyectos turísticos, los cuales podría ser un motor económico para la ciudad (Mercado, Padilla y Núñez, 2021).

El cerro de La Popa empezó a ocupar un lugar central en las narrativas, donde emerge el criminal ambiental: las comunidades invasoras. Entonces —y de manera sutil— no era posible permitir el arraigo de la vida ahí

La cadena de adversidades que se abate sobre La Popa, sin embrago [sic], no se detiene allí. Contribuyen a la catástrofe el número infinito de invasiones del que quizá es el único accidente geográfico de importancia que posee esta ciudad insular y de caprichosa configuración topográfica. No se ha hecho un escrutinio formal de los asentamientos irregulares que proliferan y se multiplican todos los días en ese lugar estremecedor. A ello hay que sumarle la tala de árboles frutales y plantas ornamentales, que se encuentran en vía de extinción por la acción destructora que ejercen grupos de vándalos para los cuales no existen controles y mucho menos sanciones. (El Universal, 1986)

Desde entonces se sucedieron una serie de normatividades donde la vida del cerro se volvió la vida necesaria de proteger. A diferencia de lo ocurrido en Chambacú, estas comunidades no han sido definidas de manera tan explícita como una amenaza para el desarrollo, sino como una amenaza ambiental, toda vez que el discurso de la protección ha encubierto el de la explotación.

En la investigación que realizamos entre el 2019 y el 2020 para reconstruir el proceso de reubicación de familias de Loma Fresca y La María hacia *Flor del Campo*, identificamos que operaron, por lo menos, tres elementos discursivos:

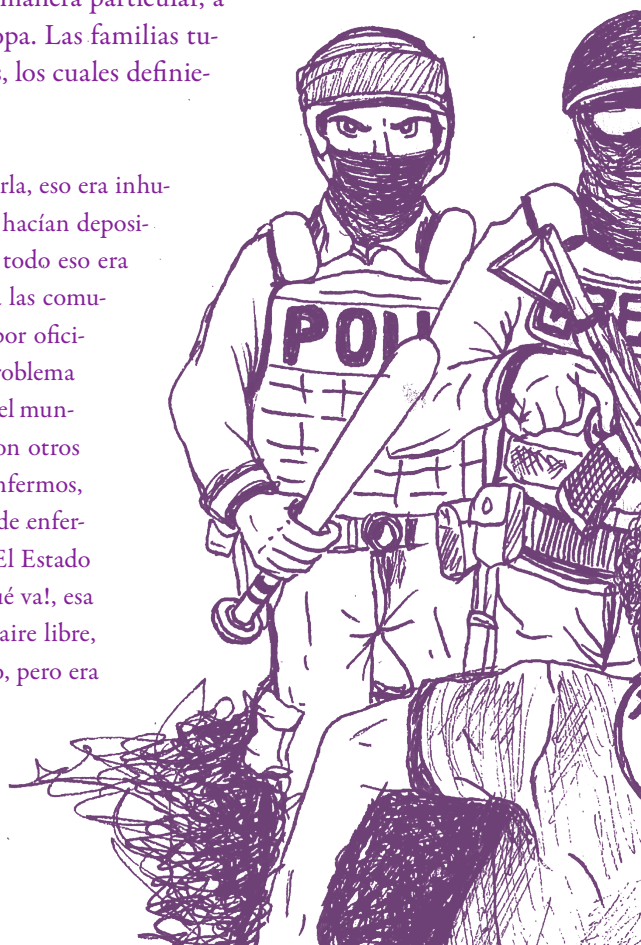
1. La idea del criminal ambiental, sobre todo cuando se posiciona el cerro como área de protección
2. Irresponsables con su propia vida, es decir, del sujeto que se sabe así mismo en riesgo y se mantiene en esa situación; por lo tanto, el distrito debe intervenir para protegerles y salvaguardar la vida [pero realmente lo que hace es administrar la muerte]
3. La idea de los “ilegales” en las formas como se apropian del espacio y en la forma como consumen servicios públicos. Conforme a lo anterior, hay que “reubicarlos” lejos: donde no puedan constituir daño ambiental, donde no se dañen a sí mismos, y donde se puedan formalizar-legalizar sus formas de vida. (Mercado, Padilla y Núñez, 2021, p. 147)

Con esto mencionamos que, sobre las comunidades asentadas en el cerro de la Popa, siempre han operado una imbricación de criminalizaciones racializadas, puesto que ha sido habitada por comunidades negras: criminalización de la pobreza, criminales por invadir terrenos, criminales por robar servicios públicos, criminales por habitar economías de la ilegalidad (hurtos, pandillas, microtráfico).

En la década del 2000, ocurren dos emergencias ambientales, en el marco de las olas invernales producidas por el fenómeno de la Niña, las cuales fueron reafirmando la noción de comunidades en riesgo y la necesidad de la reubicación. En el 2004, las intensas lluvias afectaron las viviendas con deslizamientos y derrumbes parciales; en esta ocasión, las familias fueron trasladadas a albergues y, al no encontrar soluciones a su situación, pronto regresaron a sus casas, haciendo las adecuaciones necesarias para rehabetarlas, puesto que los albergues les resultaban lugares carentes de dignidad. Algunas familias, cuyas viviendas sufrieron afectaciones mayores, fueron apoyadas con el pago de subsidios de arriendo.

Desde aquí se empezó a plantear seriamente un proyecto habitacional hacia el sur de la ciudad para reubicar a estas familias en riesgo; sin embargo, la construcción de estas viviendas estuvo rodeada de irregularidades y escándalos de corrupción que retrasaron su entrega en los tiempos previstos. En el 2007, nuevamente el fenómeno de La Niña afectó a la ciudad y, de manera particular, a las comunidades alrededor del cerro de la Popa. Las familias tuvieron que ser ubicadas otra vez en albergues, los cuales definieron como inhumanos.

Eso era inhumano, la verdad hay que decirla, eso era inhumano, todo el mundo ahí mismo, ahí mismo hacían deposiciones, todo el mundo se bañaba ahí mismo, todo eso era una cloaca, porque el Estado a veces brinda a las comunidades necesitadas eso solamente, lo hacen por oficina y no van a donde verdaderamente está el problema y apersonarse de lo que está sucediendo. Todo el mundo en un solo montón, unos amontonados con otros y ahí los que tenían gripa, los que estaban enfermos, todo eso estaba una sola mezcla de tutifruti, de enfermedades y bacterias, y todas esas cuestiones. El Estado siempre dice que da las cosas buenas, pero ¡qué va!, esa es la mentira más grande. En colchonetas, al aire libre, eso sí, repartieron colchonetas no digo que no, pero era una situación inhumana donde no podían meter a las personas. Ellos dirán esta gente son del montón, vamos a



tratarlos como personas del montón, no debería ser así. (Víctor Padilla Herrera, comunicación personal, febrero del 2020)

Fue en este contexto que estas familias son reubicadas en *Flor del Campo*, el primer conjunto habitacional construido y que no se encontraba finalizado, según han afirmado sus habitantes. Aunque no estaba terminado, y bajo la amenaza de riesgo inminente para la vida, las familias presionaron la reubicación, a pesar de que no tenían suficiente información sobre el nuevo barrio que habitarían. Se trataba de viviendas de 50 metros cuadrados, con una sala, un cuarto y una cocina que dificultaba la cohabitación de familias extensas. Tampoco había la infraestructura que permitiera la garantía de derechos (escuela, centros de atención en salud, recreación, acceso a transporte); esto se fue adquiriendo con el tiempo.

Particularmente, tuvieron que enfrentar los imaginarios sociales sobre el cerro de La Popa como lugar de “pandilleros y delincuentes” que afectó a niños y jóvenes en contextos escolares externos al barrio, donde tuvieron que incorporarse por la ausencia de escuelas en esta zona de expansión urbana. En la investigación local realizada sobre la reubicación

hacia *Flor del Campo*, algunos líderes y lideresas manifestaron que este proceso no contó con acompañamiento, se fracturaron dinámicas familiares, comunitarias y económicas construidas en la zona norte sin la debida atención y reparación. Uno de los líderes manifestó: “Nos perjudicó bastante, fue duro, desde el momento en que nos echan aquí, como decía yo, que nos echaron para acá como puercos, como cerdos ahí para el monte, para que los maten las culebras” (Germán, comunicación personal, octubre del 2020).

Además, la reubicación no consideró las dinámicas internas de conflictividad social entre grupos de pandillas pertenecientes barrios alrededor del cerro de La Popa —asunto no atendido lo suficiente por el distrito con anterioridad— y los reubicó juntos, intensificando relaciones de confrontación, violencia y muerte que, posteriormente, han venido a justificar la violencia policial, sin que el distrito asuma su responsabilidad en la profundización de estas violencias.

De esta forma, Barrios Unidos emerge como una nueva espacialidad urbana ubicada en la localidad De la Virgen y Turística que, según el último



censo de 2018, es la más poblada (con 391 780 habitantes) y la más empobrecida, con el 70 % de personas en tal condición de pobreza. Entre los barrios con índices más altos de pobreza se encuentra, justamente, los que integran a Barrios Unidos: Ciudad Bicentenario, Villas de Aranjuez y *Flor del Campo* (Cartagena Cómo Vamos, s.f.). Estos datos nos permiten inferir que esta localidad se está densificando —entre otros factores— como producto de procesos de segregación racial que operan a través de las reubicaciones y en las que habitan comunidades con las peores condiciones de vida en la ciudad, una espacialidad donde la pobreza está racializada.

Además, esta nueva configuración urbana, construida a partir de procesos de segregación racial, ha configurado espacialidades de riesgo y muertes para lxs jóvenes. Con la segregación, se han venido produciendo, como diría Mbembe, mundos de muerte. En el 2020, la Defensoría del Pueblo levantó una alerta temprana en la que se incluyen Barrios Unidos en la ubicación del riesgo. Destaca como grupos poblacionales en riesgo:

Niñas, niños y adolescentes (NNA) en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica tanto en el área rural como urbana, quienes se encuentran en alto riesgo de utilización e instrumentación por parte de bandas de la delincuencia organizada y grupos armados ilegales, así como de explotación económica y explotación sexual comercial. Segundo, la Troncal del Caribe, una de las vías más importantes de la región, atraviesa de norte a sur a la ciudad de Cartagena y la conecta por la salida suroriental con los municipios de Turbaco y Arjona, constituyendo una zona de acopio de clorohidrato de cocaína, aledaña a la salida hacia el mar Caribe. Su localización sobre la Troncal de Caribe (Ruta 90) y su cercanía con la subregión de Los Montes de María, además de su densidad poblacional y amplias extensiones de tierras, hacen de estos dos municipios un área geográfica codiciada para los grupos armados ilegales en su proyecto de control territorial y expansión urbana. (AT 002, Defensoría del Pueblo, 2020, p. 7)

La segregación racial estaría operando hacia las periferias de la ciudad, las cuales se han ido consolidando como zonas estratégicas para la circulación de economías ilegales vinculadas al narcotráfico y la instalación de estructuras criminales paramilitares. Esta alerta temprana indica que

Es importante considerar que estos tres municipios se comunican con todo el departamento a través de un complejo sistema de vías terrestres y fluviales que finalizan en el área portuaria e industrial de Cartagena, así como con la desembocadura del Canal de Dique, que se convierten en puntos estratégicos de entrada y salida de grandes cantidades

de mercancías legales e ilegales. Dichos puntos de salida hacia el territorio marítimo se comunican a través de varios corredores: dos vías de salida hacia el norte (Vía al Mar y La Carretera de la Cordialidad [hacia donde se ubica Barrios Unidos] que son segmentos de la Troncal del Caribe) y dos hacia el sur (La Troncal del Caribe y la Variante Mamonal). Tales corredores hacen que la capital del departamento de Bolívar junto con los municipios de Arjona y Turbaco, conformen una zona de alto valor estratégico para los grupos armados ilegales que ejercen control social y territorial en la Costa Caribe como las autodenominadas AGC, también conocidas como Clan del Golfo, Los Pachenca y otras organizaciones criminales que estarían surgiendo en la región, conformadas presuntamente por exparamilitares, entre ellas, el llamado “Bloque Costeño”. Sumado a estos factores geoestratégicos, el escenario de riesgo para la población civil se deriva de una serie de hechos que dan cuenta de la reconfiguración de la disputa armada, debido la desmovilización de las extintas FARC y el surgimiento de grupos de disidentes, la consolidación de las autodenominadas AGC y reestructuración de Los Pachenca [...] así como la diversificación del crimen transnacional asociado con el auge de los carteles y mafias internacionales. (AT 002, Defensoría del Pueblo, 2020, p. 8)

La alerta advierte que para el caso de Cartagena:

[...] y su articulación regional resulta particular en razón al reconocimiento nacional e internacional como destino turístico, comercial e industrial, lo cual hace que los actores armados ilegales y del crimen organizado actúen bajo ciertos códigos, alianzas y estrategias que se camuflan entre lo legal y lo ilegal. A la par, las críticas condiciones de calidad de vida de gran parte de su población tanto rural como urbana, el reforzamiento de la exclusión social y política de grupos históricamente vulnerables, así como la discriminación y segregación socioespacial, se suman a un panorama de crisis de gobernabilidad que terminan favoreciendo el ejercicio de control social sobre la población y la propagación de economías legales e ilegales en el territorio, por parte de estructuras armadas al margen de la Ley [...] Todo ello se agrava por las pocas posibilidades de acceder a un empleo digno y las altas tasas de deserción escolar desde el nivel preescolar hasta el secundario, lo cual es aprovechado por las estructuras armadas para comportarse dentro de los territorios como el principal empleador. Los actores armados utilizan a NNA en situación de vulnerabilidad socioeconómica que se refleja, según las mismas palabras de los habitantes y las entidades públicas, en la “falta de oportunidades”. Las localidades 2 y 3 del Distrito de Cartagena, así como los barrios populares de Arjona y Turbaco, donde históricamente se ha concentrado la mayor cantidad de personas en condición de pobreza y pobreza extrema, reportan, también, los índices más altos en lo que corresponde a diversas formas de violencia como la homicida y la basada en género. (AT 002, Defensoría del Pueblo, 2020, p. 15)

La alerta advierte que estxs jóvenes estarían siendo instrumentalizados para la intimidación de comunidades, tareas de campaneo, traslado de drogas en pequeñas cantidades, cobro de vacunas y acciones de sicariato. La formación de grupos de pandillas, en las que participan estxs jóvenes, en la mayoría de los casos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, ha conllevado a la materialización de homicidios, ya sea por estrategias de exterminio social o por retaliaciones entre grupos de microtráfico. Los recientes casos de amenaza a través de panfletos, homicidios y lesiones personales se relacionan con formas de ajusticiamiento por parte de “pagadiarios” que han sido atracados por estxs jóvenes o que generan una baja percepción de seguridad (AT 002, Defensoría del Pueblo, 2020).

Conforme a nuestro posicionamiento político-conceptuales, el escenario anterior ha ido configurando un territorio de excepción en Barrios Unidos; para ser más enfáticas: las zonas de segregación racial se han convertido en zonas de excepción, donde lxs jóvenes negrxs criminalizadx son leídos como un problema social, lo que autoriza a la policía a violentar y asesinar. Esto es así porque lxs jóvenes negrxs, en barrios de segregación, son leídxs como un problema de seguridad; toda la acción de la policía —en un estado permanente de excepción— se realiza en nombre de la seguridad. La violencia, la muerte y el riesgo permanente de muerte que enfrentan estxs jóvenes no son vistos como crímenes; por el contrario, son prácticas necropolíticas legitimadas social e institucionalmente. Por esto, hemos planteado que la violencia policial —homicida o no— ha operado como una forma de “limpieza social” —lo que el CNMH llama exterminio social—, utilizada para higienizar el territorio de criminales. Frente a estxs jóvenes, definidxs como consumidorxs, vagxs o delincuentes, por estar vinculadx pandillas, economías del microtráfico, el hurto y otras actividades ilícitas, la violencia no se define como delito, dado que estos cuerpos son puestos en un margen de ciudadanía que les despoja de derechos. Esta es la razón por la que la mayoría de ellxs, y sus familias, no apelan a la denuncia en casos de violencia policial racista. Así, jóvenes negrxs como *homo sacer* son víctimas del exterminio social e institucional.





VIOLENCIA POLICIAL EN **BARRIOS UNIDOS**



Hemos analizado los resultados de las entrevistas realizadas y las cartografías sociales en clave de patrones que legitiman y justifican el uso de la violencia policial contra jóvenes negrxs de Barrios Unidos. Identificamos tres: i) el uso desproporcionado —y muchas veces ilegal— de la fuerza para contener la conflictividad social expresada en enfrentamientos entre jóvenes vinculadxs a pandillas, ii) criminalización del consumidor y iii) la violencia policial como mecanismo de castigo de jóvenes que se presume desviadxs o disfuncionales socialmente. A continuación, desarrollaremos estos patrones.

Territorios de excepción. Antes y después de la pandemia

En la memoria cartagenera, dos de las pandillas históricas con mayor reconocimiento en la ciudad tuvieron lugar en las faldas del cerro de La Popa: Los Calimanes y Las Águilas. Teresa, recuerda que, antes de ser reubicada en *Colombiatón*, vivía en Loma Fresca, donde se habían construido dinámicas interbarriales, organizadas en función de las fronteras imaginarias creadas entre estos grupos.

[...] en ese tiempo, a uno le tocaba ir a buscar regalos al otro barrio [porque hacían parte de programas infantiles de apadrinamiento] y siempre molestaban ¡no, que son de los Calimanes! Y siempre los hombres tenían problemas con eso. (Teresa, comunicación personal, diciembre del 2024)

Recuerdos similares tiene Andrés, quien antes de vivir en *Colombiatón* habitaba en el barrio San Francisco, el cual también se halla en la territorialidad cercana al cerro de La Popa.

Para ese tiempo había bastante problemas de pandillas en San Francisco, estaba la vaina bien pesada y pues yo ya no tenía casa propia [...]. Estaban los Wencelaos con Los Trikinais, creo que eran esos, eran peleas casi todos los fines de semana y hasta entre semana, con balas y todo, con armas de fuego y todo. Cada vez que llovía se formaban peleas ahí en la calle por donde yo vivía, por el 7 de Agosto. (Andrés, comunicación personal, diciembre del 2024)

En este contexto, sobre los barrios alrededor del cerro de La Popa se construyó en la ciudad —a nivel institucional y social— una narrativa única como una zona de “pandilleros”. La investigación local que realizamos en el 2019 arrojó que las reubicaciones de estas

comunidades hacia Barrios Unidos se produjeron desconociendo —en términos de ignorar deliberadamente— estas dinámicas de conflictividad social entre barrios; sin duda, bajo la suposición de la desechabilidad de estas vidas. De esta manera, integrantes de diferentes pandillas, que vivían en barrios distintos, fueron ubicadxs en un mismo sector, pasando forzosamente a ser vecinxs. Esto configuró dinámicas urbanas en las que se intensificó la tensión, la confrontación y la violencia: lo que antes era confrontaciones y fronteras entre barrios, pasó a ser fronteras entre manzanas de un mismo barrio. El conflicto transitó de interbarrial a intrabarrial. El distrito no atendió antes esta conflictividad social, solo priorizó la entrega de casas y el traslado.

Para Andrés, parece deliberado haber trasladado la violencia en el norte hacia el sur, donde no pudiera afectar las cercanías con las geografías turisticadas de la ciudad.

Igual acá [Barrios Unidos] también había peleas y pues aquí había muchas cosas que se veían igual allá [hacia el cerro de la Popa]. Y entonces las condiciones eran de pronto las mismas o peores, pues, ajá, del barrio anterior lo que pasa es que, así como vinieron reubicados gente buena, también hubo gente mala que vino reubicada, por lo menos pelados que estaban en pandillas y esas cosas. San Francisco, La María y esos sectores eran muy grandes. Entonces, si los pelados, por decir caminaban barrios y entre varios para ir a pelear, cuando quedaron reubicados quedaron reubicados más cerca, entonces la cuestión era que ellos cuando se veían peleaban, forman su pelea, sus vainas. Yo los primeros dos fines de semana salí por aquí, se formó una pelea y yo quedé en medio de la pelea. Entonces, yo enseguida dije como que esto es la misma, pero con distinto olor. Bueno, no sabría decirlo así, pero pareciera como si fuera una estrategia porque por lo menos poner a los de un bando en *Flor del Campo* y a los del otro bando en *Colombiatón* y que vengan para matarse lejos del centro, lejos del distrito turístico, pues parece coincidencia, pero no se sabe. (Andrés, comunicación personal, diciembre del 2024)

“Lo que pasa en estas manzanas es un conflicto que hay ahí entre manzanas y que la manera en la que el distrito y la policía resuelven es masacrando a la gente a punta de golpe” (Victor, comunicación personal, diciembre del 2024)

Con las cartografías sociales, encontramos que la conflictividad caracteriza la relación entre las manzanas que integran los barrios trabajados.

En cada una se evidencian los elementos identificados y correspondientes a las siguientes convenciones:

CONVENCIONES

Manzana



Jóvenes



Baldío

Colegio



Caño

Iglesias



Lugar de
esparcimiento
y expendio de licor

Fiesta



Alianza entre
manzanas

Lugares inseguros



Agresiones físicas
de la policía

Policía



Frontera invisible

Disparos
de la policía



Allanamientos

Detenciones de
la policía





CONVENCIONES

Manzana **M**

Jóvenes

Baldío

Colegio

Caño

Iglesias

Lugar de
esparcimiento
y expendio de licor

Fiesta

Alianza entre
manzanas

Lugares inseguros

Agresiones físicas
de la policía

Policía

Frontera invisible

Disparos
de la policía

Allanamientos

Detenciones de
la policía

Sobre esto, lxs jóvenes comentaron que:

La policía retiene a jóvenes que tienen conflictos con otras manzanas y los utilizan de carnada para obtener un día de permiso; ejemplo, retienen a un joven de la manzana 2 que tiene conflicto con los jóvenes de la manzana 4, lo recogen en su manzana, lo trasladan en la moto de policía hasta la manzana con la que tiene el conflicto y lo dejan ahí para que sus “enemigos” lo golpeen o se “venguen”, la policía solo interviene cuando está muy herido y retiene al agresor para reportar su captura y pedir sus beneficios compensatorios.

(Cartografía social en Colombiatón,
comunicación personal, octubre del 2024)





El conflicto que ha habido acá en el barrio *Flor del Campo* ha sido entre las manzanas Uno y Cinco, que se alían para pelear contra las manzanas Cuatro y Siete. Este conflicto, que lleva ya varios años inactivo gracias a algunos procesos sociales que se gestaron desde ciertos proyectos en los que participé, tiene su origen —según muchas personas— en lós que vienen desde San Francisco, ya que son dos familias que se han enfrentado a lo largo de los años por temas de drogas y territorio. Es una situación que ha cobrado varias vidas y que se trasladó desde San Francisco, La María y toda esa zona, hasta el barrio *Flor del Campo*. No es algo que sea oculto para la gente del barrio, ni para algunas personas de la ciudad, que los dos principales actores que suscitaban estos enfrentamientos pertenecen a grupos armados al margen de la ley que operan fuertemente en la ciudad. En esta zona se habla, pero nadie dice nada, por miedo o por simple complicidad. Aunque nuestros barrios de documentación son *Flor del Campo* y *Colombiatón*, cabe también mencionar que este conflicto parece reproducirse en otros barrios aledaños como Ciudad del Bicentenario, compuesto por las Torres, las Casas Amarillas, las Casas de PVC y las casas de dos pisos. Ha habido momentos en que este conflicto ha intentado reactivarse, sin embargo, yo como habitante de este barrio agradezco que los altercados que se han presentado últimamente no han sido de tal relevancia como para reactivar todo eso. Tal vez se debe a que las dos personas que suscitaban estos enfrentamientos ya no hacen parte de ninguna de las dos manzanas.

(Víctor, comunicación personal, diciembre del 2020)



En este contexto, un primer asunto que afirmamos en los hallazgos de nuestro trabajo es que el distrito, por un lado, no ha asumido la responsabilidad de haber intensificado esta conflictividad y violencia social; por el otro, la ha instrumentalizado para legitimar la violencia policial que aquí se ejerce y configurar, como hemos dicho, territorios de excepción. Dicho en otras palabras, se asume que es una territorialidad habitada por pandillerxs y como “lxs pandillerxs no son ciudadanxs”, no tienen derechos y, sobre ellxs, se puede ejercer el uso desproporcionado —e ilegal— de la fuerza. Al tiempo, mantienen, lo que definen como criminalidad, a lxs sujetxs sospechosxs y portadorxs de la inseguridad en un margen geográfico controlado.

En las entrevistas realizadas, habitantes de los barrios han narrado que la policía impone una suerte de ley, al margen de la ley, para mantener o reestablecer el orden social amparados en una necesidad: controlar las peleas entre grupos de jóvenes. Ahora bien, hay una narrativa común que insiste en afirmar que la violencia policial se profundizó en el contexto de la pandemia. Si acudimos a nuestras categorías conceptuales, para jóvenes como Andrés, la pandemia creó una excepción que autorizó a la policía para ejercer desproporcionadamente la fuerza, que luego se volvió norma. En este contexto, los agentes del orden actuaron desatendiendo los principios de necesidad, constitucionalidad y legalidad, proporcionalidad y diferenciado en el uso de la fuerza.

La mayoría de los relatos sobre violencia policial racista en las entrevistas están marcados por el hito de la pandemia, donde registran como hechos victimizantes la agresión física, el daño en bien ajeno y allanamientos irregulares.

Los mismos ‘tombos’ son los que se paran a tirar peñón. Claro, ellos llegan y ellos llegan imponiendo su ley y tirando peñón. Hay gente que a veces está afuera viendo la pelea en la calle y han llevado, han llevado, sigue su bolillazo, sus palos, se los llevan hasta para el CAI. Hubo un muchacho que no peleaba con nadie, que es mecánico, se llama Kevin. Una revolución bien grande, él se metió a su casa corriendo y los policías se metieron a su casa, lo privaron⁷ todo, él se fue privado, privado para el hospital. Él estaba en su terraza, pasaron los policías, se metió [a la casa] y los policías se metieron más atrás de él, partiendo todo y sacándolo a lo mal. Le metieron hasta una vaina de humo a su casa, una granada de humo, de ese de gas lacrimógeno, se la metieron hasta su casa y todo, para que todo el mundo saliera. Y había niños. Es que Colombia en tiempo de pandemia y después de pandemia se volvió un infierno con los policías. Ellos primero van dando y después preguntando. A ellos no les importa quién es, para ellos todos son lo mismo. Antes de la pandemia se calmó, o sea, me explico mejor, antes de la pandemia sabíamos que, pues había conflictos, pero después de la pandemia en muchos aspectos empeoró, en muchos, porque por lo menos en pandemia los policías tomaron un modus operandi, por decirlo así, que era de pegar y después preguntar. (Andrés, comunicación personal, diciembre del 2024)

7. Se refiere a pérdida temporal del conocimiento a causa de los golpes.

Entraron a la casa de un vecino con armas y con los cascos puestos, partieron la puerta y gritaban que donde estaba, en la casa solo estaba una señora con cuatro niños pequeños, los niños lloraban y gritaban porque tenían miedo y no entendían lo que estaba pasando. (cartografía social en *Colombiatón*, comunicación personal, octubre del 2024)

Es importante anotar que, en estas comunidades segregadas racialmente, sobre las que operan representaciones criminalizantes, la inviolabilidad del domicilio⁸—establecida en el derecho— se suspende. Esto también era narrado de manera permanente por habitantes de la comunidad de San Francisco, donde asesinaron a Harol Morales; la comunidad, de forma constante, denunciaba allanamientos irregulares y violentos, donde sus viviendas y pertenencias resultaban dañadas, incluso, hurtadas por la policía. Es como si la noción de bien y propiedad privada no existiera en estas comunidades, que solo son leídas como amenaza para la propiedad privada de otrxs sujetxs con privilegios.

Teresa también recuerda la agresión física desproporcionada e innecesaria que ejerció la policía con ella durante pandemia.

Estábamos en tiempo de pandemia, y como en ese tiempo no permitían la aglomeración de personas, había como dos personas en la tienda, y el de la tienda nos había explicado: “ahora que se vaya a la una, va llegando y así para no hacer aglomeración en la tienda”. Y yo me senté en la esquina un momento para esperar que saliera la otra persona que estaba en la tienda. Cuando yo estoy sentada ahí en la esquina esperando, llegan dos policías. Y me dicen: “¿tú qué haces ahí, perra hijueputa? ¡Vete para tu casa!”. Yo le dije que yo estaba esperando de que se desocupara la tienda porque yo iba a comprar. “¡Váyase para su casa, perra hijueputa!”. En una de esas yo también me enojé, yo digo: “¡más perro hijueputa es usted!”. Cuando yo digo eso él se baja y me da, o sea, con el casco puesto en su cabeza, me dio con el casco en la mía, sacó con su cabeza me hizo así [señala que el policía golpeó su cabeza con el casco puesto contra la de ella]. Bueno y después ahí, o sea, yo también me le fui para encima y él empezó a pegarme. En ese tiempo mi hijo tenía como algunos 14 años, se dio cuenta de que el policía me estaba pegando, el hijo mío salió y se le fue para encima. Cuando el hijo mío se le va para encima el policía le da una patada que le marcó la pierna, le pegó una patada, le marcó toda la pierna, ya ellos ya después cuando vieron que la gente iba saliendo fue que cogieron y se fueron. (Teresa, comunicación personal, diciembre del 2024)

8. La inviolabilidad del domicilio constituye una de las piezas más representativas del principio de separación entre lo público y lo privado, puesto que excluye, en principio, de la intervención estatal, espacios cerrados al público, que se encuentran estrechamente vinculados con el ejercicio libre de la vida privada. La salvaguarda del domicilio frente a las intromisiones públicas manifiesta, a través de la protección de un espacio físico, la garantía misma del principio de libertad en varias de sus manifestaciones, tales como el derecho a la intimidad, esencial en una sociedad democrática respetuosa del valor de la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de creencias y de cultos y a la libre expresión cultural y de ideas. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional declara exequible el enunciado y los numerales 1 al 6 del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, en el entendido que el cumplimiento de las garantías allí previstas no excluye la realización de un control judicial posterior de la actuación policial (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-212 de 2017).

La policía construyó un orden por fuera del derecho, ejerciendo violencia física sin necesidad y proporcionalidad, utilizando artefactos que ni siquiera corresponden a su dotación y adelantando acciones contrarias a la prestación de su servicio. Estos artefactos, si bien no han generado un efecto letal, son utilizados para producir dolor sobre los cuerpos negros e intimidación. La policía en estos barrios actúa de formas muy coloniales, como patronos o mayoriales del orden en comunidades racializadas.

Ellos se paseaban patrullando con cables, cabuyas, palos, cadenas. Se paseaban patrullando. Al que vieran en la calle, sea lo que sea que estuviera haciendo, de pronto a veces uno buscando para comprar un poquito de comida o buscando para rebuscársela. Y si tú te veías en la calle, o sea, todo el mundo tenía que andar en la calle como si fuera un mafioso [huyendo], porque ellos al que vieran, sea quien sea, le daban. Y entonces ese abuso policial como que después de pandemia no se pudo borrar, quedó ahí. (Andrés, comunicación personal, diciembre del 2020)

Podríamos decir que el estado permanente de excepción en el que viven las comunidades se actualiza siempre. Creemos que estos barrios habitaban espacios vacíos de derecho que hicieron posible nuevos espacios vacíos en el marco de la pandemia, que exacerbaban la violencia. Se trata al final de un continuum, como lo señala Javier:

La conducta que tienen los uniformados contra los jóvenes, más con la raza negra, veo que hay como que bastante excepción ¿si me entiendes?, que la policía agrede demasiado a la gente que es de color morena y los trata como si fueran animales. Así mismo se vivía en el barrio donde vivía, en La Brisa anteriormente. Eso se ha regresado acá y aún hasta peor acá. Porque anteriormente tenían compasión hasta con las mujeres, acá no, acá ahora en este tiempo hasta las mujeres las golpean. Y eso es lo que yo recuerdo que se ha trasladado. Como ven que de pronto los negros se dice que son de bajos recursos y no tienen educación, por decirlo así, ellos hacen y deshacen con estos jóvenes lo que les da la gana, los ‘intratan’ tanto como verbal como como carnal por decirlo así [hace referencia a la agresión física]. (Javier, comunicación personal, diciembre del 2024)

Lo que es cierto es que, durante la pandemia, la intervención institucional actuó como necropoder —con necropolíticas— de manera que el aislamiento, como medida preventiva para hacer vivir —biopolítica— en estas comunidades, actuó produciendo sufrimiento, daños físicos, psicológicos y, en los sucesos límite, muerte (como fue el caso de Harold).



Esta exacerbación como excepción de la pandemia —que luego devino en norma desde la lectura de algunxs jóvenes— se ha visto justificada comunitariamente por el escenario de conflictividad social permanente que planteamos al inicio de este acápite. De esta forma, se responsabiliza a lxs jóvenes en confrontación de la violencia generalizada que ejerce la policía, incluso contra personas que no están involucradas en esta relación de conflicto. Agredir a estas personas actúa como una violencia aleccionante, no solo para que se distancien del escenario de la conflictividad, sino para que la comunidad cree la necesidad de producir la diferenciación entre “lxs que pelean” y lxs que no; entre lxs ciudadanxs y lxs que no lo son; entre lxs que merecen la violencia, el castigo y el dolor y lxs que no, para que, finalmente, incorporen la idea de que “se buscaron” esta agresión, evadiendo la responsabilidad de la policía. De esta forma, se sugiere que, en el escenario de la conflictividad, todxs están desprotegidxs, es decir, expuestxs a la violencia policial, siendo esta una forma de control para que las personas permanezcan en sus casas y que lxs jóvenes, particularmente, no habiten la calle y los lugares de interés común.



Ellos casi siempre actúan así. No sé si porque ya estarán también aburridos aquí, porque hay veces que también los entiendo, que cogen y les pegan a los muchachos, porque yo también digo, a veces estarán hasta aburridos de esos pelados que pasan peleando. Después de pandemia, como hace dos años después, 2022 aproximadamente, estaban agrediendo a la persona que vivía conmigo anteriormente. Yo cuando vi que lo estaban agrediendo, yo me fui a quitárselo. Cuando yo voy a quitárselo, el policía me da con el bolillo, me lo marcó aquí, cuando ya el vio que ya yo tenía el bolillo aquí marcado que dije: “¡Te voy a demandar!” fue cuando ya el paró porque vio que me había marcado con el bolillo. Le pegaron porque había varios en la esquina y no querían en la esquina personas. Le pegaron con el bolillo, le partieron la cabeza. No sé sus nombres, pero sí los tenían identificados de que eran los policías a los que todo el mundo tenía que respetar, porque no me acuerdo cómo era que les decían ahora a esos policías, cuando ellos estuvieran de turno, o sea, los muchachos tenían que caminar suave, llegar a tenerles miedo a ellos, porque no comían de mujeres, de nada. (Teresa, comunicación personal, diciembre del 2024)

Estaba yéndome de una pelea y el policía llegó y me pegó con un palo en la cabeza, me pegó tres palazos. Me pegó uno por la cabeza, me pegó uno por aquí por el pecho y me pegó uno por la espalda. estaba lloviendo y yo vi la pelea, entonces yo cuando lo vi, me alcanzó a pegar por aquí y por aquí. Después se bajó y yo le pregunté: “¡qué, si no estaba peleando!”. En vez de decirme que yo me callara, me pegó dos palos más y entonces se bajó el otro a pegarme y yo corrí. Los demás corrieron como yo, yo me quedé ahí y me cayeron a mí. Era un palo de madera, lo llevaba con él en la mano. Lo usan, lo usan, o sea, no era el que le entrega la policía, sino otro palo así de madera. Yo me cansé de meter en una casa, pero el muchacho no me dejó meter, él me persiguió y como yo me quedé en esa casa. Y él se bajó de la moto y me dijo que yo qué hacía peleando y yo le dije que no estaba peleando y que estaba viendo peleas. Él pensó que estaba huyendo de él. Tenía impermeable y no pude ver, como tenía el casco puesto y una capucha, no se ve el rostro de rostro. (Jorge, comunicación personal, diciembre del 2024)

La policía siempre que llegaba, llegaba de una manera no debida. Le daba hasta a los que venían de trabajar, por decir verdad. Le daban a todo el que consiguieran por ahí en ese pedazo, le daban. Y es una manera no aceptable. ¿Por qué? Porque venían en el momento de pronto si tú estabas haciendo algún mandado y te cogían en el momento, la policía llegaba en el momento de la pelea, te daban a ti palo, te daban golpe por donde te cogieran. Se dice la Reacción⁹. ¿Qué es la Reacción? Como un uniformado que va a maltratar a una persona que no tiene que ver, incluso, humanamente tampoco esas personas [haciendo referencia a los jóvenes que se enfrentan], tampoco merecen que ellos los cojan y les den golpe, el deber de ellos es cogerlo y meterlos presos. Ellos, me parece a mí, ellos no, ellos van agrediendo a la gente. (Javier, comunicación personal, diciembre del 2024)

Además de los repertorios anotados en los relatos, otra de las formas como actúa la policía para disuadir enfrentamientos entre grupos de jóvenes es a través de lo que comúnmente se nombra como “disparos al aire”, aun cuando en la aglomeración haya personas que no hacen parte de la confrontación; esto genera escenarios de alto riesgo. Esta práctica es frecuente y normalizada por los agentes de esta institución, desconociendo que activar el arma debe ser una medida extrema, bajo principios de proporcionalidad y en estado de necesidad. Es una práctica de riesgo que reafirma que en estos territorios de excepción las vidas pueden ser sacrificadas (por ejemplo, al ser impactadas por uno de estos disparos).

“El miedo que tenemos no es hacia lo pelaos de barrio que pelean, sino a los disparos indiscriminados que siempre hace la policía” (cartografía social en *Colombiatón*, comunicación personal, octubre del 2024).

9. En referencia al Escuadrón Móvil Antidisturbios, hoy categorizados por la resolución 1091 del 31 de marzo del 2023 como dispositivos o equipos de intervención (DMA, DEI, EDI, EMI y UNDEMO).

De cualquier forma, consideramos importante precisar que el control sobre el espacio público habitado por jóvenes negros no se inaugura con la pandemia, la pandemia reprodujo un continuum de violencia donde el encuentro colectivo entre jóvenes racializadxs se percibe como sospechoso. De hecho, las violencias policiales afectan el derecho de las personas negras a la ciudad y el territorio; un patrón de esta violencia se ejerce en lugares de encuentro colectivo entre jóvenes negrxs que habitan barrios populares, espacios que permanentemente están siendo criminalizadxs y puestos bajo sospecha (esquinas, canchas, motiladeros, lavaderos de moto, estaciones de mototaxis, establecimientos para esparcimiento, entre otros), entonces son obligadxs a habitar el espacio público bajo las marcas de la peligrosidad.

Lo cierto es que la policía ha reforzado un orden y control social donde le está prohibido a lxs jóvenes negrxs habitar de manera colectiva en el espacio público, especialmente en horarios nocturnos. La relación calle-noche-joven negrx se lee desde la criminalidad. Bajo este mismo patrón han operado ejecuciones extrajudiciales —procesos de exterminio social llamados limpieza social— en la ciudad de Cartagena. Así, las madres viven con miedo a que sus hijxs no regresen si se encuentran fuera de sus casas en horarios nocturnos, porque viven siempre con la amenaza de muerte a causa del ejercicio de violencia policial.

Ellos llegan con una manguera [la policía]. El primero que cogen, a ese le dan, hasta el que este viendo [una pelea]. Cuando salen corriendo, ellos con la manguera los alcanzan más rápido. Si no es que, en la esquina, o sea, ellos no querían como que nadie en las esquinas. Y ellos se ponían en la esquina. O sea, algunos alcanzaban a correr y otros no. Con las mujeres, o sea, pueden que le den cachetas, algo de no dejarles marcadas, como la mujer



siempre puede demandar más que el hombre. Yo siento bastante miedo por mi hijo, porque ellos a veces se acuestan tarde, entonces yo le digo, o sea, no sé, me da miedo de que algunas noches de que ellos se acuestan tarde jugando el juego ese, vaya a llegar la policía ahí, porque como ellos van es pegando, ellos son los chachos. (Teresa, comunicación personal, diciembre del 2024)

Por último, es importante anotar, para cerrar esta parte, que el imaginario criminalizante sobre lxs jóvenes negrxs —y las personas negras en general— lleva a imaginar que todas sus pertenencias fueron obtenidas a través del crimen —el hurto— o que no las merecen, es decir, que la persona negra no debe poseer. En este contexto, varias narrativas señalan que la policía comete robos contra ellxs, haciéndose a sus pertenencias, sin que esto sea visto como delito. En se sentido, el lugar de “nuda vida” en el que son ubicadas las personas negras hace que contra ellos ningún crimen sea visto como violación de la ley.

Yo siento que aquí no hay seguridad, con ese temor de que vayan a atracar. Siento que no hay seguridad y a veces siento, o sea, de que, si a uno lo atracan y algún policía alcanza a un robo, no lo devuelven, se lo queda. Eso ha pasado, a mí no, pero sí he visto que ha pasado prácticamente lo que roban las personas, como por decirlo así, cuando los capturan, o sea, no lo dan como por conseguido, sino como por perdido. (Teresa, comunicación personal, diciembre del 2024).

Muchas veces me llegaron a agredir, muchas veces me llegaron a robar, a atacar, a quitarme teléfono, a quitarme plata de forma abusiva. La misma policía... la misma policía... la misma policía. Una vez que, en Bicentenario [otro de los barrios que hacen parte de Barrios Unidos], en el parque de Bicentenario, jugando dama con unos compañeros casi me matan por un teléfono, llegaron casi 20 motos de casco negro y llegaron guardia partido veía atacar a robar porque esa es la palabra que fue le quitaron plata de la cartera, al otro le quitaron teléfono, a mí me quitaron un teléfono, al otro se le llevaron una caja de música, y pues agredir. No solamente a quitar, también a golpear, a mí me pegaron una palera que yo cogí hospital. Entonces, sí, es la policía, pero la policía roba y atraca más que los bandidos, yo le tengo más miedo a la policía que a los bandidos. (Andrés, comunicación personal, diciembre del 2024)

Tener una cadena de plata, anillos, cosas, ellos [la policía] te las ven y se enamoran... ellos [la policía] vienen, no que regálame una requisa, cuando están en la raqueta, como le dije uno es consumidor, le consiguen una bomba a uno, ellos le dicen: “¡acompañame al CAI que no va a pasarte nada!”, cuando uno llega al CAI ellos vienen y le quitan todas las pertenencias a uno, te roban, te clavan [alusión a agresión física] y te sueltan. (cartografía social en *Flor del Campo*, comunicación personal, octubre del 2024)

Respecto a los actores responsables de esta violencia, además de los policías asignados al CAI de *Flor del Campo*, es importante anotar que la comunidad hace permanente referencia a los “Cascos negros” o “La Reacción”, que son utilizados como sinónimos para hacer referencia al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el cual ha sido reformado durante el actual gobierno de Gustavo Petro, pasando a Unidad de Diálogo y Mantenimiento de Orden (UNDMO¹⁰), también se refieren al GOES.

El ESMAD fue creado en 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana en uno de los periodos más agudos de la guerra en Colombia; depende de la policía y está adscrito al Ministerio de Defensa. Aunque fue fundado bajo un decreto transitorio, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) lo formalizó y creó el curso que capacita a los agentes de esta unidad. Cientos de agentes del ESMAD han sido procesados por infracciones disciplinarias durante años. Hasta 2015, la Fiscalía había procesado casi 40 000 casos, de los cuales 18 resultaron en condenas, según reportes oficiales. Los agentes antidisturbios están equipados con lanzadores de proyectiles múltiples que pueden disparar balas de salva, gases lacrimógenos, aturdidores y bolas de paintball (BBC, 2021). Durante las jornadas de paro y estallidos sociales en el país, la violencia del ESMAD ha llegado a ser letal.

El sentido de este cuerpo armado era actuar frente a aglomeraciones de público cuando las mismas resulten en “disturbios, motines y demás situaciones de violencia” que amenacen la convivencia y la seguridad ciudadana (Patiño, 2020). La presencia del ESMAD, como uno de los actores responsables de la violencia policial en Barrios Unidos, reafirma que nos encontramos ante territorios de excepción, puesto que la comunidad ha manifestado que había intervenciones del ESMAD en fiestas familiares o barriales, donde no había riesgo para la seguridad y la convivencia, volviéndose una normalidad su presencia en el barrio para disuadir cualquier tipo de encuentro colectivo.

Situación similar ocurría con el GOES, entendida como

la unidad especial de reacción, orientada a la disuasión y control de los delitos de impacto social que más afecten las jurisdicciones, mediante la ejecución de operaciones tácticas de Policía, requeridas en apoyo al desarrollo de investigaciones judiciales y procedimientos establecidos por el Comando de Policía Metropolitana y Departamento de Policía. (Policía Nacional, s.f.)

10. Las organizaciones reunidas en la Mesa por la Reforma a la Policía anotan que la UNDMO representa un cambio de gran relevancia para prevenir intervenciones y posibles vulneraciones de DD. HH.; sin embargo, se siguen presentando arbitrariedades en el acompañamiento de protestas. Al respecto, la Campaña Defender la Libertad: un Asunto de Todas registró un total de 703 agresiones desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Las organizaciones señalan, de forma preocupante, el aumento de personas defensoras de derechos humanos que hacían parte de Comisiones de Verificación e Intervención (CVI) que han sido agredidas y la ocurrencia de las dispersiones indiscriminadas por parte de la UNDMO. También, indican, como alarmante, la persistencia de homicidios presentados en zonas predominantemente rurales del país, y los casos de lesiones oculares en universidades (Mesa por la Reforma a la Policía, 2024).

Sus ámbitos de acción, entre otros, se dirigen a

orientar y apoyar al Comando Operativo de Seguridad Ciudadana y las Seccionales de Investigación Criminal e Inteligencia de la Unidad en los procedimientos de operaciones especiales y apoyo táctico para la resolución de crisis y la neutralización de las organizaciones criminales. (Policía Nacional, s.f.)

El GOES hacía presencia en el barrio para perseguir y criminalizar jóvenes negrxs, sin que hicieran parte de operaciones de inteligencia para el desmantelamiento de estructuras criminales. Se volvieron un generador de violencia e intimidación que actuaba con total impunidad durante la pandemia y en la actualidad.

Criminalización racializada del consumo y el consumidor

En Colombia, la política de drogas —que ha sido parte de una guerra contra las drogas— se sostenía en una tradición prohibicionista y represiva, que afecta a los eslabones más vulnerables de la cadena (entre esos, los consumidores). En consecuencia, han sido las personas empobrecidas racializadas, negrxs, indígenas, campesinxs cultivadorxs, quienes han resultado perseguidxs y prisionalizadxs.

La política contra las drogas —abordada como un problema de seguridad sin perspectiva de derechos humanos— ha reproducido la criminalización del consumo y del consumidorxs. Al respecto, la Comisión de la Verdad señala que

En Colombia no solo se ha perseguido al campesino cultivador, sino que la criminalización del consumo, el porte y el comercio de estupefacientes, establecida en la Ley 30 de 1986, ha derivado en que las cárceles estén llenas de personas con delitos menores por porte o venta de drogas, incluida la base de coca. Aunque desde 1994 la Corte Constitucional declaró legal el porte de la dosis mínima, en la práctica se ha hecho imposible diferenciar esto del comercio al menudeo. La población carcelaria aumentó 74% desde 1972 y creció 141% entre 2000 y 2015, específicamente la población encarcelada por delitos de drogas aumentó 289%. El impacto de estas políticas también ha tenido una diferenciación por género. Casi cinco de cada diez mujeres en prisión están detenidas por delitos de drogas. De estas, solo una ha cometido una conducta violenta o pertenece a una organización criminal. (Comisión de la Verdad, s.f.)

Como se mencionó, la Corte Constitucional despenalizó el porte de la dosis personal a través de la Sentencia C-221. Sin embargo, no ha logrado —a nivel social e institucional— descriminalizar al consumidor de la dosis. La lectura moral de las personas consumidoras ha legitimado su persecución, prisionalización y el ejercicio de la violencia policial.

SOBRE LA DOSIS PERSONAL...

TEN EN CUENTA QUE:

La Corte Constitucional dictó la Sentencia C-221 que les permitió a los adultos portar hasta 1 gramo de cocaína, 2 de metacualona, 20 de marihuana o 5 de hachís. La decisión se amparó en los argumentos de libre desarrollo de la personalidad, autonomía y libertad. La Corte declaró que las personas que portaran o consumieran estas dosis para su uso personal no deberían ir a la cárcel, ni pagar multas, ni mucho menos ser obligadas a recibir tratamientos (Pereira y Pérez, 2024).

Los avances en esta materia han ocurrido con muchas tensiones. Uno ellos está referido al porte y consumo de la dosis en espacios públicos. Las normas del Código de Policía (Ley 1801 de 2016) imponen sanciones administrativas por la posesión y el uso de drogas en este tipo de espacios. A través de la Sentencia C-127 de 2023, la Corte Constitucional ordenó a los entes territoriales regular en sus ciudades dónde y cuándo se pueden usar drogas en espacio público, con la importante claridad de que una prohibición general de 24/7 es inconstitucional, es decir, la prohibición no puede ser permanente o absoluta. Mientras tanto, los vaivenes del Decreto 1811 del gobierno de Iván Duque, que supuestamente castigaba la dosis mínima, solo generó confusión y, en las calles, permanecen las tensiones entre la policía y las personas que usan drogas y la imposición de comparendos (Pereira y Pérez, 2024).

Esta serie de medidas ha afectado a la población más joven. Según datos proporcionados por Dejusticia, entre el 2017 y 2022, la Policía ha impuesto un total de 1 188 906 comparendos por porte y consumo en el espacio público. El 99.6 % de las incautaciones de marihuana fueron por cantidades inferiores a la dosis mínima (20 gramos). La búsqueda de sustancias por parte de agentes de Policía se concentra en las ciudadanías jóvenes del país; el 71.4 % de los comparendos entre el 2017 y el 2022 fueron impuestos a personas entre los 16 y 30 años (Pereira y Pérez, 2024).

Uno de los debates sobre la regulación del consumo de sustancia psicoactivas (SPA) en espacios públicos, refiere a las amplias facultades otorgadas a las autoridades locales y a los agentes del orden. Dichas facultades se centran en la potestad que se les confiere a estas instituciones territoriales en la adopción de medidas restrictivas que podrían transgredir derechos fundamentales, como la libertad personal y el libre desarrollo de la personalidad, consagrados en nuestra Constitución Política de 1991 (ILEX, 2024). Esto ha sido un debate en Cartagena, con efecto sobre las violencias policiales que se ejercen contra jóvenes negrxs usuarixs de drogas.

Retomando lo planteado por Isabel Pereira Arana, integrante de la organización jurídica Dejusticia, les planteamos algunas de estas tensiones normativas desde lo nacional. Recogemos, también, algunos decretos que se han expedido en Cartagena, durante el primer año de gobierno de la actual administración del alcalde Dumek Turbay Paz, los cuales están situados en una perspectiva prohibicionista y represiva.

Tabla 1. - Fuente: elaboración propia.

Normativas	Descripción
El Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016).	Calificó como contravención el porte y consumo de SPA bajo diversas circunstancias y espacios. El literal C numeral 2 artículo 33 y numeral 7 del artículo 140 sancionaban el consumo de licor y otras SPA en el espacio público (Pereira y Pérez, 2024).
Sentencia C-253 de 2019 de la Corte Constitucional.	Declaró las normas anteriores inconstitucionales porque era una prohibición absoluta y general, que invertía el principio de libertad (Pereira y Pérez, 2024).
Ley 2000 de 2019/ Congreso de la República.	El Congreso expidió la Ley 2000, que adicionó varios artículos al Código y le cambió su nombre (Código de Seguridad y Convivencia), con el objeto de sancionar, entre otras conductas, el porte y consumo de SPA en varios subconjuntos del espacio público, como parques, centros deportivos y perímetros de escuelas. Esta ley se expidió bajo el argumento de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). En la práctica, con la Ley 2000 se dejó sin efectos la decisión de la sentencia C-253 de 2019, pues se volvió a sancionar de manera general el consumo en el espacio público (Pereira y Pérez, 2024).
Corte constitucional revisa la ley 2000 en el año 2023.	La Corte revisó las normas anteriores y tomó varias determinaciones que impactan el goce efectivo del espacio público por parte de las personas usuarias de drogas. En cuanto al porte, se dijo que, cuando se trata de consumo personal o medicado, no se puede sancionar, ya que se considera una conducta privada y protegida constitucionalmente. En cuanto al consumo, se concluyó que no son necesarias ni proporcionales, pero mantuvo estas restricciones bajo una condición: las autoridades territoriales deben definir las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que aplicarían estas restricciones. Por extensión lógica, se entiende que debería haber circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que sí se permita el consumo en el espacio público.

Decreto 1841 de 2018 (gobierno de Iván Duque).	Por medio del cual se adiciona el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”, para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas
Decreto 2114 de 2023 (gobierno de Gustavo Petro).	Deroga el decreto 1841 del gobierno Duque, con la intención de despenalizar el consumo y porte de la dosis personal, dejando a los entes territoriales su regulación en el espacio público.
Decreto 003 de enero 2024 de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias: “Por medio del cual se establecen medidas para restablecer el orden público en el Centro Histórico de Cartagena de Indias D.T. y C y su sector turístico en contra del turismo sexual y la trata de personas, en especial para proteger a los niños, niñas y adolescentes, y medidas en contra de la comercialización y tráfico de estupefacientes, y se dictan otras disposiciones” (Gobierno Dumek Turbay Paz).	En el marco del plan Titán, la estrategia planteada por el gobierno de Dumek para recuperar el orden y la seguridad en Cartagena, se expide este decreto que, entre otras, decreta: “Prohíbese el consumo de sustancias psicoactivas y/o estupefacientes, en áreas del espacio público del Centro Histórico”.
Decreto 0062 de enero de 2024 de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, por medio del cual se establecen zonas seguras (Gobierno Dumek Turbay Paz).	Se establecen como zonas seguras en Cartagena, entre otras, los centros educativos, parques, plazas, centros deportivos o para la práctica de ejercicio físico, clínicas y hospitales, iglesias, centros religiosos, zonas de espacio público histórico o de interés cultural, además de los entornos ubicados a 100 metros lineales de dichos lugares. Decreta, entre otras, que “no se permitirá el consumo y porte de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana” (Alcaldía de Cartagena, 2024).

Es la policía quien se encarga de operativizar estos decretos, generándose un escenario para la violencia policial. En el 2024, ILEX Acción Jurídica realizó un informe sobre política de drogas, analizando las restricciones municipales frente al consumo de sustancias psicoactivas y sus efectos en las poblaciones afrodescendientes en Cali y Cartagena durante el primer año de gobierno de los actuales alcaldes. Al respecto advierte,

[...] con la implementación de estos decretos la administración le confiere a la Policía Nacional la potestad de realizar los controles correspondientes en los espacios públicos y los establecimientos de comercio, para que verifiquen el cumplimiento de las disposiciones. A su vez, atribuye a los agentes del orden la potestad de realizar las acciones necesarias para restablecer las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. En respuesta a posibles casos de limitaciones de derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha enfatizado a través

de desarrollos Jurisprudenciales que cualquier limitación a los derechos fundamentales debe cumplir con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. Sin embargo, se ha logrado evidenciar que muchas de las medidas adoptadas en el marco de la regulación del consumo de sustancias psicoactivas carecen de una justificación sólida que demuestre su adecuación y proporcionalidad frente al objetivo que pretende alcanzar. Creando este contexto un escenario de riesgo en la criminalización y perfilamiento asociados al consumo de sustancias psicoactivas para las poblaciones afrodescendientes dentro del territorio nacional. (ILEX, 2024, p. 4)

Y añaden:

Así mismo, se ha demostrado que este tipo de intervenciones podrían ampliar perfilamientos raciales sobre población afrodescendiente, como se ha demostrado en diferentes contextos y países. En Colombia, como en muchos países en el mundo existe una criminalización sobre la población afrodescendiente, este grupo poblacional tiende a tener más probabilidades de ser arrestados, aprendidos, requisados o criminalizados por agentes del orden, por lo tanto, las acciones municipales como lo decretos en relación con el control y prohibición de medidas en contra de la comercialización y tráfico de estupefacientes, si bien no son directas sobre un grupo poblacional, normalmente dejan a un lado la evidencia que orienta a un perfilamiento sobre la población afrodescendiente. (ILEX, 2024, p. 5)

Lo que ponemos en discusión es que estas prohibiciones sobre el consumo y porte de la dosis en Cartagena —con vicios de inconstitucionalidad— se inscriben en una política distrital de seguridad; así planteado, convierte a lxs usuarixs de drogas (negrx empobrecidx y racializadx) en criminales o les vincula a redes criminales de narcotráfico, trata de personas y otras, como se ha sugerido en los decretos expedidos en el distrito durante el 2024. Esto es de particular importancia para este trabajo, dado que, como hemos dicho, lxs jóvenes negrxs son ubicadx —desde estas políticas de seguridad— como la encarnación del enemigo interno. En este contexto, hemos planteado que —amparados en estos decretos— la institucionalidad ejerce violencia policial persiguiendo, criminalizando y prisionalizando jóvenes negrxs para producir, a través de ellxs, una percepción de seguridad.

El actual Gobierno nacional de Gustavo Petro ha proyectado un viraje en su política de drogas¹¹, abandonando la postura prohibicionista e iniciando el camino hacia un enfoque de reducción del riesgo y el daño; sin embargo, no contiene una perspectiva antirracista¹²

11. Esto no exime el hecho.

12 Agradecemos a la directora de ILEX Acción Jurídica las observaciones realizadas al respecto y que dieron lugar a los asuntos aquí sobre la ausencia de la perspectiva antirracista en el política de drogas. Básicamente, los aspectos planteados fueron producto de sus sugerencias.

que permita: a) problematizar la relación entre la política de drogas, el sistema criminal y el racismo, b) plantear acciones en materia de salud pública en zonas ocupadas mayoritariamente por población negra, en su mayoría empobrecida y c) idear acciones para combatir la criminalización del consumo recreativo en poblaciones históricamente excluida, como es el caso de las comunidades negras.

Ahora bien, aunque los avances en la política de drogas merecen estas observaciones en clave antirracista, lo cierto es que, a nivel territorial, la perspectiva frente a las drogas persiste en prohibir y criminalizar, con claros efectos en jóvenes negrxs consumidorxs

Figura 2. Artículo de prensa sobre política de drogas en la región.



Fuente: El Universal (2023).

Al iniciar su periodo de gobierno, Dumek Turbay Paz afirmó que las medidas tomadas por el gobierno Petro frente al abordaje de las drogas constituían una romantización de las libertades individuales, marcando un punto de ruptura con los cambios que se estaban proponiendo (ver figuras 2 y 3).

Figura 3. Artículo de prensa sobre política de drogas en la región.

“Ese romanticismo envenena”

A 1075 kilómetros de Bogotá, en Cartagena, el nuevo alcalde **Dumek Turbay** rechazó el decreto presidencial y aseveró que no bajará la guardia. “Cada día se la ponen más fácil a los jibaros y los traficantes de droga. Ese romanticismo sobre las libertades envenena a nuestros jóvenes y niños, a quienes debemos proteger. Lo que propone la Nación va en contravía de la tranquilidad de la comunidad y propicia que niños dañen su vida y su futuro al ver malos ejemplos en el parque. Muchas familias ya ha destrozado la desgraciada presencia de la droga en sus vidas”, expuso.

Fuente: El Universal (2023).

Esta perspectiva de prohibición se refleja en los barrios populares donde jóvenes negrxs usuarixs de drogas, principalmente de marihuana, son perseguidxs y violentadxs. Es más, en Barrios Unidos —así como en otras comunidades empobrecidas de la ciudad— lxs consumidorxs como sujetxs de derecho no existen; estas categorías son sustituidas por las de bandidxs, ladrones, marihuanerxs —igual a delincuentes—. En otras palabras, no existe otra interpretación posible del consumo por fuera del crimen; esto se intensifica con lo que hemos llamado la criminalización racializada del consumo y de quien consume.

Si bien es cierto que lxs jóvenes en general son lxs más afectadxs con estas medidas, a lxs jóvenes negrxs les antecede la criminalización de su racialidad, imbricándose una serie de criminalizaciones; de unxs jóvenes negrxs empobrecidxs de un barrio popular —con estéticas que se presumen criminales— se presumirá que son unxs ladrones consumidorxs. En el informe, ILEX (2024) advierte que, en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, en un estudio desarrollado por Human Rights Watch, encontraron que tanto las personas negras como las blancas cometen delitos relacionados con drogas a tasas similares. Sin embargo, lxs negrxs son desproporcionadamente foco de la “guerra contra las drogas”, lo que resulta en un número mucho mayor de arrestos y encarcelamientos en comparación con las personas blanco-mestizas.

Las entrevistas realizadas revelan el uso de la fuerza contra jóvenes consumidorxs, que exceden los principios de necesidad, constitucionalidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciado. En el caso de *Colombiatón*, durante la cartografía social, lxs jóvenes comentaron que algunas de las geografías barriales que más están expuestas a violencia policial son aquellas que han sido marcadas como zonas de “viciosos” en determinadas horas: las canchas, algunas esquinas (la esquina de la manzana 2 en el barrio *Colombiatón*) y las zonas alrededor del caño *Flor del Campo*. También, aquellas zonas alejadas en motas donde lxs jóvenes se ubican para no ser vistxs; sin embargo, algunxs actores sociales, como vecinxs, líderxs comunitarixs y fundaciones (entre esas, la fundación Santo Domingo), hacen llamados a la policía para que intervenga esos espacios y los higienice.

En la cartografía social realizada en *Flor del Campo*, lxs jóvenes manifestaron que lxs consumidorxs han configurado algunos espacios para el consumo donde sienten que no afectan a lxs demás miembrxs de la comunidad y pueden permanecer segurxs sin estar expuestxs a violencia policial frecuente. Entre estos se encuentran los lotes baldíos que colindan con el vecino barrio El Pozón y Bicentenario, así como en uno de los escenarios deportivos que se encuentra en estado de abandono institucional hace aproximadamente cuatro años, el cual está ubicado cerca de las trochas que dividen *Flor del Campo* del barrio El Pozón. Sin embargo, estos espacios no están exentos de ser vigilados e intervenidos por la policía, aunque no se haga de manera frecuente, y cuando lo hacen, usan de manera desproporcionada la fuerza.

Este fue el caso de Javier, el relato más disiente sobre la violencia policial que responde a la criminalización racializada del consumo y el consumidxr. Sobre Javier la policía ejerció agresión física desproporcionada y estigmatización al hallarlo en uno de esos espacios consumiendo marihuana (que no excedía la dosis personal).

Yo soy una persona que desde muy chiquitico me ha gustado el trabajo, el empleo. Una vez yo estaba con un amigo por acá por la parte de atrás en el hospital, fuimos para allá atrás, para lo último, porque me gusta fumar me mi weed [marihuana], porque eso no es vicio para mí. Me gusta. Como me gusta el viaje de mi música, soy músico también, cuando me pegaba los dos weed me montaba en la nota y hacía las cosas mejor. Una vez fui por allá, por la parte de atrás del hospital, por lo último, por los potreros, para no perjudicar a nadie, ahora ustedes están sabiendo que yo consumo esto, pero la gente ni sabe que yo consumo, trato de hacerlo así para que la gente no me mire con esos ojos. Y para que tampoco perjudique a los niños pequeños. Apenas íbamos a aprenderlo. Hermano, de repente, no sabemos



de dónde llegaron esos dos uniformados. No nos pidieron ni requisar, nada, sino que enseguida fueron sacando el bate, el palo ese que ellos usan y dándonos batazos. Primero, le pegaron en las costillas al compañero. Ahí nos sacaron pistola, enseguida: “¡Quieto ahí, agáchense, acuéstense!”. Mano, nos pusieron a acostarnos donde había un poco pringamoza. Y eso solo por allá. Ese policía que les voy a decirle el nombre, acá en *Flor del Campo* le dicen el Muñoz. (Javier, comunicación personal, diciembre del 2024).

La política de seguridad, vinculada a la regulación del porte y consumo, parten más de la criminalización que de evidencias que soporten esta relación (inseguridad-consumo de la dosis). Al respecto, estudio de ILEX (2024) retoma una sentencia de la Corte Suprema que cuestiona esta asociación.

La Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SP-2940 de 2016 abordó el caso de un soldado encontrado con 50,2 gramos de marihuana. La Corte determinó que el consumo de estupefacientes no tiene la potencialidad de afectar bienes jurídicos ajenos como la salud pública o la seguridad jurídica, siempre y cuando la finalidad de las sustancias sea su uso personal y no el tráfico [como era el caso de Javier]. Reafirmando la despenalización del porte de dosis mínima, pero también aclaró que el porte de cantidades que superan levemente la dosis mínima no necesariamente implica conductas punibles. Introduciendo en este fallo el criterio de la nimiedad lesiva, diferenciando entre cantidades que pueden ser consideradas para consumo personal y aquellas que claramente exceden lo necesario para uso individual y podrían indicar tráfico. Finalmente, la Corte con la sentencia C-127 de 2023 reafirma su posición sobre la no penalización del consumo personal de estupefacientes, destacando que las medidas punitivas deben centrarse en conductas relacionadas con el tráfico y la comercialización ilegal de drogas. Además de argumentar que la criminalización del consumo personal no es una medida efectiva ni proporcional para combatir los problemas asociados al uso de drogas. (p. 7)

Como se verá en el relato ampliado de Javier, la policía fija a lxs jóvenes negrxs consumidores en una categoría delictiva que no da lugar otras formas ser y existir, sino como bandido-consumidor. Cuando Javier intentó posicionar una contranarrativa reafirmandole al policía que lo agredió que él era un joven trabajador, fue respondido con nuevos ejercicios de violencia que implicó detención arbitraria en el CAI, agresión física, tortura y comparendos injustificados (ver relato de Javier en profundidad en el siguiente acápite). Toda contranarrativa agenciada por lxs jóvenes perfiladxs, que desafía el relato único que se tiene sobre estxs como delincuentes, es interpretada por la policía como una agresión a la autoridad, entonces se vuelven contravenciones, de manera que lxs jóvenes no puedan fugarse a la fijación criminalizante que la institución produce.

Violencia policial como acto de castigo social e institucional

En las dinámicas barriales que habitamos, hemos encontrado que la violencia policial goza con cierta legitimidad comunitaria cuando se ejerce contra jóvenes que son definidxs desde el lugar del crimen y, por lo tanto, se les despoja —social e institucionalmente— de su estatus ciudadano. Entonces, estxs jóvenes no se hacen defendibles.

En discusiones en el equipo, así como con diferentes actorxs comunitarixs, hemos identificado que una de las razones que conduce a esta legitimación se vincula a la interpretación de la violencia policial como un acto de castigo dirigido a jóvenes que se definen como “desviadxs” o “desadaptadxs sociales”. Jóvenes que, desde esta perspectiva, no son social y económicamente funcionales.

Cuando éramos pequeñxs y no queríamos obedecer a lxs adultxs, nos amenazaban con llamar a la policía. “¡Voy a llamar a la policía!”, nos decían nuestras madres, abuelas o tías; una amenaza ficticia cuyo mensaje posicionaba a esta institución como una autoridad masculina intimidante que interviene para corregir cuando la familia ha perdido su capacidad de ejercer esta autoridad. Desde pequeñxs hemos sido educadxs para temerle a la policía.

Ahora bien, hemos encontrado —a partir de las entrevistas y las cartografías— que la comunidad otorga el lugar de autoridad a la policía para dos asuntos fundamentales: i) tramitar conflictos comunitarios que han escalado al uso de la violencia física y ii) como una forma de castigo frente a prácticas que consideran desviadas o disfuncionales, como el consumo de marihuana, legitimando y justificando el uso de la agresión física, quizá bajo el imaginario cultural que “la letra con sangre entra”.

Reflexionamos sobre si era una práctica de corrección o de castigo; sin embargo, consideramos que es la segunda porque lo que se procura es que el joven experimente el dolor de su desviación, puesto que no se espera que cambie. Como decíamos, en términos necropolíticos, el consumidor —criminalizado— es interpretado como un muerto viviente.

En la cartografía realizada con jóvenes de Flor de Campo, uno de ellxs comentaba:

Yo viví un momento horrible... Yo estaba en la esquina y me llevaron para el CAI y me dieron lo último en palera [excesiva agresión física], llegaron cuatro manes bien tabluos [grandes] y me daban trompas y cachetas. ¿Cuál crees que fue la razón? Algún vecino lo llamó porque estaba fumando, hay veces que los vecinos le tienen rabia a uno, que los llaman y les dicen que uno está fumando o vendiendo, ellos [la policía] no preguntan ni nada, van llegando y van esposándote, requisándote. Si tienes plata te la roban, si tienes tus cadenas, tus prendas de oro o de lo que sea te las parten, te las fuman y quedas fumado [robar] y a quién vas a reclamarle. (Cartografía social en *Flor del Campo*, comunicación personal, octubre del 2024)

Se ha popularizado en el barrio que en el CAI de policía de *Flor del Campo* hay un espacio que le llaman “El cuartico”, comentaban lxs jóvenes en el ejercicio de cartografía; aquí ingresan a lxs jóvenes para agredirlos físicamente. En “El cuartico”, opera la agresión castigadora; de manera que, cuando estxs jóvenes son castigados, la comunidad que criminaliza se exorciza a través de esta agresión física, verbal y psicológica. Cuando hay conflictos barriales intervenidos por la policía, lxs jóvenes corren porque saben que si son capturados los llevarán a este lugar.

Ese día yo corrí [en medio de una pelea que observaba] para que no me atraparan, para que no me llevaran al CAI. Yo he escuchado lo que hacen cuando los llevan al CAI. Entre todos [policías] vienen y pegan, después los ponen ahí, todos los que van entrando de turno, les pegan. Camilo, el amigo mío, me contó. Un policía lo agarró viendo pelea. A él le echaron la policía, una señora le dijo que él estaba peleando y lo agarraron, a él y a otro amigo, y se lo llevaron para el CAI. El policía lo agarró, lo montó en la moto, se lo llevó al CAI y cuando entró le comenzaron a pegar, le daban patadas, con bolillos, con agua. He visto antes que le han pegado bastante a la gente. (Jorge, comunicación personal, diciembre del 2024)

El cuartico del terror, como le llamo yo. El cuartico del terror es el cuarto donde meten a toda la gente que llevan para allá [al CAI] a cascarlo. Yo tengo amigos que me han dicho que cogen y les ponen un libro en el estómago y le pegan trompa’ al libro para que no les queden los moretones, para que sientan el dolor, pero no queden los moretones o le ponen

un libro en la espalda y en el libro empiezan a pegarle con palos. Los cogen por el cuello hasta el momento de llevarlos al límite, llevarlos al momento en que ellos saben que pasan diez segundos más y los pueden matar. Me han contado esas cosas, que los llevan hasta el límite donde ya la persona está prácticamente por perder la conciencia. Hubo un pelao que le hicieron eso y que él estaba ya durmiéndose, porque no le pasaba oxígeno, ya estaba prácticamente durmiéndose, lo soltaron y él quedó privado. Y empezaron a golpearlo por la cara para que el pelado despertara, porque creyeron que lo habían matado. (Víctor, comunicación personal, diciembre del 2024)



Hay un cuartico que la cámara no ve, cuando te meten ahí te dan lo último en muñequera [golpes]. Con el cuarto todo lleno de sangre te ponen a ti todo partido a limpiar todo eso. Si se les parte algo mientras te están pegando, todo eso te lo ponen a pagar a ti. (cartografía social en *Flor del Campo*, comunicación personal, octubre del 2024)

Ocurre también que, frente a hecho delictivos —hurto, por ejemplo—, la policía no sigue el debido procedimiento, sino que ingresa al infractor al CAI de *Flor del Campo* para agredirlo físicamente y, posteriormente, le ponen en libertad. Así, la policía se establece como máxima autoridad castigadora para regular la vida social y comunitaria.

Los cogen [la policía], los encierra en el CAI, les quitan el robo, y hermano, y esos salen como un monstruo, esos pelados salen como un sapo, como el perro cuando se comen un sapo, dicen que el perro come sapo que se pone pipón, así, hinchado, por todas partes los pelados salen hinchados [con rabia] porque los pelados hacen lo indebido también, se cogen las cosas que no deben y atracan a la gente. Entonces, los policías hacen un mal procedimiento, hermano, con esto yo no tengo nada en contra de aquellos policías porque sé que hay unos que hacen las cosas bien, pero como se dice por ahí por justos pagan pecadores ¿cierto? Esa es la palabra por justo pagan pecadores, entonces ¿qué pasa?, que ellos los cogen, les quitan el robo y les pegan una golpiza, salen esos palados hinchados. Ellos me han dicho: “¡me dio bien duro por la cabeza y que porque no robo nada bueno!”, o sea, es una corrupción grande, hermano. Están sucediendo muchas cosas en estos barrios humildes muchas, cosas, hermano, donde se ve el maltrato verbal, el maltrato físico, donde se ve, hermano, la corrupción, hermano. A mí no me puede caberme en la mente de por qué tienen que ser estos policías así con la comunidad, en vez de cuidarnos, porque ellos están aquí para cuidarnos, lo que hacen es dañarnos más Ellos cogen un palo de estos, van a maltratarlo. El palo qué va a hacer, vuelve y roba. Le quitan el robo, el palo vuelve y roba. Lo maltratan, pero vuelve y roba. Entonces, es una problemática bastante delicada. Y hay veces que uno por hablar estas cosas, hasta se perjudica. Dicen que somos revolucionarios. ¿Sí me entiendes? Y hasta ellos mismos pueden hacerla hasta la vuelta uno [riesgo de ser asesinados]. (Javier, comunicación personal, diciembre del 2024)

Ellos se burlan de esta manera, ya te soltaron [del CAI], entonces te ven caminando por ahí y los mismos que te llevaron se te acercan: “¡Qué! ¡¿Quieres que te lleve otra vez para allá?!”. Ya a uno le da miedo de andar por ahí. (cartografía social, barrio *Flor del Campo*, comunicación personal, octubre de 2024)

Al respecto, Víctor comentaba que un daño que ha producido esta institución es instalar el imaginario en la comunidad de que esta violencia es necesaria.

Siento que se ha metido en las cabezas de la gente que si la persona se ve de tal manera, es justificable que la policía les pegue. Entonces, creo que se ha reproducido ese imaginario en las cabezas de la gente de *Flor del Campo* y de la gente de toda esta zona, que si el pe-lao está peleando, el policía tiene derecho a matarlo. Entonces esas son ideas que las tiene la policía y que se la metió en la cabeza a la gente y la gente justifica el hecho de que el policía mate a otro. ¿Por qué un policía justificó que mató a Harold? Porque él estaba peleando y que le sacó un arma, cuando no encontraron nada. Entonces la gente ve como la policía es instrumento para guiar por el camino y corregir. (Víctor, comunicación personal, diciembre del 2024)

Conforme con lo anterior, parte de la complicidad social con la que se ejerce esta violencia es producto de un trabajo cultural de instituir la como necesaria, aunque dicha violencia —como manifestaba Javier— no ha demostrado prevenir y eliminar el delito.

¿Por qué las víctimas no denuncian?

Queremos cerrar este acápite precisando, con brevedad, algunos de los argumentos que han emergido en las entrevistas sobre la no denuncia. Encontramos que, principalmente, no denunciar constituye una acción de protección por parte de las víctimas, puesto que se confronta el poder armado legal —e ilegal— de la policía y las víctimas sin poder social, económico o político (y cuyas vidas son vistas como “nudas vidas”). En caso de denunciar, las víctimas y sus familias son víctimas de amenazas, que producen desplazamientos forzados internos en la ciudad.

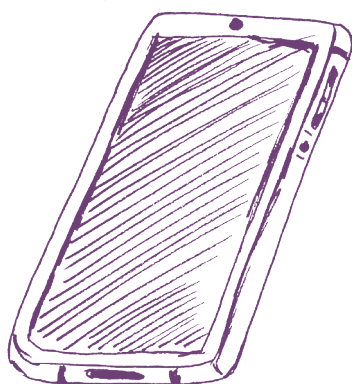
Por un lado, están las víctimas que consideran que la denuncia es inútil, dadas experiencias anteriores que así lo han demostrado.

[...] no llegué a hacer ninguna demanda porque a veces digo como que uno pierde el tiempo ya. A mí cuando, o sea, cuando de eso, la muchacha a la que le digo, a la que le contaron la cara [la policía], eso fue mucho antes de pandemia, de todo, fue mucho antes. O sea, y ella demandó, salió noticiero y eso quedó en nada. Paso todo eso, con rabia con rabia porque yo digo, ellos hacen, ellos hacen y nunca uno se puede defender de ellos. (Teresa, comunicación personal, diciembre del 2024)

Por otro lado, está el poder de asesinar que tiene la policía, vuelta poder soberano en el barrio en muchas circunstancias. Este poder armado es tanto legal, como ilegal. Así lo plantea Javier.

[...] hasta ellos mismos pueden hacerla hasta la vuelta uno [denunciar]. Porque hasta eso. Porque ahora tienen una cosa, que andan con la pistola y andan con la de ellos personal. Con la de personal es con la que matan. Mano, estas cosas se tienen que hablarse. Eso es lo que siempre nos muestran. Cada vez que usted escuche: “¡No que los policías mataron a algunos!”. Eso no es la pistola de la policía, porque ellos saben que les llega una investigación. Ellos saben que tienen que rendirle cuenta a la policía. ¿Si me entienden? Ellos saben. Ellos saben cuántas balas tienen y de qué proyectil fue que salió. Ellos lo saben, ellos lo saben. O sea, andan con la de ellos, la personal, con esa es la que hacen lo que hacen. (Javier, comunicación personal, diciembre del 2024)

Justo por estos relatos afirmamos que estos son “jóvenes en riesgo”, en riesgo de ser asesinadxs por la policía.



RELATOS DE VIDA
SER UN JOVEN NEGRO
DE/EN BARRIOS UNIDOS



Criminalización de las estéticas, violencia e hipervigilancia de jóvenes negros

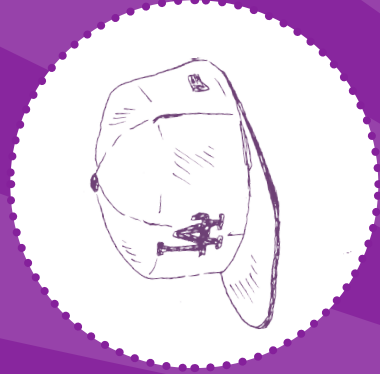
Decía Frantz Fanon (2009):

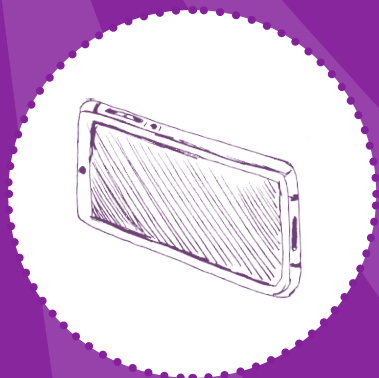
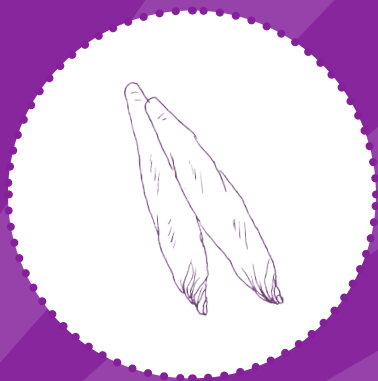
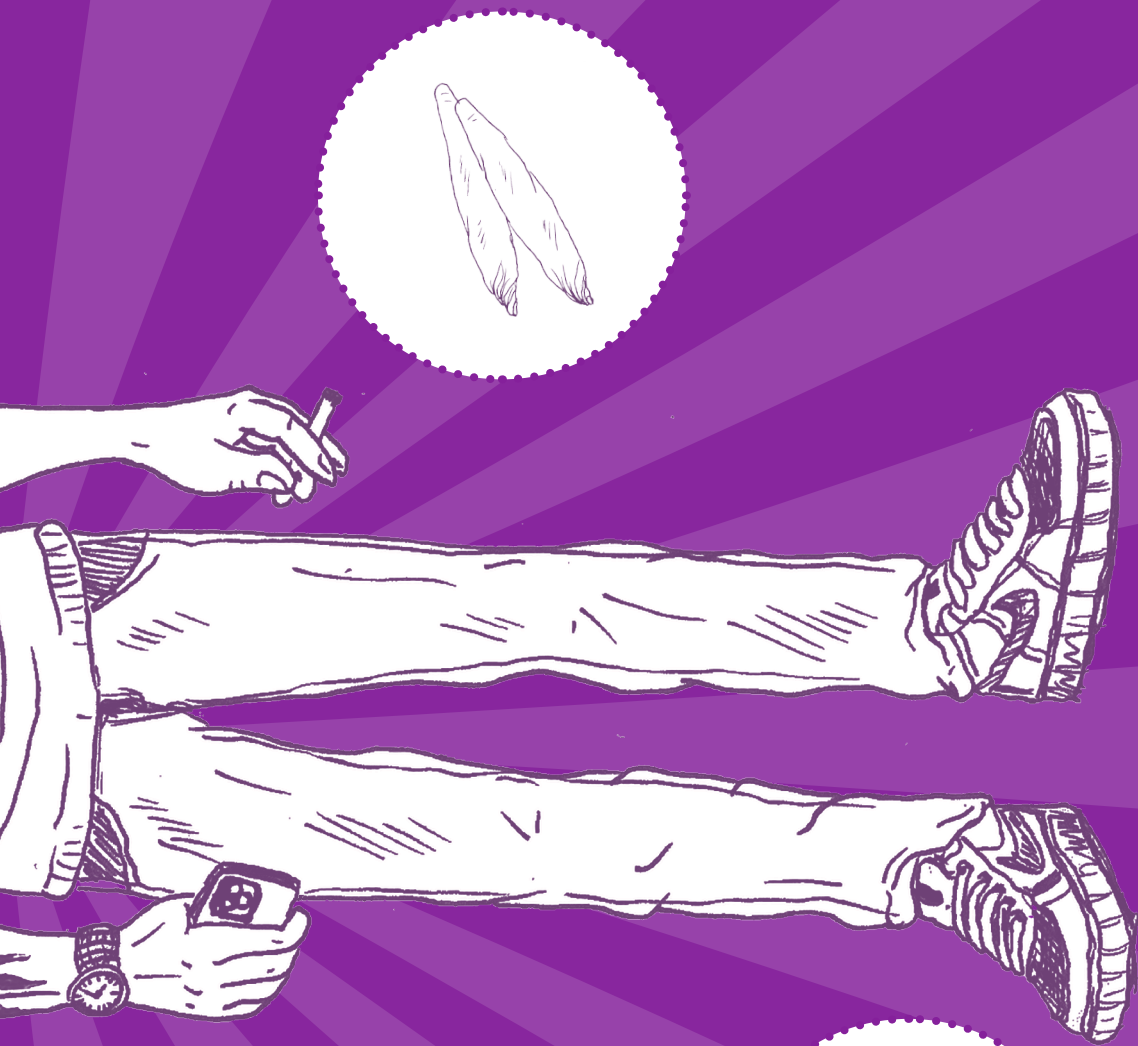
la ropa interior del negro huele a negro, los pies del negro son grandes, los dientes del negro son blancos, el gran tórax del negro, me deslizo por los rincones, me quedo silencioso, aspiro al anonimato, al olvido. Basta, pues ya lo acepto todo, pero déjenme pasar desapercibido. (p. 96)

Ese es el problema, lxs jóvenes negrxs no pueden pasar desapercibidxs, siempre son vistxs por la policía. Su negritud es su visibilidad y su sentencia de muerte. En el marco de la cartografía social, realizamos un dibujo sobre las estéticas perseguidas por la policía. Al respecto, lxs jóvenes negrxs señalaron que cuando ellxs portan gorras, tatuajes, pelo largo, ropas anchas, son más susceptibles de perfilamiento. Igualmente, llevar prendas de oro, zapatos de marca (Adidas, Nike), así como celulares de alta gama, les vuelve objeto de hipervigilancia, puesto que se presumen que lo obtuvieron a través del robo.



¿A QUIÉN PERSIGUE LA POLICÍA?





Andrés

Soy Andrés, un joven de 21 años, habitante del barrio *Colombiatón*. Mi familia es afrodescendiente, pero también provengo de pueblos indígenas de Córdoba. Antes de vivir en *Colombiatón*, vivía en el barrio San Francisco, a pocos minutos del norte de la ciudad. Cuando llegamos a este barrio el transporte no era tan fácil, era vivir lejos. Vivir alejado de la sociedad. Nosotros estábamos acostumbrados a tener el centro cerquita, coger un colectivo de mil pesos, llegar al centro, llegar al mercado, y con las mismas devolverse por mil pesos. En mi tiempo de 15 años, mil pesos costaba un colectivo. Cuando ibas con uniforme hasta 500 pesos te cobraban. Entonces, nos vinimos para acá y eso fue un cambio. Llegamos a *Colombiatón* y no había nada; ahora es que está creciendo un poquito. Ni transporte, ni centro de salud, nada. Ahora hay un medio centro de salud. Yo estaba en mi juventud en ese tiempo, en el que uno quiere estar cogiendo de aquí para allá y cuando llego, eran las mismas cuatro paredes, los mismos barrios, la misma gente. Yo sentí insatisfacción. Y acá también había problemas, había peleas, como que, si nos hubiesen echado para acá, para que los pelaos se mataran lejos de centro histórico. Pero me fui haciendo a la vida aquí.

Actualmente, soy albañil. Antes de pandemia trabajaba en cocina en Bocagrande, en el sector turístico. Pero en pandemia hubo muchos cambios y cerraron restaurantes; entonces, dejé de trabajar ahí. Me salió una chambita de albañilería y me quedé ahí porque no tuve más opción. Desde que trabajaba en Bocagrande recuerdo mis primeras experiencias de agresión de la policía. Como dice la frase popular, “yo no puedo salir porque los tombos se enamoran de mí”. A mi pasa mucho, bastante. Me ha pasado en el centro, en Bocagrande cuando trabajaba en el restaurante.

Cuando hacía turnos de noche, que me tocaba salir a las 12 a. m. yo salía del restaurante a buscar el transporte a la esquina o a la Olímpica [supermercado]. En ese trayecto, muchas veces, me paraban los policías, me pedían requisa, me pedían explicaciones. A veces, eran hasta los mismos policías que ayer me habían parado, me paraban hoy también y me tocaba responderle las mismas preguntas. Yo digo que más que todo por mi forma de vestir, porque a mí siempre me ha gustado la gorra, tener mi pelo largo, usar aretes, cadenas. Entonces, yo no sé, siempre veía como que se enamoraban o intentaban ver si yo estaba haciendo otra cosa o si era verdad que yo trabajaba en el restaurante y cosas así.

Muchas veces me llegaron a agredir. Muchas veces. Yo le tengo más miedo a la policía que a los mismos bandidos porque para ellos tu físico no representa una persona que acaba de salir de trabajo. Muchas veces me pasó en el Transcribe [sistema de transporte masivo], muchas veces me pasaban



cosas que como que ellos no pensaban que yo venía del trabajo. A mí me tocaba a veces sacarles el uniforme, mostrarles el carnet. A mí un día me tocó encuermarme en Bocagrande, prácticamente, porque los muchachos estaban como buscando drogas, no sé. Estaban groseros conmigo, me tocó vaciarles el bolso, quitarme la pantaloneta que llevaba, sacudirme la vaina [sus genitales] quedé encuero, entonces ellos al ver mi actitud lo que hicieron fue pegarme dos cascascos en la cabeza, prender su moto e irse. Eso no le pasaría a un turista.

Ese día, salimos de turno como a las 4 p. m. compramos una sixpack de cerveza unos meseros y yo, y nos pusimos a beber ahí en la orilla de la playa como cualquier turista, como cualquier persona, 4 de la tarde. En ese transcurso, nos dieron las 6 p. m. y llegó una muchacha que yo atendía en el restaurante, una turista. La muchacha como no conocía a nadie, se pegó con nosotros. Fuimos a la Olímpica, compramos más cerveza y esas cuestiones. Ella se pegó con nosotros. Ahí los policías llegaron donde estábamos nosotros, los compañeros míos, los meseros estaban uniformados, yo no, yo me había cambiado. Llegaron a hacernos preguntas, pero lo hacían como de manera despectiva, como “¡qué ustedes qué hacen aquí, ¡qué hacen con ella, ¡qué le están dando a ella!”. Cosas así. Y pues ahí yo como que me desesperé un poco porque yo estaba entendiendo el doble sentido que ellos estaban utilizando. Por eso me quité la ropa y les sacudí la pantaloneta delante de ellos, sacudí mi pantaloneta, vacié el bolso en la arena de la playa y todas esas cosas para que vieran que yo no traía nada. Ahí los policías se exasperaron, me pegaron dos cascascos. Nos pidieron identificación y esas cosas, ella sacó una licencia de armas de Canadá, porque ella era de Guatemala, pero vivía en Canadá. Al ellos darse cuenta que [sic] la muchacha era de otro país, o sea, que venía de turista y esas cosas, como que recapacitaron y pensaron que de pronto podían tener un problema, por eso decidieron montarse en su moto e irse, pero ya me habían pegado. Ellos estaban patrullando, fueron dos, ellos tenían sus cascascos; uno tenía su casco puesto y el que se quitó el casco para pegarme tenía un pasa montañas. Tenían el chaleco antibalas por fuera el uniforme, así que no se le veía apellido, no se le veía número y como ellos hicieron lo que hicieron y arrancaron con su moto y se fueron, uno a veces no puede marcar bien o aprenderse bien las cosas.

Me sentí impotente. Me dio tanta rabia que yo me fui para mi casa. Yo agarré el primer Transcribe que pasó y me fui. Los muchachos no querían que yo me fuera, querían que me quedara con ellos, pero ya se me había como dañado el día, ya no quería estar ahí en Bocagrande. Yo dije “me puedo buscar un problema” o ellos se pueden devolver y hacerme otra cosa. Entonces, yo me fui para mi casa, me dio impotencia y, sinceramente, hasta miedo, porque ya yo decía de pronto me pueden hacer algo y eso puede quedar así.

Teníamos esa costumbre, una rutina con los dos compañeros que eran dos meseros y yo, cuando teníamos el mismo turno y salíamos, ellos con sus propinas, o sea, con lo que nos daban de propina a nosotros en el restaurante comprábamos un sixpack de cerveza para bebernos dos e irnos para la casa. Ya después de que a mí me pasó eso, no lo hice más, ya cogía directo para mi casa. Apenas salía del trabajo cogía mi bus y me venía. Claro, después de

ese caso me han ocurrido varios, he tenido varios incidentes. Yo trabajé en Bocagrande en ese restaurante como unos dos años y en esos dos años me pasaron como más de diez casos. Siempre era lo mismo, cuando salía de noche era peor, porque cuando salía de noche que luego tenía que caminar un trayecto, como medio kilómetro le pongo yo, menos, y en ese trayecto iba solo. A veces iba solo por la calle normal, buscando para ir a mi transporte, muchas veces me frenaban, me hacían preguntas, como que “¿no te creo!, ¡vete para tu casa!”. Y me tocaba mostrar el carnet, mostrar mi uniforme y darles hasta ubicación de dónde era que yo trabajaba para que pudieran dejarme quieto.

O sea, este tipo de violencia no les pasan a los humanos. Claro, es que es una cuestión como de que ellos saben qué pelao [joven] es de barrio y qué pelao no es de barrio. Entonces, como que lo ven a uno, no sé si es la forma de vestir, no sé si es la forma de caminar, la forma de actuar o la forma de hablar. Pero ellos conocen, ellos saben quién es barrial. Ellos no paran un pelaito de Manga en Manga, ellos no paran un peladito de El Bosque en El Bosque, ellos no van a parar un pelao, de pronto un blanquito, un blanquito que esté en la playa, ellos van a decir: “es un turista que está disfrutando, es un pelado de plata que está acá disfrutando². Entonces, la cuestión es muy diferente cuando tú vas a playa, cuando tú estás en el centro, siempre sientes como que todos te miran.

Desde que tuve esos incidentes con ellos, yo cuando los veo, yo me les alejo. No me gusta estar al lado de un policía. A mí no me gusta estar al lado donde están haciendo un procedimiento. No me gusta pasar por donde están haciendo un retén. No me gusta. Puede que yo no le deba a nadie, que yo no esconda nada, pero no me gusta. Porque yo siento que de pronto por cualquier palabra mal dicha, o mal interpretada, puede venir un acto de violencia hacia mí.

Muchas veces he ido caminando y lo que me han dicho es “¡pelao tú para dónde vas! ¡Tú lo que vas es a comprar droga para un golpe!”. Y se van en su moto, ellos utilizan eso, vienen y te advierten. El año pasado, para noviembre, yo estaba sentado en una esquina con el compadre mío, estábamos viendo videos en el teléfono y hablando, cuando sentimos que llegaron como diez motos de cascos negros. Ellos apenas se bajaron de la moto fue apuntándonos con las pistolas: “¡No que ustedes van a correr”, ¡que no sé qué! Como me había pasado el caso, yo tomo una actitud como a la defensiva. ¿En qué sentido? En que lo que ellos decían yo trataba como de no hablar tan fuerte, de no ofenderlo. Ese día no nos maltrataron físicamente, pero sí verbalmente, porque nos decían cosas como: “¡Ustedes lo que son es pandilleros, mírense las caras de pandilleros!”.

No es lo mismo encontrarte con un policía de buen humor, a encontrarte con un policía de mal humor. No es igual, porque muchas veces el mismo policía que hoy te dice “buenas tardes, compañero, me permite una requisa”, el mismo policía que al día siguiente llega, te tira contra la pared, te pone las manos en la cara, te requisa de mala manera, te quita tu plata y se va. En ninguna parte estoy seguro. Si no es pelea, es la policía; si no es policía, te atracan; si no, es el sicariato. El barrio no es seguro ni en mi casa. Tú no sabes si se van a meter a tu casa y te van a matar. (comunicación personal, diciembre del 2024)

Criminalización del consumidor

La canción de Vic Padilla, integrante de nuestro equipo de trabajo, titulada “No pueden ver”, haciendo referencia a la violencia policial, bien dice:

*No pueden ver a pelao
parchao fumándose una weed
no pueden ver un rapero
en la esquina siendo free,
no pueden ver a un artista rayando tranquilín,
porque se hacen los rudos
y se les ancha la nariz.*



Así le ocurrió a Javier, dos policías lo vieron fumándose una weed, entonces fue víctima de su violencia.

Javier

Soy Javier, una joven afro de 29 años. Actualmente, trabajo como vendedor ambulante vendiendo bolsas de basuras, vendo puerta a puerta. Vivo en *Flor del Campo*, pero vengo del barrio La Brisa. Por allá siempre había peleas con un barrio que se llama La Pajarera, eran bastante jóvenes los que peleaban, siempre se tiraban peñón y eso, pero no como las cosas que se están presentando ahora.

Y recuerdo que la conducta que tienen los uniformados contra los jóvenes, más con la raza negra, es la misma. Veo que hay bastante excepción, que la policía agrede demasiado a la gente que es negra, la trata como si fueran animales. Así mismo se vivía en el barrio donde vivía anteriormente, en La Brisa. Eso se ha regresado acá [*Flor del Campo*], y hasta peor acá. Porque anteriormente tenían compasión hasta con las mujeres, pero acá no. Ahora, en este tiempo, hasta las mujeres las golpean. Y eso es lo que yo recuerdo que se ha trasladado. Como ven que de pronto los negros, se dice que son de bajos recursos y no tienen educación, por decirlo así, ellos hacen y deshacen con nosotros lo que les da la gana. “Intratan2, tanto verbal como físicamente.

Acá en *Flor del Campo* me pasó incluso un caso. Hermano, yo te lo cuento y vas a llenarte de impotencia por cómo es la autoridad, esta que se nos está presentando en estos últimos tiempos. Yo soy una persona que desde muy chiquitico me ha gustado el trabajo, el empleo. Una vez yo estaba con un amigo por acá por la parte de atrás en el hospital, fuimos para allá atrás, para lo último, porque me gusta fumarme mi weed [marihuana], porque eso no es vicio para mí. Me gusta. Como me gusta el viaje de mi música, soy músico también, cuando me pegaba los dos weed me montaba en la nota y hacía las cosas mejor.

Una vez fui por allá, por la parte de atrás del hospital, por lo último, por los potrerros, para no perjudicar a nadie, ahora ustedes están sabiendo que yo consumo esto, pero la gente ni sabe que yo consumo, trato de hacerlo así para que la gente no me mire con esos ojos. Y para que tampoco perjudique a los niños pequeños. Apenas íbamos a aprenderlo.

Hermano, de repente, no sabemos de dónde llegaron esos dos uniformados. No nos pidieron ni requisar, nada, sino que enseguida fueron sacando el bate, el palo ese que ellos usan y dándonos batazos. Primero, le pegaron en las costillas al compañero. Ahí nos sacaron pistola, enseguida: “¡Quieto ahí, agáchense, acuéstense!”. Mano, nos pusieron a acostarnos donde había un poco pringamoza.



Y eso solo por allá. Ese policía que les voy a decirle el nombre, acá en *Flor del Campo* le dicen el Muñoz.

Nos puso boca abajo hermano con el poco pringamoza en el pecho, se nos subió en el cuello, las piernas de él, las botas hermano, nos fue como una cucaracha. Primero, me cogió a “¡Malparido hijueputa ¿qué haces por acá?, perro hijueputa! ¡Están fumando marihuana, están robando!”. Y yo “¡Ey, cálmate, ¡tú qué no tiene familia!”. Erda cuando le digo así me pega el cachazo en la cabeza [con la pistola], cuando me pega en la cabeza. Yo dije: “Este man ya me va a matar a mí aquí, yo voy a revelarme para que me mate es peleando, ¡que me mate a lo mal!, porque este man le estoy cooperando y nada”. En últimas, no lo veía como un oficial ya, yo lo veía era como una bestia. Le volví a decir: “¡Ven acá tú que no tienes familia!”. Me pegó el otro cachazo. Cando me pega el otro cachazo se le monta al otro compañero también y lo coge como una cucaracha. Ahí fue donde yo me llené [de rabia] y le pego un empujón. Cuando lo empujo, me sacó la pistola, la tenía en la mano; cogió y la armó, yo le dije: “¡Bueno ven y pégamelo en la frente, hombre, así como cogiste y le pegaste el tiro a Carlitos!”.

Carlitos es un pelado por acá que cogió y le pegó un tiro en la barriga y este pelado se estaba muriendo. Le pegó tres tiros, pero el que más le afectó fue el de la barriga. Y te cuento que el anda ensuciando [deposiciones] en bolsa; lo dejó todo trastornado. No entiendo cómo un oficial hace esto; él no es apto para la sociedad.

Este hombre, me cuentan a mí, porque yo averigüe la vida de él, que le han hecho de cuantas demandas, hermano, y nunca le salen, está bien agarrado él. Todas las demandas que le ponen a él, se las atrasan. No sé qué es lo que pasa, pero este hombre no debe tener un revólver en la mano, no puede andar con una pistola por ahí. Incluso, que él mismo, cuando me estaba “intratando”, nos decía: “¡Yo sí soy bandido de verdad, yo sí soy bandido!”. O sea, eso es un ogro, una bestia.

Cuando nos cogió allá, nos mandó a quitar toda la ropa. “¡Quítese la ropa!”. Hermano y yo con una pistola, a usted que lo estén amenazando. Salimos en bolsa, nos tuvieron que prestar ropa en la orilla del barrio. Ahí nos conocen bastante, saben que nosotros somos artistas y nos hemos dado conocer. Cogí me puse una sudadera que nos prestó un valecita [amigo] que nos vio así.

En aquel tiempo recuerdo que yo estaba trabajando en una bomba en las murallas. Incluso que después de eso él me vio con el uniforme y me metió en el CAI, allá me cogió y me estaba asfixiando, me puso las esposas y me estaba asfixiando porque yo iba caminando por ahí mismo, por el CAI, iba a trabajar. Me acuerdo que [sic] iba a entrar de turno de 10 p. m. a 6 de la mañana. Recuerdo que él me vio y yo lo vi, cuando yo lo vi, al acordarme de ese momento por el que pasé con él, yo me tomé el atrevimiento, en pleno cambio de turno que ellos tenían, y le dije: “¡Ey mira, para que te fijas que yo soy trabajador!”. Y él me dijo: “¡Ay hijueputa me vienes a amenazar aquí, en mi CAI!”, y cogió y se me encimó hermano, yo me le cuadré y me cogieron entre todos, los otros policías. Yo me di cuenta que [sic] no

querían cooperar con él, pero como él tenía más mando y sabían cómo era él, ya los otros se quedaron tensionados viendo, después fue que reaccionaron, pero me di cuenta de que ellos por debajito le tienen su cariño aparte por cómo es él con las personas.

Hermano, me cogió, me puso las esposas y me dijo: “¡Ahora adentro es que me vas a guapiar [desafiar, confrontar]!”, y yo le digo: “¡Compa, si no le estoy guapiando a usted, respete hombre!”. Me dijo: “¿Respete?, qué te voy a respetar yo a ti!”. Ya a ese man, en últimas, yo no lo veía como un oficial, lo veía era como un psicópata. La gente, como me conoce a mí por ahí por el pedazo, la gente vio y todo el mundo se fue encima. Allá adentro me metió y la gente comenzó a tirar peñón porque al verme a mí, conociéndome a mí, cómo soy yo, que soy un pelao que no me meto con nadie, soy honrado y trabajador. Hermano, la gente se reveló.

Allá adentro con las esposas, atrás, cuando entré me cogió y me empujó, me caí y la cabeza me pegó en el piso, se me montó arriba, me puso el pie, la rodilla me la puso en la barriga y los dos dedos gordos me los puso en la campanita [úvula] y me hundió la campanita y me estaba asfixiando, hasta el punto de que él me vio que ya no podía más, me soltó. Me estaba asfixiando, me torturó como si fuera un guerrillero. Y así tuve que irme, me tuve que presentar en la empresa bien tarde, tuve que llevar la excusa de lo que había sucedido, conté todo lo que sucedió allá a la contadora y al administrador.

El policía me puso dos comparendos, uno por estar fumando marihuana detrás del hospital, el otro me lo puso por haberle faltado el respeto a la autoridad, y todavía tienen que estar sus comparendos ahí. La verdad es que a eso no le quito crédito, que me haya puesto los comparendos, lo que me duele es cómo va a ser posible que una persona que se supone que es la institución más grande que hay aquí en Colombia, la Policía Nacional, haya personas así como esa.

Después de eso, yo llegué al trabajo y comencé a trabajar. Y la mente, hermano, se me pervirtió porque este hombre me humilló de una manera bien salvaje. Yo lo que quería era venganza. Yo quería matar a ese policía. O sea, mi pensamiento ya no era el mismo, yo en esos momentos no era el mismo, ya la mente mía se me había transformado de una manera salvaje también. Yo quería hacerle daño a él. Ya a los demás policías no los veía lo mismo. Incluso, yo tengo un cuñado que es policía. Ya no lo veía lo mismo, porque yo mentalmente decía: “se supone que él también tiene que ser lo mismo con las otras personas”.

Llegó como que un trauma en mi vida en esos momentos. Yo cuando me acuerdo que [sic] esta noche llegué tarde a trabajar, saqué al compañero tarde, ya le había informado al patrón lo que había sucedido, al administrador. Hermano, eso es violencia. Quería hacerle daño a ese policía. Una señora, nunca se me olvida su rostro, en un carro rojo. Llegó y me notó todo caído y bajo en la silla, me pitó. Me dijo: “Niño, échame full de corriente”. Y esta señora se llenó de impulso y me dijo estas palabras: “¡Ojo, y no hagas lo que vas a hacer, tu vida corre peligro, lo que tienes en mente te va a llevar a la perdición!”. Hermano, yo siento que fue el mismo Dios. Y, en ese momento, llegó nuevamente mi espíritu y mi alma

a este cuerpo. Volvía nuevamente a ser la persona que soy hoy en día. (comunicación personal, diciembre del 2024)

Jorge

Soy un joven de 17 años, vivo en *Colombiatón*. Ahora mismo no estoy estudiando, porque tuve un problema con un alumno y el profesor me dijo que no fuera más, que si seguía yendo iba a perder el año, entonces no a servir de más nada si seguía yendo a la escuela. Yo estudiaba en Turbaco [municipio vecino, colindante con Barrios Unidos]. Ahora tengo pensando estudiar el otro año en la nocturna.

Me discriminan, me dicen que por el corte, el caminar y el hablar. Mi tía dice que me tengo que cortar el pelo para parecer un niño decente, no un bandido. Tuve un caso con la policía, estaba yéndome de una pelea y el policía llegó, me pegó con un palo en la cabeza, me pegó tres palazos con un palo de madera que traía. Yo no estaba peleando, estaba viendo; no estaba ni sucio ni mojado. Me pegó uno por la cabeza, uno en el pecho y uno por la espalda. Ese día yo corrí para que no me atraparan, para que no me llevaran al CAI. Yo he escuchado lo que hacen cuando los llevan al CAI. Entre todos [policías] vienen y pegan, después los ponen ahí, todos los que van entrando de turno, les pegan. Camilo, el amigo mío, me contó. Un policía lo agarró viendo pelea. A él le echaron la policía, una señora le dijo que él estaba peleando y lo agarraron, a él y a otro amigo, y se lo llevaron para el CAI. El policía lo agarró, lo montó en la moto, se lo llevó al CAI y cuando entró le comenzaron a pegar, le daban patadas, con bolillos, con agua. He visto antes que le han pegado bastante a la gente. No sé por qué actúan así, si ellos están aquí para cuidarlo a uno, no para pegar.

En octubre del año pasado [2023], recuerdo que estaba con mi tía aquí en la terraza tomando, llegó la policía, se bajaron de la moto, pero yo no los había visto, yo me entro a la casa y se bajaron corriendo de la moto y me agarró por el cuello. Yo le pregunté qué pasada,

me pidió requisita, le metí los brazos, las manos. Y ahí me pidió la cédula, le dije que no tenía porque era menor de edad. Como estábamos tomando ahí pensó que teníamos algo, no sé qué pensaba, porque uno estaba ahí y, de repente, llegaron. Parecían buscar algo, sospecharon porque yo me paré, pensaron que los había visto y me iba a esconder, pero yo no los había visto. Cuando subí el pie, que iba para adentro, el policía me agarró. Yo no me esperaba a esa policía así. Si se acercara normalmente a una requisita o entregarme su documento, pero con esa agresión que llegó. Eso no se debe hacer nunca.



Hubo un policía que golpeó a mi hermano, le pasó la llanta [de la moto], porque cuando están ardidos [molestos], que los hacen correr mucho [en medio de peleas entre jóvenes], que quieren agarrar a las personas y las personas no se dan cuenta, comienzan a pegar y hacer tiros a lo loco. La policía a veces llega y cuando hay una moto no se mete [un solo policía], entonces espera que venga el refuerzo para poder dividirse. Uno entra en la 4 y otro entra en la 3 [se refiere a manzanas del barrio] a corretear a la gente. Como no se dejan agarrar, se ponen a pelear con la gente. También se ponen a tirarles botellas, a hacerles tiros. Ellos no frenan la pelea; se ponen a pelear con la misma gente. A veces se meten del lado de una de las pandillas y le comienzan a tirar a las personas. Entonces, comienzan a pelear entre ellos mismos, entre la policía y la pandilla.

No sé por qué actúan de esa manera, con esa rabia. De pronto porque están cansados que nunca pueden patrullar bien, sino por las peleas. Y ahora están peleando casi todas las noches, pelean en las tardes o no pelean, y así de repente, pelean; de repente se forman las peleas. Lo que a mí me pasó no me afectó, mi mentalidad es que cuando los vea, me puedo ir cambiando de por ahí [de lugar] porque quieren pegarle a todo el mundo, porque tienen rabia. Eso es lo que aprendí, o sea, si hay peleas y ahí está la policía, me voy, me encierro en mi casa o me meto en una casa y me pongo a hablar.

La policía toma foto, y cuando hay un robo muestran las fotos que ellos tienen [para que los identifiquen]. A muchos de los que pelean les toman fotos, o sea, como para ver cuáles son los que pelean. Y para saber identificar, si en algún momento hay un robo, que no saben qué persona robó, muestran esas fotos. Ellos se fijan, sobre todo, digo yo que por la forma de vestir de pronto. Que yo vaya con mi pelo esgarbado [desgarbado], mis aretes, con un suéter así, un pantalón partido, de pronto me la tomarían a mí [la foto], pelo así pintado, o el afro. Si tú vas con camisita, pantalón elegante, el cortesito es bien degradado, bajito, y es bonito y tal, a ese no. Por el corte también. Yo digo que muchos se engañan, porque a veces piensan que uno está mal vestido, y piensan que uno es ladrón, y los que ven bien vestido son más ladrones que los que están mal vestidos.

Muchos policías no nos agreden, sino que te aconsejan, y muchos te pegan. Hay unos que aconsejan y unos que no aconsejan. Entonces, tomaría por el lado que me aconsejaran bien. Y el otro, si no me aconseja, pues lo tomaría como un policía corrupto. (comunicación personal, diciembre del 2024)

Víctor

Sí, soy un hombre negro de 25 años. Soy tecnólogo en promoción social y técnico no graduado en instalación de redes de computadoras. Trabajo como actor, a veces como cantante, a veces como productor, a veces como logista, dinamizador, de lo que salga en la semana, en el día o en el mes.

Vivía en el barrio Loma Fresca, del Cerro de la Popa. Vengo de allá por temas de reubicación. Donde yo vivía había un enfrentamiento entre dos pandillas, una se hacía llamar Los Águilas y la otra Los Calimanes. Yo era del sector de Los Calimanes; aunque tú no fueras de la pandilla, con el simple hecho de estar en esa zona de La Loma, ya tú eras Calimán. Entonces, yo era de Los Calimanes, aunque yo en mi vida peleara, porque yo tenía ocho años. Yo simplemente era un observador de ese conflicto que había. Pero, aun así, la gente me llamaba Calimán, o sea, que era de los Calimanes. Si alguien de por ahí de Santa Rita [otro barrio de la territorialidad], lo reconocía a uno, le decía: “Tú eres el hijo de fulanita” o “tú vives en Loma Fresca, no, tú eres de Los Calimanes”.

En Loma Fresca, nuestras casas estaban en alto riesgo; por esa razón, nos reubicaron para acá, porque no era apto para vivir. Sin embargo, con el tiempo, con algunas investigaciones en las que participé, con la Comisión de la Verdad, con Fe y Alegría y, por último, con Cinep en el tema de reubicación, logramos encontrar algunas cositas que nos hicieron cuestionar las razones de la reubicación, sobre por qué nos trajeron a nosotros hasta acá tan lejos de las cosas de nuestro territorio, tan lejos del centro histórico, tan lejos de la playa, tan lejos del mercado [de Bazurto] y sin transporte; nos tocaba a nosotros ir en carricoche dos kilómetros a coger un bus de Bayunca [corregimiento de Cartagena], pasar por el barro, por culebra, con mosquitos, para nosotros llegar a un punto donde pudiéramos coger el transporte.

La razón por la que estamos acá es que ese suelo donde nosotros vivíamos es un escenario de explotación turística, porque para allá se están pensando megaproyectos, para allá se está pensando hacer un montón de cosas en las que nosotros no podemos participar. Para ellos, no es conveniente que la gente que no tiene los recursos suficientes viva en esos territorios porque no es aprovechable y que, además, nuestras casitas que estaban allá afean lo que ellos quieren mostrar en esa zona. Además, que lo criminalizan a uno porque dicen que el cerro de La Popa está debilitado gracias a nosotros, gracias a las personas que vivimos, o que vivíamos, ahí.

Entonces llegamos a *Flor del Campo* por reubicación. Bueno, primero nosotros duramos un par de semanas entre el Coliseo de Combate y el Estadio Jaime Morón en los albergues, porque las casas se habían derrumbado. Duramos un par de semanas ahí y llegamos acá el 4 de noviembre de 2007 en horas de la tarde. Estaba todo esto lleno de barro, las casas sin terminar. Llegando nosotros a nuestra casa, estaba todavía el señor de la luz instalando algunas cosas adentro. Estaban las casas sin pintar, las casas eran igualitas; te podías

meter en cualquier casa. Uno todavía no se hacía al hecho de salir de una zona donde sus casas eran una separada de la otra. Acá, todas pegadas. Cuando a nosotros nos reubicaron el ejército fue quien nos reubicó y duró un buen tiempo metido en la zona, bastante tiempo y venían de manera recurrente.

Esta zona acá se hizo conflictiva. Ese conflicto que había allá [donde vivía antes] en esa zona de La María y San Francisco se trasladó para la manzana 7 y para la manzana 4 acá en *Flor del Campo*. Empieza a aumentar el conflicto de tal manera que ya no solo va entre las familias de barrios diferentes, sino que se convierte entre las manzanas. Entonces la manzana 4 con la manzana 7 empiezan un conflicto que deja un montón de gente herida, muertos, fronteras invisibles. Ese conflicto hace poquito es que se ha ido disolviendo, pero fue bastante fuerte.

Un día, yo siendo niño todavía, estaba con la bicicleta por la parte atrás del colegio y me asomé por un por uno de los calados, cuando yo saco la cabeza pegó una china [piedra] donde yo tenía la cabeza puesta. Yo lo que hago es coger mi bicicleta y salir corriendo. Yo tenía como 13, 14 años. Cuando yo voy llegando casi a la esquina, me aparecen dos muchachos. Me pregunta: “¡Tú de dónde eres!”. La pregunta que ningún hombre quiere que otro hombre le haga. “¿De dónde eres?!”; esa es una pregunta que hay que saberla responder porque si no eres de donde te conviene ser, estás en problemas. Entonces, yo lo único que le dije fue: “Yo soy de aquí, él me conoce, señálé al Chupadeo [apodo de uno de los jóvenes], él me conoce y él sabe quién es mi papá”. Pudieron fácilmente matarme ahí y no pasaba nada porque en esa zona solamente mandaban los de la 7 [manzana] y yo estaba metido. Yo simplemente me metía para la 7 cuando iba para el colegio; de lo contrario, la 7 no existía para mí.

Yo lo que he podido ver es que la policía llega y desde que llega se va metiendo. La gente aquí, en todos los barrios de Cartagena, se forma una pelea y la gente va a ver la pelea, en vez de huirle al problema. Entonces, cuando viene la policía lo primero que hace es tirarle la moto a la gente, para que la gente se caiga, para que la gente se asuste, si es de pasarle la moto por encima a alguien, por los pies, donde sea. Entonces, la manera en la intervienen es disuadir a la gente pasando la moto y haciendo disparos al aire o pegándole a la gente con la guaya, bolillo o el palo, con lo que sea que traigan; a veces llevan hasta cadenas. Y después van hasta donde está la pelea, a pegarle a los que están peleando, a hacer disparos o a llevarse, si es que cogen a alguno. Y claro, esta persona que cogen no la va a pasar bien dentro del CAI. Incluso, a veces cogen a gente que no tiene que ver con el problema y le terminan haciendo su daño allá metido en el cuartico, como le llamo, el cuartico del terror.

Yo he tenido varios incidentes con la policía, desde antes de nacer. Mi mamá vendía comida en Castillo Grande [zona norte y privilegiada de Cartagena] y llegó la policía a sacarlas de allá, les botaron las comidas; mi mamá vendía fritos con mi abuela. Le botaron todo el negocio. Mi mamá estaba embarazada de mí y se puso a pelear con los policías, y después de eso le empezó a dar un dolor. La zarandearon, tratando de impedir que les botaran los huevos y todo eso. Mi mamá me cuenta que le dio un dolor y se le salió todo el líquido. Al

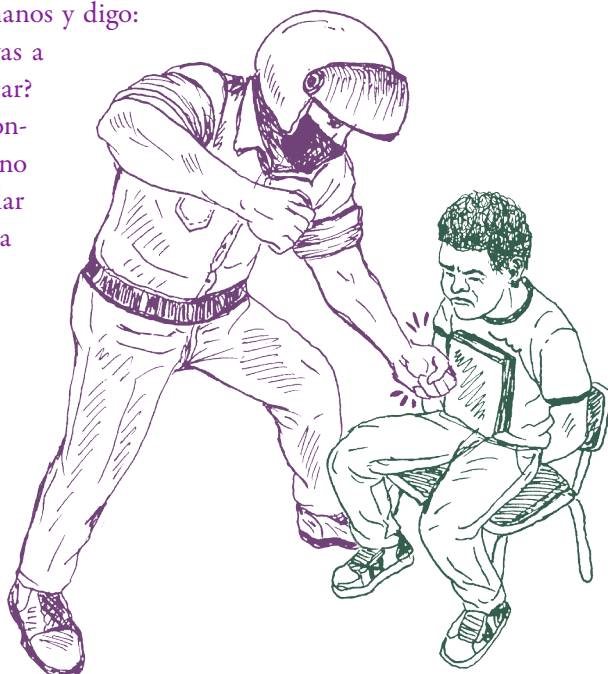
rato, la llevaron para el hospital. Cuando ella llega al hospital, le preguntan hace cuánto no sentía al niño. Y ella lo que hizo fue ponerse a llorar, y mi papá también, porque sospechaban que el vale se había muerto. Yo casi muero.

En este barrio ha habido muertos por la policía. En el año 2010, salieron unas niñas a hacer una tarea; eran como las 10 de la noche. Estas niñas salen a hacer una tarea y las atropella una buseta. En ese entonces estaba todo el barrio militarizado, había soldados en cada esquina, porque para esa época venía creo que era Santos [presidente del momento], si mal no estoy. O sea, estaban como tanteando el terreno para que el man viniera acá. Total, se formó un bololó por la pela' [niña] que atropelló la buseta, una de ellas murió ahí, la otra está viva, pero después de muchos años de tratamiento. Empezaron los soldados a hacer disparos al aire, tratando de que la gente se fuera, pero nada, la gente para adelante porque querían quemar la buseta, la movieron de un lado para otro para quemarla. A eso de las 11 p. m. se escucha: “¡No, que hay otro muerto de otro muerto!”, me cuenta un familiar mío. Hay un video donde se ve que un policía es quien le dispara. A mitad del bololó, llegó la policía y empezaron a hacer disparos a la gente. Estos no disparaban al aire, sino le disparaban directamente a la gente. Y en una bala de esas le dan en el pecho a un estudiante de grado once [undécimo grado] del Colegio Clemente Manuel Zavala. El pelao cuando va cayendo, se le acerca al policía y le dice: “¡Pelao ¿qué tienes?!”. Y cuando el pelao se quita la mano, que está el chorro de sangre en el pecho, el tombo lo suelta y corre.

En el 2017, cuando yo tenía 15 años iba en la moto de mi papá, una moto Ginger, iba con un amigo. Ese día se había ido la luz. Voy manejando la moto y al rato siento que se pega un ‘tombo’, una patrulla, y nos bloquean el paso y yo enseguida freno la moto. Yo levanto las manos y digo:

“¿qué pasa?”. Y me dicen: “¡Man qué, vas a atracar, que no hay luz, ¿Qué vas a atracar? ¿A quién vas a atracar? ¡Bájate de esa mon-dá pelao!”. Yo le digo: “Pero cálmese que no estoy haciendo nada, simplemente salí a dar una vuelta”. Me baja de la moto y se monta en mi moto, me quita la llave, la prende y dice: “¡Nojoda y es un fosforito! [porque encendía rápido] me voy a llevar este vampirito!”, y coge y se me lleva la moto para el CAI.

Yo enseguida le vengo a avisar a mi papá que la policía me había quitado la moto. Me dice mi papá: “Bueno vamos para allá”. Salimos para el CAI. Cuando



llegamos, mi papá le pregunta al policía por la moto, le dice que él la viene a retirar, que la moto tiene sus papeles en orden y que puede retirar la moto porque nadie te puede quitar una moto porque no tengas licencia. Si tú no tienes licencia, el tránsito debe ponerte un comparendo y la moto se la deben entregar a una persona que tenga licencia. Mi papá fue a reclamar su derecho, hacer el ejercicio de reclamar su moto y en el CAI un policía le dijo: #¡Ábrase aquí viejo caraemondá si no quiere que le pegue un tiro aquí en la oscuridad!”.

Pues ya después de eso, yo decidí no sacar la moto por un tiempo y recuerdo que la volví a sacar un 2 de enero del año siguiente, lo recuerdo porque fue el día de mi cumpleaños. Salí con mi hermano en la moto a comprar una trenza [cables] para poner música. Habíamos comprado la trenza, y cuando nosotros venimos por la esquina frente a nosotros hay una patrulla de policía, yo entré a mi calle, cuando yo siento la alarma esa que ellos ponen, la sirena, pero yo no sé a quién se la están poniendo. Yo no volteo para atrás, sino que me bajé de la moto. Cuando yo llego al palito de la entrada de mi casa, que hay un palo de mango en toda la entrada, siento cuando ellos sacan las pistolas. Seis motos de policía y una patrulla. Y agarran a mi hermano y a mí, ambos menores de edad, 17 y 13 años. Se bajan todos con las pistolas en mano y nos recuestan contra el palo de la entrada de mi casa.

Yo simplemente levanto las manos y ellos me dicen: “¡Entrégame los papeles de la moto!”. Y yo saco los papeles de la moto que estaban en regla todo, y se los entregó; el seguro tenía un día de vencido. Entonces, me quitaron la tarjeta de propiedad, me quitaron todo y se llevaron la moto para acá también. Yo iba allá a buscar la moto con alguien con licencia, pero me dijeron: “Esta moto no tiene seguro, esta moto no puede salir de aquí, vamos a llamar al tránsito”. Entonces el man al rato me dice que le dé 50 mil pesos y él me entrega la moto. Yo en realidad no quería que se llevaran la moto, yo cogí los 50 mil pesos que me había ganado en los días que había trabajado con mi papá y se los di. Pero la verdad me dio miedo porque yo dije qué tal que yo en un momentico estuviera más distraído y yo alcancé a entrar y cerrar la reja, me hubiera podido pegar un tiro creyendo que yo me iba a esconder o algo, algo similar a lo que le pasó a Jorge. Porque son dos negros en una moto, sospechoso para ellos. Dos pelaos negros que se ven de tal manera, para ellos eso es sospechoso. Fueron tres veces que la policía me quito la moto. Ya desde ese día no saqué más la moto de mi papá. Si yo veía a un policía, yo me devolvía o yo me bajaba de la moto, la dejaba parqueada y esperaba que ellos se perdieran, y nuevamente yo me montaba en la moto, así duraran una hora para quitarse de donde estaban; yo dejaba la moto ahí, me sentaba a esperar que ellos se movieran de ahí o si yo veía que ellos venían atrás, mi corazón tuku tuku [latidos acelerados].

En el 2024, compuse una canción que se llama “No pueden ver”, es una canción que yo escribo a partir de muchos sucesos que pasaron en la ciudad de Cartagena. Uno de los casos que me inspiró fue el caso de Harold. El caso de Harold es el caso de muchos pelaos de acá, de mi barrio, que la policía los ha agarrado en una esquina y les hacen daño. El caso de

Javier, que estaba fumando weed en un potrero y la policía no los mató porque alguien se asomó y los vio. Incluso, podrían estar desaparecidos, porque ahí mismo lo hubieran enterrado o algo. Entonces todos esos casos inspiraron a esa canción. Y también, la canción habla del tema del racismo, también por lo que me pasó a mí cuando un hotel llamado Cartagena Plaza no me contrató por mi cabello; en este hotel me dicen que yo no puedo trabajar con ellos con eso. Yo le digo: “¿con eso qué?”. “¡Con eso!”. Como si mi pelo fuera una cosa. (comunicación personal, diciembre del 2024)



**¿PUEDE SER REPARADA
LA VIOLENCIA POLICIAL?**
ALGUNAS RECOMENDACIONES



En término de recomendaciones queremos insistir, en primera instancia, que la violencia policial racista debe ser reconocida como una forma de violencia de Estado y, en este mismo sentido, se deben adelantar acciones de reparación a partir del reconocimiento de responsabilidades. En nuestro ejercicio hemos identificado que lxs jóvenes, cuyos casos hemos levantado, no plantean —necesariamente— posicionarse como víctimas individuales y gestionar, desde ese lugar, un proceso de acceso a la justicia. En primer lugar, porque, no hay garantías de protección para estxs jóvenes que siguen habitando un mismo espacio territorial con esta institución armada que tiene el uso legítimo de la fuerza. Como mencionamos en el apartado metodológico, las víctimas no quieren ser identificadas, pero sí que su relato sea conocido, visibilizado y legitimado con hechos de violencia que siguen ocurriendo en estos barrios y en la ciudad.

Conforme a lo anterior, hacemos las siguientes anotaciones en clave de recomendaciones para seguir trabajando en la prevención, atención y protección en caso de violencia policial racista en barrios popular de Cartagena.

Reconocimiento de víctimas colectivas, legitimidad de los relatos como actos de denuncia pública y levantamiento de alertas tempranas

Si bien hemos documentado casos concretos, que ocurrieron en cuerpos específicos, de lo que damos cuenta en este trabajo es la victimización colectiva en Barrios Unidos; en virtud de esto, todx joven negrx empobrecido que habite en esta zona, con estéticas que son criminalizadas y objeto de perfilamiento racial, está expuestx a ser violentadx sistemáticamente por la policía. De manera que estxs jóvenes no hablan solo en su nombre, sus relatos dan cuenta de lo que ha ocurrido y ocurre con varixs de ellxs y lo que potencialmente les seguirá ocurriendo (a ellxs y otrxs).

Así, es preciso entender —y reconocer— este documento como un acto de denuncia pública sobre lo que está ocurriendo en esta zona de la ciudad, que ha sido producto de la segregación racial y la violencia institucional. Aquí, se ofrecen insumos de valor, para que, desde el ministerio público, especialmente la Defensoría del Pueblo, se levanten indagaciones que permitan impulsar acciones de protección para lxs jóvenes negrxs que habitan en Barrios Unidos y exhortar tanto a la Policía Nacional, como al distrito, para que se adelanten las respectivas medidas de atención y reparación institucional con la comunidad. Insistimos en la premisa que titula este texto: lxs jóvenes negrxs de barrios empobrecidos y segregados

racialmente están en riesgo de ser asesinadxs por la policía. Por lo tanto, los planteamientos realizados deben entenderse como una suerte de alerta con miras a prevenir la violencia policial homicida y detener el ejercicio sistemático de agresión que esta institución ejerce contra estxs jóvenes, que viven de modo permanente bajo amenaza de muerte. Dicho esto, instamos a que se adelanten las investigaciones pertinentes y se tomen las medidas a las que haya lugar por parte de la Procuraduría, la Fiscalía y la, insistimos, Defensoría.

Procesos de esclarecimiento de la verdad en los barrios populares de Cartagena, medidas de protección y acciones de memoria

Es fundamental que la Policía Nacional reconozca su responsabilidad histórica, las prácticas violentas ejercidas y el daño causado en el ámbito local, regional y nacional. Las agresiones policiales no deben ser vistas solo desde la individualidad de quien ejerce la acción; por el contrario, debe ser comprendida desde una reflexión profunda sobre el adoctrinamiento institucional que perpetúa conductas racistas, homófobas, clasistas y patriarcales. Retomando experiencias de otras ciudades, es importante movilizar en Cartagena un **tribunal popular sobre violencias policiales racistas** que nos permita avanzar en procesos de justicia, verdad y reparación.

Por otro lado, los relatos de lxs jóvenes dan cuenta de que los mecanismos de denuncia actuales son insuficientes; además, la desprotección que experimentan las víctimas ante el poder armado de la policía impide decidan activar una ruta para la garantía de sus derechos. Por ello, deben existir mecanismos de denuncia accesibles, efectivos y seguros para las víctimas de abuso y agresión policial; esto incluye la implementación de canales confidenciales que protejan la identidad del denunciante, procesos ágiles que eviten la revictimización y un sistema de seguimiento que garantice resultados reales y concretos. Consideramos fundamental fortalecer las redes de apoyo que acompañan los procesos jurídicos y psicológico por los que atraviesan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación, asegurando que no enfrenten solas las barreras institucionales.

También, queremos enfatizar en las acciones comunitarias y simbólicas. Es verdad que algunxs jóvenes, incluso integrantes del equipo, se muestran escépticos ante una posibilidad de reparación y cambio institucional, como es el caso de Víctor.

Está difícil, está bien difícil, porque tocaría cambiar toda la institución y sus dirigentes. No sé ni qué habría que hacer porque es bastante difícil cuando la institución es la que promueve todo esto. Yo creo que no se puede hacer nada. Yo simplemente digo que no se puede hacer nada. Lo que podemos hacer nosotros es formarnos para defendernos. Porque yo creo que, así como ha pasado con otros temas, cuando haya sanciones por actos específicos, creo

que ellos se pueden limitar un poco a hacer algunas cosas. (Víctor, comunicación personal, diciembre del 2024)

Lo anterior nos sugiere varias cosas. Primero, un ejercicio de autonomía comunitaria en materia de formación para identificar casos de abuso de autoridad y desvío de poder por parte de la policía, así como activar rutas —a nivel local, nacional e internacional— cuando se presenten incidentes de violencia por parte de esta institución. Esa defensa que plantea Víctor le apuesta a una reafirmación de la comunidad como sujeto de derecho pugnando con la representación institucional de la “nuda vida” de las comunidades negras empobrecidas y segregadas.

Por otro lado, serán fundamentales las acciones de memoria y reapropiación del territorio. Esto supone jornadas de muralismo que rechacen la violencia policial y recuerden a las víctimas, monumentos barriales conmemorativos, nombrar o renombrar lugares comunitarios —sobre todo aquellos que han sido víctimas de violencia policial— de forma tal que honren a las víctimas colectivas y declaren esos espacios como libres de violencia policial. Para nosotrxs esto es esencial, porque no apelamos a las víctimas individuales solamente, sostenemos que la comunidad ha sido un sujeto colectivo victimizado por esta institución, por lo tanto, la reparación debe pensarse en ese sentido. De nuestra parte, como actores barriales organizados, asumimos nuestra autonomía para seguir trabajando en la desnaturalización de esta violencia. Esta es una forma de seguir declarando públicamente que ¡las vidas de lxs jóvenes negrxs importan!

Ampliar y barrializar las discusiones sobre la reforma de policía y la política de drogas

En los últimos años, en el marco del actual gobierno, se han desarrollado importantes discusiones y espacios con la intención de producir cambios institucionales. Como hemos dicho, dos de esos escenarios —que interpelan este informe— son la reforma a la policía y la política de drogas. En ocasiones, los debates con la sociedad civil se generan solo con actores organizados reconocidos —y moralmente legitimados—, pero no se adelantan suficientes esfuerzos para sostener diálogos comunitarios con poblaciones, en particular afectadas por las conductas de agentes institucionales vinculados a estos instrumentos (políticas/reformas), como es el caso de barrios racializados y segregados racialmente. Lxs jóvenes, como los que entrevistamos en este trabajo, no son reconocidos como interlocutorxs válidxs en el diálogo con diferentes institucionalidades. Al final, esto reproduce las representaciones que ubican a estxs jóvenes como “nudas vidas”, despojándoles de su estatus de ciudadanía.

Entendemos, de forma clara —y creemos firmemente—, en la necesidad de la organización; sin embargo, trabajos de este tipo deben permitir avanzar en la construcción de mapas de actores colectivos-comunitarios que han sido víctimas sistemáticas de violencia policial, sin que las víctimas estén necesariamente organizadas. Además, deben construirse estrategias metodológicas para establecer contactos, alianzas y generar el diálogo, darles voz legítima y, a partir de sus experiencias, fortalecer las perspectivas y propuestas para los cambios institucionales que quieren producirse. Con las debidas medidas de protección y atención, estas también son acciones que avanzan en la dignificación de los sujetos. Establecer estos espacios es reconocerle a lxs jóvenes que han sido víctimas de una violencia estatal que no ha debido ocurrir, que se deben producir transformaciones institucionales para la no repetición y que esa transformación debe ser pensada con ellxs, con sus voces como centro.





REFERENCIAS



Alcaldía de Cartagena. (11 de noviembre de 2022). Oficio AMC-OFI-0160913-202 [documento inédito].

Alcaldía de Cartagena. (19 de enero de 2024). *Alcalde Dumek Turbay oficializa Decreto de Zonas Seguras: se prohíbe el porte o consumo de sustancias psicoactivas en entornos blindados para niños, niñas y adolescentes*. <https://www.cartagena.gov.co/noticias/alcalde-dumek-turbay-oficializa-decreto-zonas-seguras-prohíbe-el-porte-o-consumo-sustancias-psicoactivas-entornos-blindados-para-ninos-ninas-adolescentes>

Acevedo, Álvaro; Correa, Andrés y Mejía, Andrea. (2022). Limpieza social: “La Mano Negra” en Bucaramanga, Colombia. *Revista Mexicana de Sociología*, 84(2), 389-416. <https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/60282>

BBC News Mundo. (5 de mayo de 201). Protestas en Colombia: qué es el Esmad, el cuestionado escuadrón antidisturbios señalado por las muertes de manifestantes en ese país. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56910574>

Cartagena Cómo Vamos. (s.f.). *Localidad 2 De la Virgen y Turística: la más poblada de Cartagena sigue enfrentando desafíos históricos*. <https://cartagenacomovamos.org/localidad-de-la-virgen-y-turistica-la-mas-poblada-de-cartagena-sigue-enfrentando-desafios-historicos/#:~:text=La%20Localidad%20es%20la%20que%20m%C3%A1s%20padece%20de%20pobreza%20en%20Cartagena.&text=Principalmente%20en%20los%20barrios%20que,Aranjuez%20y%20Flor%20del%20Campo>

Castillo, Elizabeth. (2011). “La letra con raza, entra”. Racismo, textos escolares y escritura pedagógica afrocolombiana. *Pedagogía y Saberes*, 34, 61-73. <https://doi.org/10.17227/01212494.34pys61.73>

Césaire, Aimé. (1979). *Discurso sobre el colonialismo*. Imprenta Madero.

Collins, Patricia (2000). *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Routledge. Disponible en <https://negrasoulblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/04/patricia-hill-collins-black-feminist-thought.pdf>

Comisión de la Verdad. (s.f.). *Criminalización del consumo*. <https://www.comisiondelaverdad.co/la-criminalizacion-del-consumo>

Davis, Angela. (2016). *Democracia de la abolición. Prisiones, racismo y violencia*. Editorial Trotta.

- Deávila, Orlando. (2008). Construyendo sospechas: imaginarios del miedo, segregación urbana y exclusión social en Cartagena 1956-197. *Cuadernos De Literatura Del Caribe E Hispanoamérica*, (7). https://revistas.uniatlantico.edu.co/index.php/cuadernos_literatura/article/view/477
- Defensoría del Pueblo (2020). *Alerta temprana N° 002-2020-* <https://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/AT-N%C2%B0-002-2020-BOL-Arjona-Cartagena-y-Turbaco.pdf>
- Diario de La Costa. (1 de septiembre de 1977). La Popa indefensa.
- El Universal. (27 de junio de 1986). Al rescate de la popa.
- El Universal. (11 de diciembre de 2023). “No se las pondré fácil a los jibaros”: Dumek sobre decreto de Petro.
- Estévez, Ariadna. (2018). Biopolítica y necropolítica: ¿constitutivos u opuestos? *Revista Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad*, 25(73), 9-43. <https://doi.org/10.32870/espiral.v25i73.7017>
- Fanon, Frantz. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. Akal.
- Gómez, Moisés. (2018). El racismo de Estado y el estado de excepción como respuesta neoliberal a las crisis humanitarias del siglo XXI. Biopoder y biopolítica como una crítica al Estado-nación. *Revista Realidad*, (151), 165-180.
- Haraway, Donna. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres La reinvencción de la naturaleza*. Ediciones Cátedra.
- ILEX Acción Jurídica. (2020). *¿Qué hacer en caso de abuso policial contra personas afrocolombianas? Guía de Formación en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia para Personas y Comunidades Afrocolombianas*.
- ILEX Acción Jurídica. (2024). *Política de drogas: Restricciones municipales al consumo de sustancias psicoactivas y sus efectos en la población afrodescendiente*. ILEX, Centro de Estudios para la Justicia Racial.
- ILEX, Temblores, CODHES y Raza & Igualdad (2022). *Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia*. Disponible en <https://ilexaccionjuridica.org/silencio-e-impunidad-racismo-sistemico-y-violencia-policial-contra-personas-afrodescendientes-en-colombia/>

Korol, Claudia. (2016). *Somos tierra, semilla, rebeldía. Mujeres, tierra y territorio en América Latina*. GRAIN, Acción por la Biodiversidad y América Libre.

López, Juan Carlos. (2018). Nuda vida y estado de excepción en Agamben como categorías de análisis para el conflicto colombiano. *Revista CES Derecho*, 9(2), 237-266. <https://doi.org/10.21615/cesder.9.2.4>

Lorde, Audre. (1981). Usos de la ira: las mujeres responden al racismo. En Audre Lorde, *La hermana, la extranjera. Artículo y conferencias* (pp. 137-150). Disponible en <https://sentipensaresfem.wordpress.com/2016/12/03/uial/>

Mena, María. (2016). *Racismo e infancia* [Archivo de vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=joZcrtAvpQ0>

Mercado, Daneis; Padilla, Víctor y Núñez, Wendy. (2021). De La Popa a *Flor del Campo*.

reconstrucción del proceso de reubicación de familias de Loma Fresca y La María. En Luisa Rodríguez, Juan Federico Giraldo, Leidy Perneth y Jenny Ortiz (Eds.), *Trenzar las resistencias contra el racismo en Cartagena* (pp. 129-203). Cinep/PPP.

Mesa de Reforma a la Policía. (2024). *Análisis de la implementación de la reforma policial en Colombia (2022-2024)*. <https://co.boell.org/sites/default/files/2024-12/analisis-de-la-implementacion-de-la-reforma-policial-en-colombia-2022-2024-vf-2.pdf>.

Mignolo, Walter. (2010). *Desobediencia epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad*. Ediciones del Signo.

Moreno, Kelis y Murillo, David. (16 de octubre de 2023). Las afro-reparaciones: ¿Qué son y por qué urge implementarlas? *Dejusticia*. <https://www.dejusticia.org/column/las-afro-reparaciones-que-son-y-por-que-urge-implementarlas/>

Mosquera, Claudia; Barcelos, Luiz y Arévalo, Andrés. (20007). Contribuciones a los debates sobre las Memorias de la Esclavitud y las Afro-reparaciones en Colombia desde el campo de los estudios afrocolombianos, afrolatinoamericanos, afrobrasileros, afroestadounidenses y afrocaribeños. En Claudia Mosquera y Luiz Claudio (Eds.), *Afro-reparaciones: Memorias de*

- la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales*. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales (CES).
- Patiño, Juliana. (2020). Colombia: el ESMAD frente a la legislación y la letalidad de las armas no letales. Red Internacional de Derechos Humanos. *RIDH*.
- Pereira, Isabel y Pérez, Sergio. (2024). Avances y paradojas: 30 años de la despenalización del uso y porte personal de drogas. *Dejusticia*. <https://www.dejusticia.org/despenalizacion-de-drogas/>
- Policía Nacional de Colombia. (s.f.). Manual de Operaciones Especiales. Disponible en https://www.policia.gov.co/sites/default/files/operaciones.especiales.pnc_.pdf
- Quijano, Aníbal. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Danilo Assis (Comp.), *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. CLACSO. Disponible en <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>
- Restrepo, Eduardo y Rojas, Axel. (2012). Políticas curriculares en tiempos de multiculturalismo: proyectos educativos de/para afrodescendientes en Colombia. *Currículo sem Fronteiras*, 12(1), 157-173.
- Sánchez, Dairo. (2017). El eterno retorno de la segregación. Genealogía de la clasificación-distribución racial del territorio en Cartagena de Indias. En Dairo Sánchez (Ed.), *Del otro lado de la muralla. Experiencias de educación en derechos humanos en Cartagena de Indias y San Basilio de Palenque* (pp. 21-44). Cinep/PPP, Universidad Central.
- Stolcke, Verena. (1992). ¿Es el sexo para el género como la raza para la etnicidad? *Mientras Tanto*, 48, 87-111.
- Temblores ONG. (2021). *Bolillo, Dios y Patria* [informe]. Disponible en https://www.temblores.org/_files/ugd/7bbd97_f40a2b-21f9074a208575720960581284.pdf







JÓVENES EN RIESGO

DE ASESINATO POR LA VIOLENCIA POLICIAL RACISTA

en Barrios Unidos de Cartagena

El libro “ Jóvenes en riesgo de asesinato por la violencia policial racista en Barrios Unidos de Cartagena” se terminó de editar en agosto del año 2025 en la ciudad de Bogotá, D. C., en diálogo permanente con sus protagonistas en Cartagena.

En la composición de los textos se utilizó las tipografías Garamond Premier Pro y Montserrat en distintos tamaños y pesos.

La impresión se terminó de realizar en los talleres de Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S., en papel bond de 90 g.





JÓVENES EN RIESGO

DE ASESINATO POR LA
VIOLENCIA POLICIAL RACISTA
en Barrios Unidos de Cartagena